



Responsabilidad del Revisor Fiscal

Autor: Miriam Edith Vargas Rodriguez

• • • •

Responsabilidad del Revisor Fiscal / Miriam Edith Vargas Rodriguez /
Bogotá D.C., Fundación Universitaria del Área Andina. 2017

978-958-5462-19-9

Catalogación en la fuente Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá).

© 2017. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
© 2017, PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA FORENSE
© 2017, MIRIAM EDITH VARGAS RODRIGUEZ

Edición:

Fondo editorial Areandino
Fundación Universitaria del Área Andina
Calle 71 11-14, Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (57-1) 7 42 19 64 ext. 1228
E-mail: publicaciones@areandina.edu.co
<http://www.areandina.edu.co>

Primera edición: noviembre de 2017

Corrección de estilo, diagramación y edición: Dirección Nacional de Operaciones virtuales
Diseño y compilación electrónica: Dirección Nacional de Investigación

Hecho en Colombia
Made in Colombia

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra y su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la Fundación Universitaria del Área Andina y sus autores.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Autor: Miriam Edith Vargas Rodriguez





Índice

UNIDAD 1 Normas de auditoria de general aceptación-NAGA

Introducción	6
Metodología	8
Desarrollo temático	12

UNIDAD 2 Inhabilidades e Incompatibilidades del Revisor Fiscal

Introducción	40
Metodología	41
Desarrollo temático	45

UNIDAD 3 Sistema penal acusatorio

Introducción	68
Metodología	69
Desarrollo temático	74

UNIDAD 4 Sistema penal acusatorio (segunda parte)

Introducción	100
Metodología	101
Desarrollo temático	105

Bibliografía	126
--------------	-----



Normas de auditoria de general aceptación-NAGA



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA**

Personería Jurídica Res. 22215 Mineducación Dic. 9-83

Introducción




La Revisoría Fiscal como una actividad propia de la ciencia contable que se encuentra regulada normativamente, obtiene su fundamento en el interés público y en la necesidad de que sus acciones brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos.

Por lo tanto, el estado colombiano ratifica a través del legislador (Ley 43 de 1990) las Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA), las cuales constituyen los principios fundamentales para que el revisor fiscal pueda cumplir con las funciones legales a través de la práctica de una auditoría integral. Este será el primer tema que abordará este módulo.

Acto seguido, se procederá con el tema de Ética y Revisoría Fiscal. Como menciona Peña (2011), “La ética y el buen hacer ético es intrínseco al contador público a su actuar. Es inherente a la contaduría como quiera que la honestidad, integridad y objetividad son sinónimos de equidad e imparcialidad, y sientan las bases sobre las cuales se levantan las columnas del DEBER y el HABER, que sostienen desde 1494 la infraestructura de la ciencia contable. Son portadas que franquean el acceso al hombre de bien que se adentra en el espacioso edificio de los hechos y procesos económico – financieros para conocer, registrar, controlar, evaluar, informar, analizar, interpretar y concluir” p. 238.

En consecuencia, se analizarán los principios éticos fundamentales del contador público colombiano profesional (IFAC); concluyendo con principios básicos para el ejercicio de la Revisoría Fiscal.

Acto seguido, se estudiarán las funciones del revisor fiscal como institución de origen legal de carácter profesional, que se encuentran de manera taxativa en la legislación colombiana. La Revisoría Fiscal como actividad de carácter pro-



fesional y de control integral le corresponde, bajo la responsabilidad de un contador público, desempeñar funciones de carácter imperativo y obligatorio cumplimiento. Es el estado quien decidió regular el ejercicio de esta actividad de fiscalización, y el Estado es quien enuncia las funciones, que de manera general o especial, debe cumplir quien ejerza este tipo auditoria.

Las funciones no solo se establecen el Código de Comercio, sino que se desarrollan en resoluciones, circulares, entre otras. La interpretación de estas normas abarca conceptos de tratadistas y la Orientación profesional del consejo técnico.

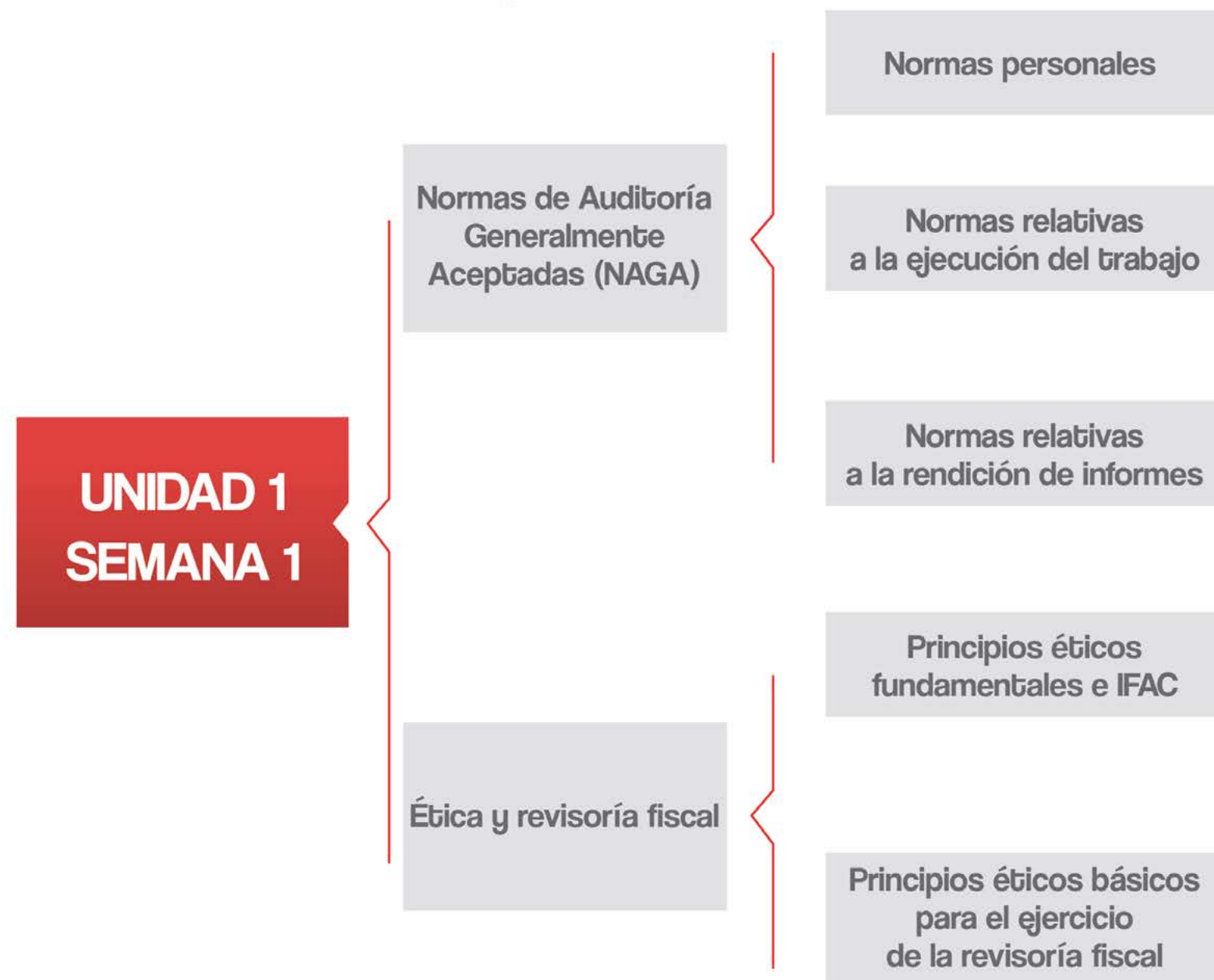
Metodología

El desarrollo de aprendizaje académico se realizará a través de las lecturas y comprensión de tres temas: 1. Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA), 2. Ética y Revisoría Fiscal y 3. Funciones y obligaciones del revisor fiscal en la ley colombiana.

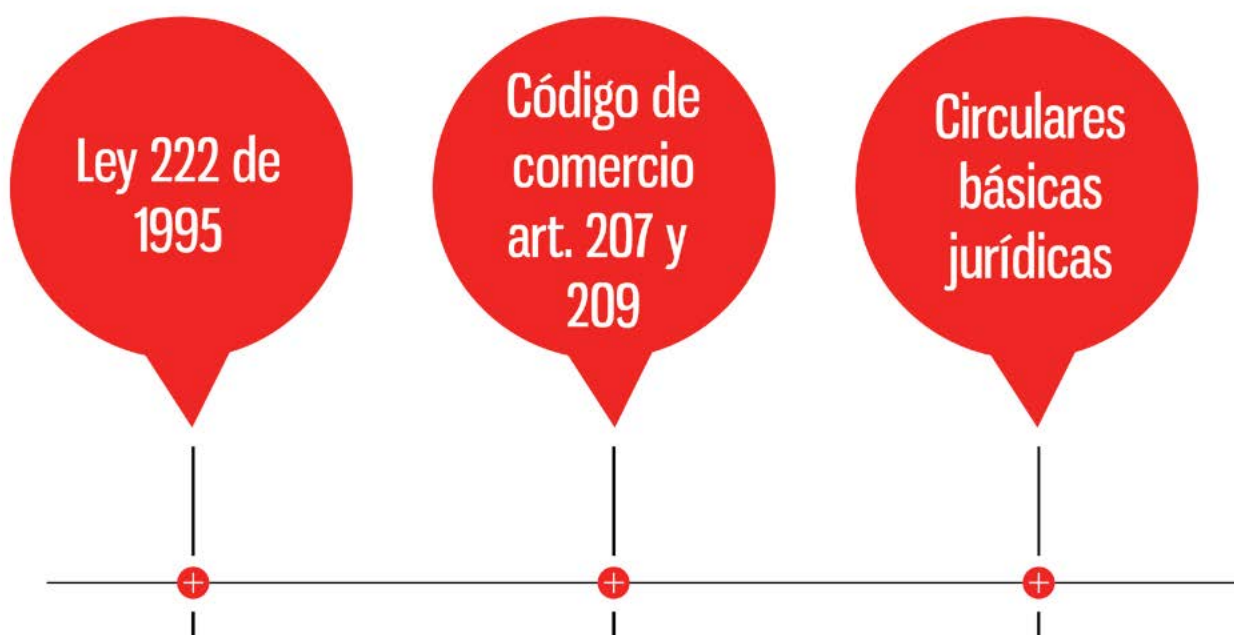
A partir del material guía de estudio, se explicará de manera detallada la composición de cada tema a través de subtemas y referencias de tratadistas expertos en estas áreas y con base en la doctrina emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría sobre Revisoría Fiscal.

Adicionalmente el aprendizaje se integrará con lecturas complementarias y con un foro de Revisoría Fiscal, lo cual permitirá generar actitudes críticas del estudiante respecto a los temas de estudio.

Mapa conceptual del módulo



Funciones del revisor fiscal en Colombia



Marco normativo colombiano

Competencia general

Finalizada la unidad 1 de estudio, el estudiante desarrollará las siguientes competencias:

- Entenderá las normas legales relacionadas con la Revisoría Fiscal, permitiéndole obtener herramientas para desarrollar sus funciones de manera integral y con sujeción a la ley colombiana.
- Analizará el contenido e interpretación de las Normas de auditoría de general aceptación lo que le permite la implementación de las mismas en su desarrollo profesional.
- Aplicará en su vida profesional, laboral y personal los principios éticos fundamentales del contador público colombiano.
- Conocerá las funciones que debe desempeñar en su calidad de Revisor Fiscal con el fin de delimitar el marco legal del ejercicio de la profesión en Colombia.
- Entenderá la Orientación Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría sobre Revisoría Fiscal como complemento del marco legal con el objeto de conocer las orientaciones del órgano de dirección de la profesión en el estado colombiano.
- Obtendrá elementos suficientes sobre las funciones para el desarrollo idóneo de actividad de Revisoría Fiscal de los entes sociales.

Desarrollo temático

Componente motivacional

El ejercicio de la Revisoría Fiscal se encuentra reglamentado en Colombia, determinando sus funciones, su forma de elección y su dependencia, entre otros. Conocer dicha reglamentación permite al revisor fiscal ejercer su disciplina contable en el marco empresarial de manera idónea, permitiendo reconocimiento y confianza en el ejercicio del cargo, lo que se denomina por algunos tratadistas como responsabilidad ética; enalteciendo de ésta manera la labor desarrollada y cumpliendo por tanto con el juramento realizado como profesionales de la Contaduría Pública.

El revisor fiscal está en el deber de conocer las funciones y orientaciones profesionales que existen en el desarrollo de su ejercicio profesional por cuanto estas constituyen los lineamientos de la labor del revisor encaminada a fiscalizar el ente económico.

Recomendaciones académicas

Los estudiantes contarán con una semana para abordar los dos temas iniciales, propuestos en esta unidad, así como las lecturas complementarias.

Se recomienda realizar las lecturas complementarias al finalizar cada temática.

La segunda semana los estudiantes deberán abordar dos grandes temáticas: las funciones del revisor fiscal y la orientación profesional del Consejo Técnico sobre Revisoría Fiscal. Se recomienda realizar las lecturas complementarias en el orden indicado y visualizar

los videos una vez haya leído la orientación como complemento de la misma.

Desarrollo de cada una de las unidades temáticas

Capítulo I: Normas de auditoría de general aceptación - NAGA

La Revisoría Fiscal se encuentra regulada en el Código de Comercio y se establece como un órgano de vigilancia y control de sociedades determinadas por el artículo 203 del mismo código, tales como las sociedades por acciones, sucursales de compañías extranjeras, sociedades con activos brutos superiores a cinco mil salarios mínimos o ingresos que excedan tres mil salarios mínimos, entre otras.

Diversas opiniones respecto a la concepción de “órgano” de vigilancia se suscitan, fundamentadas en que definir la Revisoría Fiscal de ésta manera atenta directamente con el principio de independencia del cual debe gozar la Revisoría Fiscal. Por lo tanto para diversos tratadistas, la Revisoría Fiscal es una práctica técnico-científica.

Como menciona Peña (2011), la Revisoría Fiscal “es una institución adscrita económicamente a la empresa, que por ley, estatutos o en forma voluntaria debe tenerla, para que represente a los propietarios frente a la administración, a la comunidad frente al ente económico en el cual actúa, vele por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de la asamblea de accionistas, socios o asociados, dictamine los estados financieros que prepare el ente económico,

ateste hechos contables y financieros, determine lo adecuado del control interno (organizacional) promoviendo su mejoramiento para salvaguardar sus bienes, e imparta instrucciones si fuere necesario, para mejorar el sistema de dicho control interno, los comprobantes contables y el archivo de la correspondencia” (p. 57).

Corresponde al revisor, fiscalizar las operaciones que celebre la sociedad con prescripción de los estatutos, decisiones de la asamblea general y junta directiva; dar informe de las irregularidades; rendir cuenta a entidades gubernamentales; velar por la contabilidad de la sociedad; inspeccionar sus bienes; practicar inspecciones; autorizar balances; dictaminar los estados financieros, y demás funciones que le sean atribuidas con ocasión a la ley o los estatutos. Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo 207 y 208 del Código de Comercio.

Así las cosas, para ejercer la actividad de revisor fiscal es necesario ceñirse a lo establecido en la Ley 145 de 1960 por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público y la Ley 43 de 1990 mediante la cual se adiciona la anterior disposición.

Para poder hablar sobre Revisoría Fiscal es necesario referirse a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 que establece las Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA). Estas normas son los principios fundamentales de dicha actividad y garantizan la calidad del trabajo del auditor.

Las NAGA tienen su origen en los Boletines (Statement on auditing standard – SAS) emitidos por el comité de auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de América - AICPA (Ame-

rican Institute of Certified Public Accountants) ratificados en Colombia mediante la Ley 43 de 1990.

La ley 43 de 1990 se puede complementar con la Orientación profesional del ejercicio de la Revisoría Fiscal emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría el 21 de junio de 2008, documento que proporciona información conceptual y regulativa sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal.

Previo a esta orientación el Consejo Técnico de la Contaduría emitía pronunciamientos, los cuales se identificaban con números y constituían disposiciones con fuerza vinculante para los contadores públicos. Dichos pronunciamientos y/o disposiciones fueron derogados con ocasión al sentencia de la Corte Constitucional número C-530 de 2000, cuyo magistrado ponente fue el Doctor Antonio Barrera Carbonell, y de la que se extrae lo siguiente:

“3.3. ANÁLISIS DE LOS CARGOS

3.3.1. El problema que se plantea se reduce a determinar si el Consejo Técnico de la Contaduría puede complementar y actualizar las normas de auditoría de aceptación general. Es decir, no se cuestiona por el actor la posibilidad de que existan normas de auditoría de aceptación general las cuales efectivamente están contempladas en el art. 7 de la ley 43/90, que no fue objeto de demanda, salvo su párrafo.

3.3.3. A juicio de la Corte, es al legislador a quien le corresponde establecer o reconocer los principios de auditoría generalmente aceptados (art. 150 C.P.), aun cuando ello no se opone a que ellos puedan ser establecidos, como lo advirtió la Corte en la sentencia C-597/96 respecto de los principios

de contabilidad generalmente aceptados, a través de los usos reiterados, constantes y públicos. Dentro de dicha atribución naturalmente esta la de complementarlos y actualizarlos. Con todo, no es posible que el legislador pueda atribuir al Consejo Técnico de la Contaduría la aludida facultad normativa, la cual sí es posible que la pueda tener el Presidente de la República o el Contador General de la Nación, según lo autoriza la Constitución (arts. 189-11 y 354, inciso 2).”

Posteriormente el Consejo Técnico unifica en un solo texto todos los aspectos más importantes que se entiende están involucrados en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia, Orientación Profesional que de manera intrínseca será analizada en los siguientes capítulos.

Ahora bien, aclaradas la fuentes de información a utilizar en el presente capítulo, se puede entrar a estudiar la materia que compete a esta unidad, las Normas de auditoría de general aceptación – NAGA, las cuales se dividen en tres grandes grupos:

- Normas personales.
- Normas relativas a la ejecución del trabajo.
- Normas relativas a la rendición de informes.

A continuación se describe en qué consiste cada grupo:

Normas personales

Las normas personales se refieren específicamente a cualidades que debe poseer el revisor fiscal.

Bailey (1998), enfatiza en la dificultad de determinar las características deseables para una persona, y más aún en la dificultad de especificar que rasgos son los deseables en el ejercicio de una profesión. Por tanto las normas personales pueden llegar a ser muy amplias y a tener diferentes formas de interpretación.

Las normas personales a su vez se dividen en tres numerales:

1.1. “El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría Pública en Colombia”.

De lo anterior se desprenden dos elementos relevantes: el primero hace referencia al entrenamiento adecuado y experiencia en el campo de la auditoría y el segundo al hecho de encontrarse debidamente acreditados para desarrollar la profesión.

Es así que el revisor fiscal debe contar con una formación integral que le brinde los suficientes elementos para desarrollar su actividad de manera idónea, formación sobre la que es necesario que de manera proactiva, el revisor se actualice constantemente, más aun en un entorno globalizado como el nuestro.

La acreditación la brinda la tarjeta profesional de contador público con plena vigencia, lo que implica que el revisor fiscal no puede incurrir en causales de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer la profesión, las cuales serán estudiadas más adelante.

1.2 “El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.”

La Junta Central de Contadores (JCC, 1999) a través de su Circular 033 menciona que “la independencia supone una actitud mental que permite al contador público actuar con libertad respecto a su juicio profesional, para lo cual debe encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de sus conclusiones. Por su parte la objetividad implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones del contador público de quien se exige total independencia en sus relaciones con la entidad o persona objeto de fiscalización”.

Igualmente el Consejo Técnico de la Contaduría (CTC, 2008) mediante la orientación profesional del ejercicio de la Revisoría Fiscal asegura que “el revisor fiscal no obedece ordenes o instrucciones de la junta directiva, la presidencia o la gerencia del ente económico, ni de ningún otro estamento administrativo, por el contrario supervisa, y vigila las actuaciones de todos estos administradores y de todas las demás personas que ejercen funciones de dirección o administración, pudiendo incluso llamarles la atención o informar a la asamblea o junta general de socios o a las autoridades competentes, según los casos, de cualquier actuación irregular en la gestión adelantada.”.

La independencia, objetividad e imparcialidad son a su vez principios básicos establecidos en el Código de ética profesional artículo 37 de la Ley 43 de 1990.

1.3 “En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con diligencia profesional”.

El pronunciamiento 4 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública decía:

“La debida diligencia profesional impone a cada persona que interviene en el trabajo, la responsabilidad del cumplimiento de las normas en la ejecución del trabajo y en la emisión del informe. Su ejercicio exige, así mismo, una revisión crítica a cada nivel de supervisión del trabajo efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales del equipo de trabajo de auditoría o de Revisoría Fiscal.”

La diligencia profesional implica calidad en el trabajo desarrollado, es decir que sobre la tarea encomendada el revisor fiscal pueda cumplir con todas las normas de auditoría generalmente aceptadas. Igualmente conlleva que el servicio ofrecido posea niveles adecuados de conocimientos y competencias brindados generalmente por otros del mismo ramo.

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Estas normas permiten determinar procedimientos de auditoría los cuales deben contener requisitos mínimos que permitan ofrecer calidad en la ejecución el trabajo.

2.1 “El trabajo deber ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes, si los hubiere.”

La planeación del trabajo permite el desarrollo de estrategias globales que conlleven a una revisión eficiente de la entidad auditada. Esto significa que para realizar una adecuada planeación es necesario que el órgano fiscalizador conozca la actividad económica y objeto social de la entidad auditada, el sector en el que se desarrolla, la naturaleza de sus transacciones, procedimiento y sistema contable utilizado, entre otros.

Se recomienda que dicha planificación sea elaborada de manera escrita, con tiempos de ejecución y objetivos. Transmitir esta planeación al equipo de trabajo es fundamental ya que permite un seguimiento eficaz y facilita el control del trabajo.

2.2 “Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.”

Para comprender el concepto general de control interno podemos traer a colación a Peña, quien lo define como aquel que se ejerce por la misma empresa, con personal vinculado a ella y con suficiente capacidad objetiva e identificación empresarial con su objeto, que amerita credibilidad a sus conclusiones.

Charry (1997, citado por Vásquez, 2011) agrega también que, de forma similar a como lo hacen el informe COSO, es un proceso que lleva a cabo la Alta Dirección de una organización y que debe estar diseñado para dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes, normas y regulaciones, que enmarcan la actuación administrativa.

El estudio del control interno permite determinar la confiabilidad que existe en los reportes financieros y así poder determinar la naturaleza, alcance

y oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. Este estudio conlleva todo un proceso que incluye lograr adquirir el conocimiento y comprensión suficiente de los procedimientos y métodos establecidos por la administración del ente; pruebas de conocimiento, es decir hallar la seguridad razonable de que se encuentran en uso y que están operando tal como se planificaron; revaluación de los controles y ampliación o limitación de las pruebas sustantivas.

2.3 “Debe obtenerse evidencia valida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estados Financieros sujetos a revisión.”

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública la evidencia del contador público es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en los saldos de las cuentas han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por los hechos económicos y circunstancias que realmente han ocurrido.

La evidencia que soporta los estados financieros está constituida por la información contable tales como libros oficiales, auxiliares, conciliaciones, papeles de trabajo así como por materiales documentados tales como facturas, contratos, actas, títulos valores, etc, los que permiten al revisor analizar los estados financieros bajo estudio comprobando así los datos contables. Dicha evidencia debe ser pertinente, es decir que debe tener no solo relación con el objeto de

análisis y revisión sino que debe resultar apta y apropiada para demostrar lo pretendido.

Existen presunciones para determinar la validez de la evidencia a las cuales hacemos referencia, porque pueden llegar a ser útiles para el auditor al momento de analizar la misma:

- La evidencia que se ha obtenido de fuentes independientes fuera de una compañía provee una seguridad mayor de su razonabilidad para los propósitos de auditoría independiente que aquella que sea obtenida únicamente dentro de la empresa.
- Los datos contables y los estados financieros que se preparan bajo condiciones satisfactorias de control interno ofrecen más seguridad de su razonabilidad que cuando ellos se preparan bajo condiciones de control interno no satisfactorias.
- El conocimiento personal directo del auditor independiente a través del examen físico, observación, cálculo e inspección es más persuasivo que la información obtenida indirectamente.

El objetivo es obtener suficiente evidencia para que el revisor fiscal pueda crear una opinión sobre el objeto de estudio. Por lo tanto la cantidad (suficiencia) y calidad (competencia) de la evidencia requerida depende del juicio del auditor.

Igualmente la evidencia debe ser competente, es decir útil para el auditor. La utilidad de la evidencia se refiere a su aporte concreto en el punto del objeto de la investigación.

Ahora bien, es necesario recalcar que los procedimientos que utilice el auditor para recopilar las evidencias, deben ser adecuados, de lo contrario podría resultar inválida.

La evidencia de los datos contables podrá ser obtenida, entre otros, mediante los siguientes procedimientos:

- Inspección: consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles.
- Observación: se analizan procesos o procedimientos que otros realizan.
- Investigación: se basa en la búsqueda de información a través de personas competentes, ya sea dentro o fuera de la entidad.
- Confirmación: ratificación de los datos contenidos en los registros contables.
- Cálculo: verificación aritmética de los registros contables
- Revisión analítica: consiste en estudiar razones y tendencias financieras significativas así como en investigar fluctuaciones y partidas poco usuales.

Finalizados los anteriores procedimientos de auditoría, el revisor puede constituir papeles de trabajo que constituyen un compendio de documentos que son la prueba de la ejecución del trabajo, que permiten al revisor crear el dictamen razonable sobre los estados financieros.

NORMAS RELATIVAS A LA RENDICIÓN DE INFORMES

Estas normas se refieren a la última fase del proceso de auditoría mediante la elaboración de un informe o dictamen que se en-

cuentra respaldado por evidencia y papeles de trabajo que el auditor ha recopilado a través de su proceso de fiscalización.

El dictamen es el documento formal que elabora el auditor en el que muestra los resultados de su examen.

De acuerdo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública dicho dictamen consta de tres párrafos:

- a. El primero identifica los estados financieros.
- b. El segundo la naturaleza y alcance de la auditoría.
- c. El tercero la opinión.

Igualmente dicho pronunciamiento consagra unos elementos básicos del dictamen, a saber:

- a. Un título que lo identifique.
- b. El destinatario.
- c. La declaración de que los estados financieros identificados en el informe fueron auditados.
- d. La declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia del ente, y que la responsabilidad del Contador Público, es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en su auditoría.
- e. La declaración de que la auditoría se practicó de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas.
- f. La declaración de que las normas de auditoría generalmente aceptadas requieren que el Contador Público planee y

ejecute la auditoría, para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores importantes.

- g. La declaración de que una auditoría incluye:

■ El examen con base en pruebas selectivas de la información que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros.

■ La evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las principales estimaciones hechas por la gerencia.

■ La evaluación de la presentación global de los estados financieros.

- h. La declaración de que el Contador Público considera que su auditoría le proporciona una base razonable para su opinión.

- i. Una opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del ente, a la fecha del balance general, los resultados de operación y los cambios en la situación financiera por el período terminado en la misma, de conformidad con Principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente.

- j. La firma del Contador Público.

- k. La fecha del dictamen, que normalmente es la fecha cuando se termina el trabajo en las oficinas del cliente.

El artículo 7 de la Ley 43 de 1990 establece en su numeral tercero cinco normas relativas a la rendición de informes, a saber:

3.1 Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el Contador Público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos Estados Financieros.

3.2 El informe debe contener indicación sobre si los Estados Financieros están presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son reglas generales que constituyen guía y fundamento para la elaboración de la contabilidad. Los PCGA implican los principios, las prácticas y los métodos contables. Estos principios son mutables, es decir se debe tener en cuenta al momento de su elaboración las circunstancias de la entidad.

3.3 El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el período anterior.

Lo primero que debemos analizar es el significado del término “periodo corriente”. Este significa el año, o período menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor está emitiendo una opinión.

La uniformidad refiere la posibilidad de comparar los estados financieros del

ejercicio corriente con los del ejercicio anterior y que el resultado de esta comparación será la no afectación de manera sustancial de los PCGA; de lo contrario, si la no aplicación de los PCGA afecta de manera relevante la posición financiera o el resultado de las operaciones es menester requerir indicación de los cambios y sus efectos, con el fin de que el auditor describa mediante una nota su opinión al respecto.

Cuando la opinión del auditor cubre dos o más ejercicios, generalmente no es necesario revelar una carencia de uniformidad con un año anterior a los años que se están presentando. Por lo tanto la frase “aplicados con base uniforme en la del ejercicio anterior” no es ordinariamente aplicable cuando la opinión cubre dos o más años. En su lugar, debe decirse “*aplicados uniformemente en el período*” o “*aplicados sobre una base uniforme*”.

3.4 Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca.

Como inicialmente se enunció el dictamen consiste en una opinión del auditor por tanto el auditor tiene alternativas para emitir su dictamen:

Dictamen limpio cuando no posee salvedades o limitaciones y significa que dichos estados se encuentran conforme a los Principios de contabilidad generalmente aceptados.

Con excepciones o salvedades cuando el alcance del dictamen ha sido restringido

Negativo u opinión adversa, declara que los estados financieros no presentan una situación financiera razonable ni los resultados de operación, ni los cambios en el patrimonio, ni los cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con los Principios de contabilidad generalmente aceptados.

Denegación de dictamen o abstención de opinión. La abstención implica que el revisor no expresa una opinión sobre los estados financieros.

Capítulo II: Ética y Revisoría Fiscal

Para entrar al estudio de éste capítulo es necesario en primera instancia proceder a definir de manera general el concepto de “ética”. Entendemos por ética aquel conjunto de normas que rigen la conducta humana. Por ende el código de ética profesional regulado por la Ley 43 de 1990 en su artículo 35 y siguientes, constituye el conjunto de reglas que deben cumplir con la sociedad, aquellos que ejercen la profesión de la contaduría.

Lo anterior se produce como consecuencia de la connotación pública de la profesión de la contaduría, ya que su función social se materializa en la posibilidad de dar fe pública, potestad que le concede el Estado para brindarle seguridad a las relaciones de tipo económico que establezca la sociedad en general.

Es así que el legislador adopta diez principios éticos fundamentales para el desarrollo de la contaduría pública, a saber:

- Integridad.
- Objetividad.

- Independencia.
- Responsabilidad.
- Confidencialidad.
- Observaciones de las disposiciones normativas.
- Competencia y actualización profesional.
- Difusión y colaboración.
- Respeto entre colegas.
- Conducta ética.

“De esta manera contribuirá al desarrollo de la contaduría pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente enunciados son aplicables a todo contador público por el solo hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones públicas o privadas, en cuanto sean compatibles con sus funciones.” Artículo 37 Ley 43 de 1990.

Principios éticos fundamentales del contador público colombiano y principios éticos del contador profesional (IFAC)

La explicación de los principios básicos de la ética profesional, según Caicedo y Ramos (2005) es la siguiente :

1.1 Integridad

El profesional contador deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que

fuere el área en que practique el ejercicio profesional. Conforme con ello, se espera de él rectitud, probidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia.

Este principio implica otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, pueden tener relación con las normas de actuación profesional establecidas.

El código de la IFAC dice al respecto “Un contador profesional debe ser honrado y honesto en el desempeño de los servicios profesionales”

1.2 Objetividad

La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional del contador. Lo anterior es especialmente importante cuando se certifica, dictamina u opina sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad está ligada generalmente a los principios de integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con éstos.

El código de ética de la IFAC define la objetividad como “Una combinación de imparcialidad, honestidad intelectual y libertad de conflictos de interés”.

1.3 Independencia

En el ejercicio profesional, el contador deberá tener y demostrar absoluta independencia con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante.

El código de la IFAC señala de la siguiente forma la INDEPENDENCIA: (a) Independencia de la mente – el estado de la mente que permite la prestación de una opinión sin estar siendo afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole a un individuo actuar con integridad, y ejercer objetividad y escepticismo profesional; y (b) Independencia en la apariencia – el evitar hechos y circunstancias que son tan significativas para un tercero razonable e informado, que tiene conocimiento de toda la información relevante, incluyendo cualesquiera salvaguardas aplicadas, lo que le llevaría razonablemente a concluir que se ha comprometido la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de una firma, o de un miembro del equipo de aseguramiento.

1.4 Responsabilidad

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio deontológico, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del contador, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del contador y compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión.

1.5 Confidencialidad

La relación del contador con el cliente es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone el más estricto secreto profesional.

Dice el código de la IFAC que un contador profesional debe respetar la confidencialidad de la información obtenida en el curso del desempeño de los servicios profesionales y no debe usar o revelar cualesquiera de tal información sin autorización apropiada y específica, a menos que exista un derecho legal o profesional o un deber para hacerlo.

1.6 Respeto y observancia de las disposiciones normativas y reglamentarias

El contador deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que estos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicadas en las circunstancias.

1.7 Competencia y actualización profesional

El contador sólo deberá comprometerse y contratar trabajos para los cuales él y sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria, para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. De la misma manera, el contador, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del desarrollo social y económico. Un contador profesional debe prestar servicios profesionales con debido cuidado,

competencia y diligencia y tiene un deber continuo para mantener el conocimiento y las habilidades profesionales en el nivel requerido para asegurar que un cliente o empleador recibe la ventaja de servicios profesionales competentes basados en desarrollos actualizados en el ejercicio profesional, en la legislación y en las técnicas, es así como lo señala la parametrización de la IFAC.

1.8 Difusión y colaboración

El contador tiene la obligación de contribuir, de acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo que, como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles.

1.9 Respeto entre colegas

El contador debe tener presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. La extensión de las operaciones del emprendimiento de un negocio con frecuencia resulta en la conformación de sucursales o de compañías subsidiarias en las que un contador existente no ejerce profesionalmente. En esas circunstancias, el cliente o el contador existente, mediante consulta con el cliente, puede solicitar que un contador que recibe, ejerza profesionalmente en esas localizaciones, para que desempeñe tales servicios profesionales en cuanto sea necesario para completar la asignación. Así es que se debe según la IFAC, contar al momento de actuar como profesional de la contaduría, teniendo en cuenta los criterios de otros colegas.

1.10 Conducta ética

El contador deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal.

Principios éticos básicos para el ejercicio de la Revisoría Fiscal

En razón a que el contador en ejercicio de la Revisoría Fiscal se convierte en un eje de moralidad, existen ciertos principios éticos que aparte de los ya relacionados en el numeral anterior, es necesario que constituyan pilares para la ejecución de su labor.

Partiendo del hecho de que la Revisoría Fiscal como lo menciona Peña (2011), “es una función pública y por tanto digna de confianza y credibilidad, pero la confianza no se impone sino que se gana mediante la demostración de calidad y capacidad en el desempeño del más alto cargo de fiscalización privada” (p. 257) es menester que el revisor fiscal ejerza su profesión basado en los principios estudiados anteriormente aunados a los siguientes:

2.1 Oportunidad

Este principio nace con ocasión a lo consagrado en el artículo 207 numeral 2° del Código de Comercio cuando determina la siguiente función al revisor fiscal:

“Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregulari-

dades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y el desarrollo de sus negocios”.

La oportunidad se encuentra vinculada con la pertinencia. Es decir la oportunidad significa tomar decisiones o actuar sobre tiempo real, en el momento en que suceden las cosas o son solicitadas, en el momento en que se solicita la intervención empresarial. Esto conlleva a que la entidad auditada sea competitiva en su mercado.

Como menciona Peña (2011), “la utilidad de la delegación en la vigilancia encomendada por los asociados a la Revisoría Fiscal y la fiscalización que esta ejerce en el ente económico se fundamenta en la oportunidad de la acción, en la medida que garantiza la prevención de la violación normativa en el desarrollo de las operaciones que realice la persona jurídica.” (p. 271).

2.2 Permanencia

Nace conforme a la naturaleza de la Revisoría Fiscal, que implica una acción de vigilancia y control constante en el ente económico, en defensa del cumplimiento normativo y de los bienes que a cualquier título tenga la empresa.

El abogado Néstor Humberto Martínez (citado por Peña, 2011) expone: “los auditores deben seguir físicamente el giro del negocio para poder evaluar la gestión y prevenir que consuman prácticas u operaciones que causen perjuicios a la sociedad, a los socios y a los ahorradores. Cuando se ejercen funciones de auditoria con carácter mediato y episódico resulta imposible ejercer una labor preventiva.”

Tanto la administración de los entes económicos como la Revisoría Fiscal deben gozar

de permanencia con el objeto de verificar la concordancia entre los estados financieros presentados y el informe de gestión de los administradores; y el dictamen realizado por revisor sobre los mismos.

2.3 Dictamen, atestación y evidencia

Para algunos tratadistas como Peña (2011) el dictamen, la atestación y evidencia constituyen principios éticos para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Sin embargo lo anterior se puede configurar como funciones del revisor fiscal. Se deja a juicio del estudiante su clasificación, conforme a la definición expuesta a continuación:

-Dictamen y atestación: según Peña (2011) “el dictamen es la emisión del juicio profesional como conclusión de lo examinado por el contador público. Se hace por escrito con la aplicación tanto en el examen como en la emisión de las normas profesiones que le son propias. En la Revisoría Fiscal tales normas están señaladas por el Código de Comercio y no existe límite alguno respecto de lo que se debe expresar, sino en cuanto a lo mínimo de su contenido.

Atestación es el testimonio escrito que, mediante declaración o manifestación expresa, donde el contador expone la responsabilidad que asume respecto al contenido de algún documento preparado certificado por la Administración. Es decir que se compromete como testigo fiel de los hechos u operaciones que se exponen y que no son examinables en su conformación por el usuario del escrito o afirmación que se atesta y que se muestra” (p.279)

“El revisor fiscal no deberá expresar recomendación u opinión que no se fundamente en papeles de trabajo, pues son estos los que constituyen la evidencia válida sobre lo afirmado” (p. 281).

CAPÍTULO III. Funciones y obligaciones del revisor fiscal en la ley colombiana

En el capítulo anterior se mencionó que la Revisoría Fiscal en Colombia se encuentra reglamentada. Lo anterior implica que el legislador también determinó de manera taxativa las funciones que debe desempeñar. Dichas funciones son de imperativo cumplimiento para el revisor fiscal obligatorio, y de aplicación supletiva para el revisor fiscal potestativo.

La interpretación que debe realizarse de dichas funciones es de forma sistemática y coherente. La interpretación sistemática es un término que se encuentra definido en el Código Civil Colombiano y que significa que la interpretación de las funciones del Revisor Fiscal debe realizarse de manera integral, “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas debida correspondencia y armonía”. (Artículo 30 Código Civil).

La Revisoría Fiscal tiene unos objetivos los cuales se cumplen a través de la realización de funciones de manera idónea, integral, permanente, independiente, objetiva y preventiva.

A continuación se procederá a realizar el estudio de las funciones del revisor fiscal discriminado de la siguiente manera:

1. Funciones generales

2. Funciones especiales

Lo anterior fundamentado en el Código de Comercio Colombiano, y resoluciones o circulares expedidas por las Superintendencias en desarrollo de la Ley.

Funciones generales del revisor fiscal

De manera general las funciones del revisor fiscal se encuentran clasificadas en el artículo 207 y 209 del Código de Comercio.

2.1 Regularidad de las operaciones sociales. Artículo 207-1 del Co. Co.

Corresponde al revisor fiscal cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

Para poder entender el alcance de ésta función, es necesario en primer lugar recordar que los estatutos de los entes económicos son el conjunto de normas que las partes convienen para la organización interna de la sociedad y la actuación del ente societario; que constituye una parte integral del contrato social. Por tanto deben cumplir con los elementos de dicho contrato, entre los que encontramos objeto y causa lícita. Los estatutos de una sociedad deben estar sujetos al objeto social de la misma el cual debe ser lícito luego todas las operaciones deben estar acordes con la ley.

Así las cosas el numeral primero del artículo 207 del Co. Co. establece el deber del revisor de cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de

la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, siendo necesario en primer lugar, resaltar que dicha función no tipifica excepción alguna sobre las operaciones que se deben analizar; lo que conlleva a que el examen debe realizarse sobre TODAS las operaciones de la sociedad, incluyendo no solo los actos jurídicos sino los hechos jurídicos, no solo las operaciones registrables por el sistema contable sino aquellas que no los sean como normas de adjudicación de contratos, selección de personal, etc.

Según Reyes y De la Hoz (2011), “para cumplir con esta tarea, el revisor fiscal debe tener un conocimiento amplio y suficiente de la entidad auditada con el fin de que pueda efectuar un adecuado seguimiento de las actividades y procesos en sus niveles directivo, administrativo y operacional, atendiendo a su naturaleza, verificando el cumplimiento de las competencias asignadas a cada uno y las obligaciones sobre información y destinación de resultados” (p. 67).

Según el tratadista Peña (2011), el término “cerciorarse” implica al revisor fiscal realizar una interventoría de las cuentas, lo cual se encuentra establecido en el artículo 208 del Co. Co.

La interventoría de cuentas de acuerdo a Andrew Nelson¹ se define de la siguiente manera:

“Con finalidades prácticas podemos definir la intervención de cuentas diciendo que es un examen sistemático de los libros y anotaciones contables de una corporación, sociedad o comerciante con objeto de: comparar ciertas situaciones de hecho, descubrir o prevenir fraudes ofrecer opinión o juicio sobre materias consultadas e informar al cliente. El término intervención, tal como se usa en sentido profesional,

podemos definirlo como el procedimiento por medio del cual una persona se compromete a emitir un juicio u opinión en cuanto a la exactitud de las cuentas y estados financieros, previo el examen de esas cuentas, comprobantes, documentos, etc., comunicándose por correspondencia, si es necesario, con terceras personas que son independientes e interrogando personalmente a los funcionarios y empleados. La intervención puede hacerse en relación con los estados financieros al final de un periodo determinado y las transacciones financieras de ese periodo que culmina en los referidos estados, o puede hacerlo solamente en relación con los saldos al final de un periodo cualquiera.”

De acuerdo al tratadista Nelson Andrew, la interventoría puede clasificarse de la siguiente manera:

- a. Intervención máxima, en esta se comprueban todas las operaciones de la empresa durante el periodo examinado.
- b. Intervención de estado de balance, limitada a la comprobación de los saldos de las cuentas del activo, pasivo y de capital al final del periodo.
- c. Intervención mediante pruebas lo que implica un examen riguroso del sistema de comprobación interna y de las medidas de resguardo.
- d. Intervención de caja, comprobando ingresos y egresos durante el periodo de estudio. operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos.

Es así que la Revisoría Fiscal concluye Peña

(2011), debe realizar una intervención completa ya que el término “cerciorarse” incluye TODAS las operaciones que realice la empresa como comerciales, financieras, administrativas, contables, técnicas, de seguridad, comercio electrónico, propiedad intelectual, medio ambiente.

2.2 Oportunidad en las comunicaciones sobre irregularidades. Artículo 207-2 del Co. Co.

Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

Esto implica que el revisor fiscal presente por escrito evaluaciones y recomendaciones encaminadas a evitar que los administradores u otros funcionarios de la sociedad incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que contraríen las órdenes de los órganos sociales superiores. Esto como consecuencia directa del objetivo primordial de la Revisoría Fiscal el cual es la defensa del interés público.

Dichos escritos deben presentarse ante quien ostente legalmente la facultad para adoptar las decisiones preventivas o correctivas que sean del caso, utilizando el conducto regular aplicable, es decir al gerente o junta directiva, asamblea o junta de socios y en casos excepcionales ante las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control sobre la sociedades.

Lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 214 del Código de Comercio respecto a la reserva profesional. “El re-

1- NELSON, Andrew, LLB. *Introducción a la intervención de cuentas*. Unión tipográfica Editorial Hispano Americana, Uteha. Versión al español de Germán Sergio San Miguel y Page, C.P., México, 1942, p.1. Citado por PEÑA BERMUDEZ, Jesús María. *Revisoría Fiscal. Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado*. Bogotá: Eoce Ediciones, 2011. 392 p 101.

visor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y en los casos previstos expresamente en las leyes”.

El artículo 84 de la Ley 222 de 1995 relaciona algunos ejemplos de irregularidades que deben denunciarse, a saber:

- Abusos de sus órganos de dirección o administración, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
- Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
- No llevar contabilidad o los libros de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados;
- Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.
- Cabe anotar que este acápite incluye irregularidades generadas por la inobservancia de la Ley por parte de la sociedad fiscalizada.

No podemos olvidar que la omisión de denuncia también puede acarrear consecuencias legales; es decir no informar oportunamente puede conducir a la remoción del cargo del revisor fiscal. (Ley 222 de 115 art. 85 y 86). Recuérdesse que el artículo 211 del Código de Comercio señala que “el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus socios o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento

de sus funciones”.

2.3 Colaboración con las entidades de control. Artículo 207-3 del Co. Co.

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

“Este deber de colaboración tiene su fundamento en la importancia de las funciones asignadas al revisor fiscal, las cuales trascienden el ámbito privado y el mero interés de la persona jurídica y sus asociados, teniendo relevancia en el ámbito social e incidencia en el orden público económico, especialmente para el caso de las entidades vigiladas o controladas por esta Superintendencia. En desarrollo de lo anterior, le corresponde al revisor fiscal dar su apoyo a las entidades de supervisión, cuando éstas lo requieran, dentro del ámbito de su competencia, en la forma y con la oportunidad que le sea requerido.” Circular Externa No. 115-000011 de la Superintendencia de Sociedades.

Cabe anotar que los organismos de control no pueden solicitarle informes o el cumplimiento de funciones, a los revisores fiscales, que no estén contempladas en las leyes como funciones propias del revisor fiscal. Lo anterior fue ratificado en sentencia del Consejo de Estado al declarar la nulidad de la Circular 001 del 15 de enero de 1999 expedida por la Superintendencia de Valores.

2.4 El sistema contable. Artículo 207-4 del Co. Co.

Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven

debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

Esta función obliga a la verificación respecto de los criterios y procedimientos utilizados para llevar la contabilidad de la sociedad; la inspección sobre el manejo de libros de contabilidad, los libros de actas, los documentos contables y archivos relacionados, para asegurarse que los registros hechos sean correctos y cumplan todos los requisitos establecidos por las normas aplicables, de manera que pueda verificar que se conservan adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones de la empresa, los cuales constituyen fundamento de la información contable de la misma.

2.5 Bienes y valores sociales. Artículo 207-5 del Co. Co.

Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

El revisor fiscal debe ejercer control sobre las operaciones (actos y hechos de la administración), sobre la contabilidad (registro de los actos y hechos) y debe ejercer inspección sobre los bienes y valores sociales (objeto de las operaciones).

Inspeccionar significa “examinar y reconocer atentamente una cosa”. El objetivo de esta función es establecer un control permanente para garantizar la conservación, seguridad y custodia.

Esta función implica examinar y reconocer

de manera continua que los bienes de la sociedad existen real y efectivamente. Igualmente debe inspeccionar los gravámenes o compromisos que existan sobre éstos. Es necesario acotar que esta función no se limita a los bienes propios de la sociedad sino que se extiende a aquellos que por cualquier título se encuentren bajo su custodia y que puedan llegar a afectar su patrimonio económico.

Peña (2011) menciona que “puede observarse que de este numeral se desprende una **AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO**” en defensa del patrimonio respectivo, pues parte del objetivo organizacional es su conservación y mantenimiento para el desarrollo del objeto por el cual existe. La obligación de indicar las medidas que deban tomarse significa que esta función le asigna además una responsabilidad informativa al respecto. Incluye, entonces, el cerciorarse de que están adecuadamente cubiertos con pólizas contra toda eventualidad o riesgo, que el contenido cierto de los mismos corresponde al efectivamente adquirido y no han sido objeto de un mal uso que demerite su durabilidad y estado normas, o de un “cambiao”. Conlleva asegurarse mediante comprobaciones periódicas de su existencia, debida protección, capacidad e uso o recuperación si es el caso; comprobación de la legitimidad de los títulos de propiedad y debida protocolización de los mismos.

Para la inspección de los bienes, el revisor fiscal puede utilizar entre otros procedimientos, pruebas relacionadas con:

- Evaluación de los controles internos vigentes.
- Observación física de los bienes.
- Evaluación de las medidas de seguridad,

garantías vigentes, restricciones a su uso, etc.

- Inspecciones sobre sus registros contables.
- Confirmación sobre su propiedad con terceros.
- Inferencia inductiva de partidas y muestras, con apoyo cuando fuere el caso de expertos de otras disciplinas, como en materia de automotores, equipos electrónicos, etc.”

2.6 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Artículo 207-6 del Co. Co.

La Revisoría Fiscal comprende un papel activo dentro de la organización, implicando esto la posibilidad de impartir instrucciones, dando completa autonomía al revisor fiscal para lograr obtener evidencia y en general para ejercer un seguimiento permanente y efectivo de las operaciones y de los valores sociales.

Este numeral se complementa de manera directa con el numeral mencionado anteriormente, sin embargo esta función no es una repetición de la anterior. Su fundamental diferencia se encuentra en que se refiere a valores sociales. Por valores sociales debe entenderse según Peña (2011) “el total de los activos en los cuales se hallan representadas las responsabilidades y obligaciones de cualquier naturaleza a cargo de la sociedad” p. 120.

Se refiere entonces a la cultura organizacional que supera los criterios contables patrimoniales e introduce valores intangibles

como prestigio comercial, posicionamiento en el mercado, uso estratégico de tecnología, entre otros.

Según los tratadistas Reyes y De la Hoz (2011) en cumplimiento de esta función el revisor fiscal debe examinar y evaluar:

- “Los procesos de diagnóstico del entorno, de autoevaluación del ente económico, de generación, adopción y realización de planes, de seguimiento de su ejecución, las operaciones, las acciones encaminadas a estimular el cumplimiento o corregir las desviaciones, las mecánicas de protección, asignación y racionalización del uso de los recursos, los sistemas de verificación de la calidad de sus bienes y servicios, todo ello enmarcado dentro de los objetivos propios del ente fiscalizado y de las normas legales y estatutarias aplicables.
- Las actividades del ente económico en cuanto a su reflejo en los sistemas de información y la manera como se ajusten, en modo, tiempo y lugar, a las disposiciones legales, a las normas estatutarias y las decisiones de sus órganos.
- Los actos que realicen los administradores del ente económico para informarse suficientemente, ponderar los riesgos y oportunidades de sus determinaciones, decidir razonablemente, leal y oportunamente, estimular y corregir el comportamiento de la organización y rendir puntual y completa cuenta de sus gestiones.
- Los procesos de evaluación sobre la continuidad del ente económico en el futuro inmediato.

- El control interno u organizacional, comprendiendo íntegramente sus elementos.” (p.p 74-75).

Como resultado de la gestión realizada, en ejercicio de esta función, cuando el revisor fiscal encuentre deficiencias en cuanto a las medidas seguidas por la administración para el manejo y control de los bienes sociales, debe hacer las recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia del control sobre los bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos.

Adicionalmente, deberá hacer seguimiento respecto de la valoración y medidas adoptadas por parte de los administradores frente a estas recomendaciones, de lo cual deberá dejar constancia por escrito.

2.7 Autorizar con su firma. Artículo 207-7 del Co. Co.

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

Esta función conlleva la expresión del juicio profesional del revisor fiscal sobre la razonabilidad de los estados financieros, función que es de vital importancia ya que la autorización de los estados financieros solo puede darse cuando se encuentren dictaminados por revisor fiscal conforme a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. Es preciso anotar que para cumplir cabalmente con esta labor, el revisor fiscal debe gozar de plena independencia, garantizando la imparcialidad y objetividad de su juicio.

Vale la pena precisar que se hace referencia a todo estado financiero, ya de propósito general o especial, para asociados o terceros.

La autorización de los estados financieros, va acompañada de la expresión “ver opinión adjunta” o “ver dictamen adjunto”, ya que la autorización no solo implica el deber de colocar una rúbrica por parte del revisor, sino que además debe acompañarlo de un dictamen de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 que a la letra reza:

“Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal.

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión “ver la opinión adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente”.

Implica lo anterior que esta obligación de colocar la frase tiene como objetivo poner en conocimiento del usuario de la información, que existe un juicio profesional sobre los estados financieros y que tal juicio se acompaña con ellos en garantía de que son fidedignos, y que sobre éstos pueden existir reservas o salvedades por parte del revisor fiscal.

Por último es necesario mencionar que no puede haber estado financiero alguno certificado, sin las notas respectivas por cuanto ellas constituyen un todo indivisible con los estados.

Si desea consultar un ejemplo de dictamen puede remitirse a PEÑA (2011) p.p 124-126.

2.8 Convocar al máximo órgano social. Artículo 207-8 del Co. Co.

Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

Esta convocatoria extraordinaria obedece a casos de urgencia manifiesta o de especial importancia, basado en el juicio profesional del revisor fiscal y en los hallazgos obtenidos. Esta convocatoria tiene prelación sobre cualquier otra convocatoria del órgano social y es de obligatorio cumplimiento.

2.9 Otras que otorgue la ley. Artículo 207-9 del Co. Co.

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.

En relación con la posibilidad de otorgar al revisor fiscal atribuciones adicionales a las indicadas anteriormente, es pertinente señalar que en todo caso éstas deben ser acordes con la naturaleza de su función y preservar su independencia, objetividad e imparcialidad, evitando situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés.

2.10 Revisoría potestativa

El párrafo del artículo 207 menciona una revisoría de tipo potestativo. Es aquella que la Asamblea General o Junta de Socios toma voluntariamente la decisión de crear, la cual debe hacerse con la mayoría absoluta y mismo el órgano social es quien otorga las funciones y la suprime.

“Art. 207. Párrafo. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en

este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos”.

Funciones especiales o adicionales

Además de las anteriores existen muchas otras diseminadas en el Código de Comercio y en el Estatuto anticorrupción y en algunas circulares de las Superintendencias. Mencionaremos solamente algunas de ellas:

3.1 Función del revisor fiscal para impugnar decisiones

ARTÍCULO 191 Co. Co. Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos.

3.2 Función del revisor fiscal de ejercer la acción de indemnización por las responsabilidades derivadas de decisiones nulas

ARTÍCULO 192 Co. Co. Declarada la nulidad de una decisión de la asamblea, los administradores tomarán, bajo su propia responsabilidad por los perjuicios que ocasione su negligencia, las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia correspondiente; y, si se trata de decisiones inscritas en el registro mercantil, se inscribirá la parte resolutive de la sentencia respectiva.

ARTÍCULO 193 Co. Co. Lo dispuesto en el artículo anterior será sin perjuicio de los derechos derivados de la declaratoria de nulidad para terceros de buena fe. Pero los perjuicios que sufra la sociedad por esta causa le serán indemnizados solidariamente por los administradores que hayan cumplido la decisión,

quienes podrán repetir contra los socios que la aprobaron.

3.3 Función del revisor fiscal de ejercer la acción social de responsabilidad contra los administradores.

LEY 222/1995 Artículo 25. ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.

La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.

Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros.

3.4 Función de notificación de la suscripción de acciones a la Supersociedades.

ARTÍCULO 392 Co. Co. Vencido el término de la oferta para suscribir, el gerente y revisor fiscal comunicarán de inmediato a la Superintendencia el número de las acciones suscritas, los pagos efectuados a cuenta de las mismas, la cifra en que se eleva el capital suscrito, las cuotas pendientes y los plazos para cubrirlas.

3.5 Función especial para el revisor fiscal de sociedad extranjera

ARTÍCULO 489 Co. Co. Los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el exterior se sujetarán, en lo pertinente, a las disposiciones del Código de Comercio colombiano sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país.

Estos revisores deberán, además, informar a la correspondiente Superintendencia cualquier irregularidad de las que puedan ser causales de suspensión o de revocación del permiso de funcionamiento de tales sociedades.

3.6 Función de envío del acta a la Superintendencia

El revisor fiscal enviará a la Superintendencia, dentro de los quince días siguientes al de la reunión, copia autorizada del acta de la respectiva asamblea. (Art. 432)

3.7 Convocatoria de órgano social

La junta directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipulare un quórum superior. La junta podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como principales. (Art. 437).

3.8 Disposición de documentos

Los documentos indicados en el artículo 446 del Código de Comercio, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración, durante los quince días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea. Los administradores y funcionarios directivos así como el revisor fiscal que no dieren cumplimiento a lo preceptuado en este artículo, serán sancionados por el superintendente con multas sucesivas de diez mil a cincuenta mil pesos para cada uno de los infractores. (Art. 447)

3.9 Publicación de balance

Cuando se trate de sociedades cuyas acciones no se negocien en los mercados públicos de valores y se ofrezcan en pública suscripción mediante avisos u otros medios de publicidad, será necesario que, como anexo al reglamento de suscripción de las acciones, se publique el último balance general de la sociedad, cortado en el mes anterior a la fecha de solicitud del permiso y autorizado por el revisor fiscal. (Art. 393).

CAPÍTULO IV. Orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría sobre Revisoría Fiscal

Es necesario iniciar el estudio de este capítulo explicando en qué consiste el Consejo Técnico de la Contaduría.

Éste es un órgano asesor y consultor encargado de la orientación técnico – científica de la profesión cuyas responsabilidades y funciones se encuentran determinadas en los artículos 14, 29, y 33 de la Ley 43 de 1990, los que a la letra rezan:

ARTÍCULO 14. DE LOS ORGANOS DE LA PROFESIÓN. Son órganos de la profesión los siguientes:

La Junta Central de Contadores.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

ARTÍCULO 29. DE LA NATURALEZA. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país.

ARTÍCULO 33. DE LAS FUNCIONES. Son funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública:

1. Adelantar Investigaciones técnico-científicas, sobre temas relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación, y las normas y procedimientos de auditoría.
2. Estudiar los trabajos técnicos que le sean presentados con el objeto de decidir sobre su divulgación y presentación en eventos nacionales e internacionales de la profesión.
3. Servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión.
4. Pronunciarse sobre la legislación relativa a la aplicación de los principios de contabilidad y el ejercicio de la profesión.
5. Designar sus propios empleados.
6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás que le atribuyan las Leyes.

El Consejo Técnico se ha pronunciado hasta la fecha con más de trescientos conceptos en respuesta a consultas que le han sido formuladas relacionadas con temas que son de interés para la comunidad contable y empresarial

Entre otros, el Consejo Técnico emite en el año 2008 la Orientación Profesional sobre el ejercicio de la Revisoría Fiscal, doctrina que emerge a partir de un marco regulativo y cuyas interpretaciones constituyen un entorno tecnológico y científico al cual debe adecuarse el sentido de esas normas.

La Orientación Profesional realiza un marco conceptual de la Revisoría Fiscal, exponiendo y definición y naturaleza de la misma, y desarrolla los principios en los que se basa esta actividad.

Igualmente enuncia las instituciones obligadas a tener revisor fiscal, realiza un análisis de las calidades para ser revisor fiscal, la forma de designación, explica quienes son los auxiliares del revisor fiscal, informa las inhabilidades e incompatibilidades, deberes y derechos, prohibiciones, funciones, responsabilidades, entre otros.

Algunos de estos temas serán desarrollados dentro del este módulo y otros sobre los que el estudiante tenga interés, pueden ser consultados en la Orientación que se adjunta dentro del material complementario.




Para tener una visión clara de la Orientación Profesional sobre Revisoría Fiscal del Consejo Técnico de la Contaduría, se invita al estudiante a ver los videos del Foro sobre la Orientación Profesional para la Revisoría Fiscal – Universidad Javeriana que se encuentran dentro del material com-

plementario y hacen parte de la guía de actividades de esta semana.

El 13 de Julio de 2009 se publica la Ley 1314 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Mediante la Ley 1314 de 2009 se interviene la economía para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información cuyo objeto es, conforme a lo estipulado en el artículo primero de la Ley, conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras.

Es decir que atendiendo el interés público se expedirán normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información. Para cumplir dicho objetivo, la ley otorga participación al Consejo Técnico de la Contaduría y en su artículo 8° establece los criterios a los cuales debe sujetarse el Consejo, como organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.



Mediante dicho articulado se establece el procedimiento al que debe someter el Consejo, las propuestas que se deben presentar ante la rama ejecutiva quien actúa a través de la Contaduría General de la Nación, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, quienes son los encargados de expedir principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad.

A partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, el Consejo debe realizar propuestas o proyectos que se ajusten a las prácticas internacionales analizando la eficacia de aplicación en Colombia de acuerdo al interés público y el bien común. Los proyectos que pase el Consejo ante el Ejecutivo deben ser razonables y deben ser formulados en consonancia por las políticas económicas internas formuladas por las entidades estatales o por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

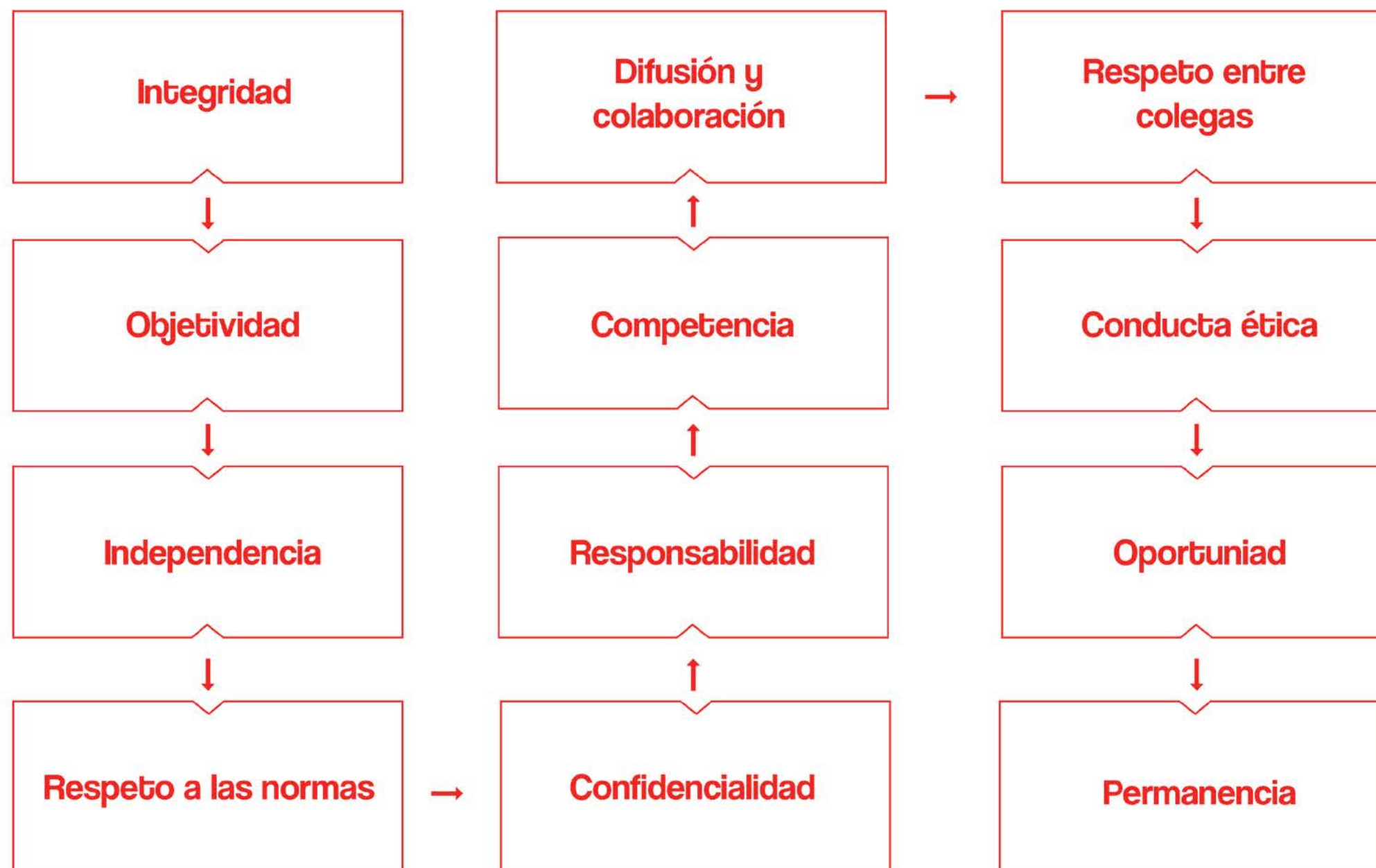
Es así que dentro de la Ley 1314 de 2009 se otorga participación al Consejo en los proyectos de normas de contabilidad, y más aún, dentro los criterios que establece, otorga al Consejo la función de participar en el proceso de divulgación, conocimiento y comprensión de los procesos de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, ante las empresas o personas obligadas a llevar contabilidad en las diferentes fases de implementación.

Igualmente dentro de dicha Ley se ajusta la organización del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores.

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA)

Normas Personales: Cualidades de Revisor Fiscal para ejercer la auditoria	Normas Relativas a la ejecución del trabajo: Requisitos mínimos en la auditoría	Normas Relativas a la rendición de informes
<ul style="list-style-type: none">* Entrenamiento adecuado, experiencia y tarjeta profesional vigente.* Independencia mental, integridad, imparcialidad y objetividad.* Diligencia profesional, calidad y responsabilidad.	<ul style="list-style-type: none">* Planeación y supervisión.* Evaluación y estudio del sistema de control interno existente.* Obtención de evidencia válida y suficiente.	<ul style="list-style-type: none">* Deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de la relación del contador y los estados financieros. Descripción del carácter del examen a los estados, su alcance y su dictamen profesional.* Indicación si los estados financieros están presentados de acuerdo con PCGA y si han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior.* Puede expresar salvedades.

Ética y revisoría fiscal



Acción	Sobre	Para establecer si	Informando resultados	Y si hay irregularidad
Cerciorarse	Que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad	Se ajustan a las prescripciones de la ley, de los estatutos y a las decisiones del máximo órgano social y de la junta directiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dictamen informe de fin de año 2. Informes solicitados por el máximo órgano social 3. Informes solicitados por las entidades de control 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DENUNCIAR oportunamente y por escrito al máximo órgano social, a la junta directiva o al gerente efectuando las convocatorias que sean pertinentes 2. INFORMAR a la entidad de control cuando a ello haya lugar 3. IMPUGNAR las decisiones de la asamblea 4. IMPARTIR las instrucciones necesarias para tal fin 5. PROCURAR que se tomen oportunamente las medidas pertinentes 6. FORMULAR las salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros
Velar	Porque la contabilidad, los libros y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta directiva, el libro de registro de acciones, la correspondencia y los comprobantes de cuentas	Se llevan regularmente conforme a las normas legales y a la técnica contable y porque se conserven debidamente		
Inspeccionar asiduamente, impartir instrucciones y solicitar los informes	Sobre los bienes propios y los de tercero que la sociedad tenga en su poder, así como sobre los valores sociales	Para verificar si hay y son adecuadas y permanentes las medidas de control interno, las de conservación, custodia y seguridad de los bienes		
Autorizar con su firma	Cualquier estado financiero que se haga	Para opinar si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, si las operaciones registradas se ajustan a la ley, los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, si los saldos han sido tomados fielmente de los libros, si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la situación financiera al terminar el periodo revisado y si el estado de resultados refleja el resultado de las operaciones de dicho periodo		

REYES OVIEDO, Álvaro y DE LA HOZ CAMPO, William. Aspectos legales de la revisoría fiscal. Todo lo que un contador público debe conocer sobre los aspectos legales de la revisoría fiscal en Colombia. Barranquilla: Universidad Libre de Colombia, 2011. 188 p.p. 66.



INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL REVISOR FISCAL



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA**

Personería Jurídica Res. 22215 Mineducación Dic. 9-83

INTRODUCCIÓN

En los capítulos a desarrollar en esta unidad se pretende brindar orientaciones generales en torno a las limitaciones (inhabilidades e incompatibilidades) y a la responsabilidad general del titular de la función fiscalizadora en los entes económicos.

De conformidad con el desarrollo protagónico de la Revisoría Fiscal en Colombia y con el objeto de proteger el principio de la independencia para que el Revisor desarrolle de manera idónea, objetiva e íntegra sus funciones, la misma Ley establece inhabilidades e incompatibilidades de obligatorio cumplimiento las cuales hacen referencia a circunstancias y hechos comprobables a fin de no comprometer la imparcialidad de quien está llamado a dar fe pública de las operaciones y actuaciones que debe vigilar. Son de obligatorio cumplimiento, ya por Ley, ya por los estatutos que las impongan.

Igualmente se reglamentan las responsabilidades y las sanciones que aplican al Revisor Fiscal como garantía de la ejecución integral de sus funciones.

El titular de la Revisoría Fiscal debe ejercer sus funciones bajo los principios éticos desarrollados en capítulos anteriores, con el objeto de desarrollar integralmente la tarea encomendada por mandato de la Ley. Conocer sus derechos y obligaciones, responsabilidades y las sanciones que le son imputables, constituye un valor agregado en el ejercicio de la actividad y permite al ejecutor de la disciplina ostentar elementos suficientes para adaptarse a las perspectivas de la sociedad.

METODOLOGÍA

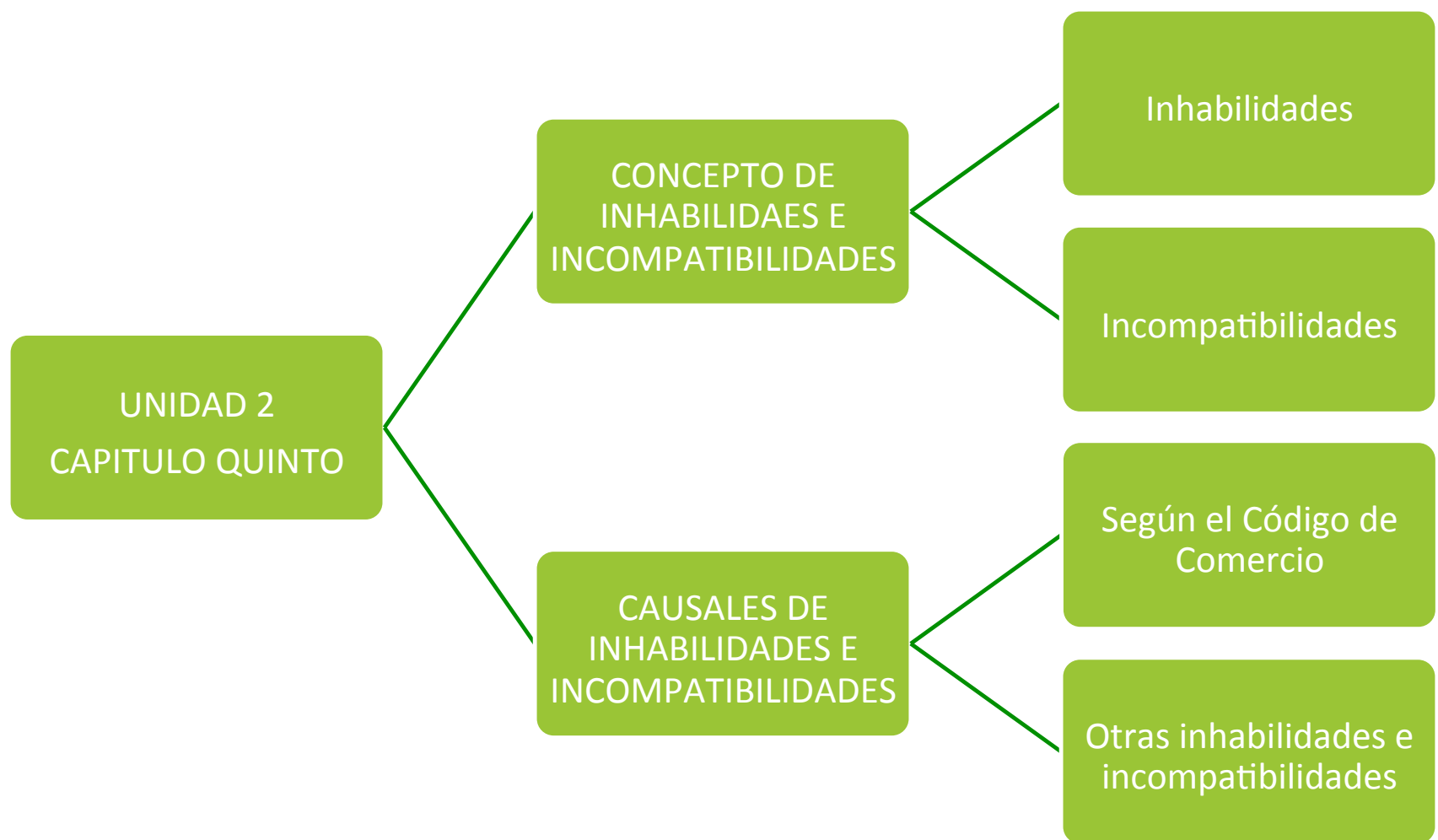
El estudio de la presente Unidad, se divide en dos grandes temas: el primero se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal y el segundo comprende las responsabilidades y sanciones. Para su aprendizaje es necesario realizar el análisis del material contenido en la cartilla de aprendizaje, seguido de lecturas complementarias.

Para la temática Responsabilidades y Sanciones, se plantean casos prácticos que serán

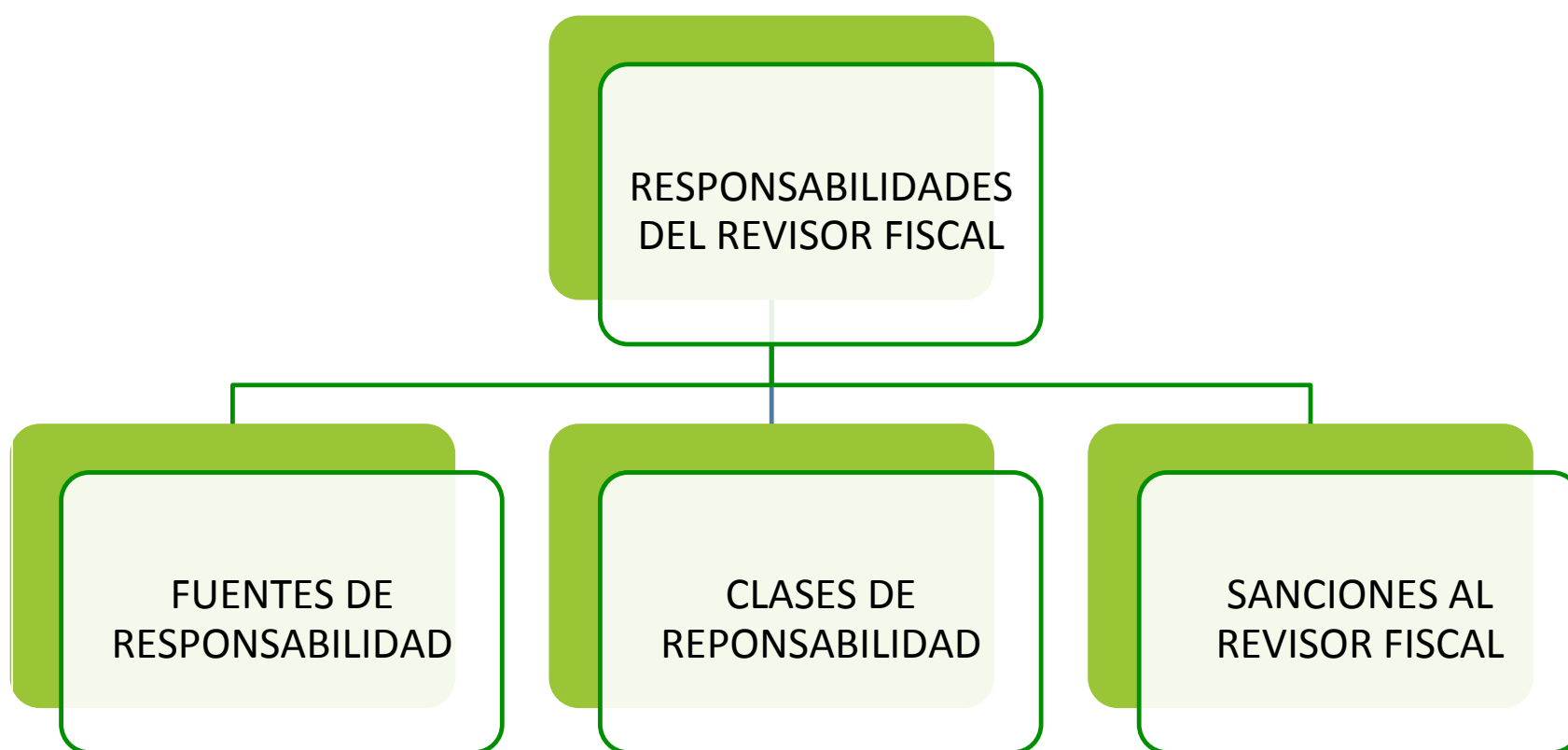
resueltos a través de la lectura de sentencias del Consejo de Estado, que permitirán al estudiante evaluar el conocimiento adquirido y su puesta en práctica. El taller tendrá un valor del 7% de la nota final.

Para finalizar el módulo, los estudiantes deben presentar una actividad evaluativa de selección múltiple que tendrá un porcentaje sobre la nota del módulo del 30%.

MAPA CONCEPTUAL



MAPA CONCEPTUAL



OBJETIVO GENERAL

A través del aprendizaje realizado en la semana 3 y 4 comprendida en la Unidad 2, el estudiante desarrollará las siguientes competencias:

- Conocerá y entenderá las limitaciones, incompatibilidades e inhabilidades en la función de Revisor Fiscal.
- Comprenderá el marco normativo del régimen de responsabilidad propio de la función contable, en particular de la revisoría fiscal y contará con elementos de juicio suficientes para definir, en situaciones concretas, la conveniencia o no de aceptar particulares encargos.
- El análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial permitirá al estudiante profundizar en la valoración de conductas que atenten contra el ordenamiento de la profesión contable.
- Evaluará y definirá las diferentes responsabilidades e implicaciones en el ejercicio del Revisor Fiscal en las sociedades, así como el régimen sancionatorio aplicable.

DESARROLLO TEMÁTICO

6.1 COMPONENTE MOTIVACIONAL.

Concientizar al estudiante sobre las limitaciones que debe tener presente en el ejercicio de la Revisoría Fiscal, así como de las responsabilidades y sanciones de tipo penal y disciplinario que implican el ejercicio inadecuado de sus funciones, permite que en el desarrollo de su actividad tenga conciencia de la trascendencia de la función atribuida más aún en un contexto en inminente proceso de globalización y apertura comercial.

Conocer el régimen de responsabilidades y sanciones del Revisor Fiscal permite al estudiante garantizar su actuar con sujeción a la Ley y los Estatutos. Lo anterior en consonancia con el precepto “el desconocimiento de la Ley no constituye excusa” y más aún cuando la labor que se pretende ejercer tiene implicaciones no solo individuales sino sociales por la calidad de los entes auditados.

6.2 RECOMENDACIONES ACADÉMICAS.

Se recomienda realizar las lecturas complementarias al finalizar el estudio de cada capítulo de la Unidad.

Respecto al taller de casos prácticos, se recomienda realizar sin hacer uso de la cartilla y lecturas. Al finalizar proceder a comparar la solución dada por el estudiante con el material de estudio.

6.3 DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS.

CAPITULO QUINTO: Inhabilidades e Incompatibilidades del Revisor Fiscal


El ejercicio de la Revisoría Fiscal en Colombia tiene dos fuentes: la legal, que fundamenta la provisión del Revisor Fiscal en la norma, y la contractual o potestativa, dada por los estatutos o voluntad del máximo órgano social. Para desempeñar el cargo de Revisor la Ley exige la calidad de contador público o Sociedades de contadores Públicos y, la inscripción en la Junta Central de Contadores, lo que otorga la Tarjeta Profesional de Contador Público o la Tarjeta de Registro de la Sociedad de Contadores. Ahora bien, con el objeto de proteger la independencia para que el Revisor desarrolle de manera idónea, objetiva e íntegra sus funciones, la misma Ley establece inhabilidades e incompatibilidades de obligatorio cumplimiento.

1. CONCEPTO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Sea lo primero, entrar a definir los conceptos de inhabilidades e incompatibilidades:

1.1 Inhabilidades

Según el tratadista Peña (2011) “Las inhabilidades consisten en la falta de cualidad, capacidad y condición, requeridas



para hacer algo o que lo imposibilitan para el ejercicio de un cargo. Se da generalmente por expreso mandato normativo y como las ha definido el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública en Colombia: Se refieren a condiciones propias de quien aspira a ejercer el cargo y que le impiden su posesión y el ejercicio pleno del mismo” p. 225

En cuanto a la naturaleza del régimen de inhabilidades, la Corte Constitucional ha señalado a través de su sentencia C-952 de 2001, que el régimen asegura ciertas cualidades y condiciones para ejercer el cargo; dentro de estas cualidades la Corte señala que se pueden encontrar la idoneidad, moralidad y probidad para cumplir con las responsabilidades.

La inobservancia de las inhabilidades implica para Revisor Fiscal una sanción de carácter disciplinario por cuanto se presentan antes de la aceptación del cargo.

1.2 Incompatibilidades

Ahora bien, según Peña (2011) “la incompatibilidad es una prohibición legal que busca mantener y defender la independencia, objetividad y transparencia del Revisor Fiscal durante el ejercicio de su cargo, en aras de preservar la confianza pública y credibilidad que le son características, respecto de sus actuaciones e informes. De este modo no se le permite ejercer simultáneamente este cargo con otros en el mismo ente económico, y de hacerlo incurrirá en claras violaciones que le llevan a ser sancionado con trasgresión a la Ley.

También la Junta Central de Contadores se ha referido a la incompatibilidad definiendo-

la como: aquella circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad y que le impide continuar ejerciendo el cargo so pena de contrarias las disposiciones legales y éticas, o bien, le significan abstenerse de aceptar otro tipo de encargo o generar otro tipo de vínculos” p. 227.

2. CAUSALES DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


2.1 Según el Código de Comercio

De manera taxativa el artículo 205 del Código de Comercio establece de manera conjunta las inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal de la siguiente manera:

ARTÍCULO 205. No podrán ser revisores fiscales:

- A) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz;
- B) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad, y .
- C) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo.



A manera de desarrollo de los anteriores numerales, es necesario enunciar en que consiste la **subordinación en Colombia**. El Código de Comercio define:

ARTICULO 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Por lo tanto una empresa se considera matriz de otra cuando ésta ejerce el control económico, financiero y administrativo sobre ella directa o indirectamente, por ende la subordinada es aquélla que carece de autonomía por el hecho de ser dominada por una matriz.

El control económico implica que la entidad subordinada recibe aportes directos o indirectos de la matriz de tal magnitud, que pierde su autonomía, ya que las decisiones dependen de la matriz.

El control financiero resulta de la adquisición de compromisos u obligaciones (Pasivos) complementarias a las amortizaciones de la deuda y los intereses de la empresa subordinada que hacen que ésta pierda su autonomía en la toma de decisiones administrativas y financieras.

El control administrativo de la subordinada por parte de la matriz se presenta en el momento en que la matriz impone sus criterios en el funcionamiento interno, como el nombramiento de funcionarios o en la representación que se haga de la subordinada.

Las sociedades subordinadas pueden ser de dos tipos:

- **Filiales:** Son aquellas entidades controladas y dirigidas económica y administrativamente por la matriz en forma directa.
- **Subsidiarias:** Son aquellas cuyo control y dirección lo ejerce la matriz de forma indirecta a través de una o varias filiales suyas, o por sociedades que tienen algún vínculo de dependencia de la matriz o las filiales de estas.

Una sociedad se considera subordinada por una matriz cuando se presentan los siguientes casos:

Cuando el 50% o más del capital pertenece a la matriz, ya sea en forma directa o por intermedio de sus filiales o subsidiarias.

Cuando las sociedades tengan el derecho de emitir los votos que constituyan el quórum decisorio en la junta de socios o en la asamblea de accionistas o en la junta directiva de la empresa.

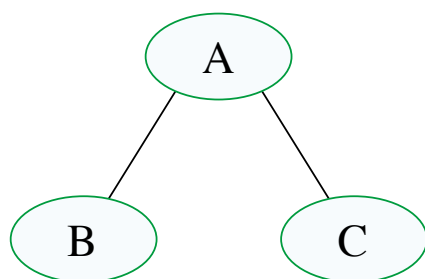
Cuando las sociedades subordinantes participen en el 50% o más de las utilidades de la empresa, así sea prerrogativas o pactos previamente establecidos.

Existe vinculación entre dos o más sociedades cuando entre ellas se presentan intereses comunes de carácter administrativo, económico y financiero y cuando existe relación de dependencia o control

Veamos algunos ejemplos que cita Gomez (2001).

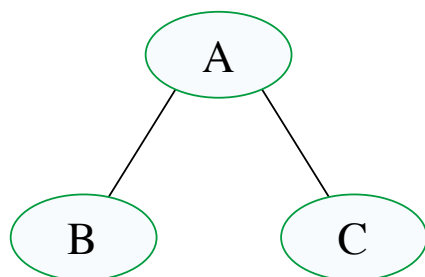
Ejemplo 1.

Si la sociedad A posee el 75% del capital de otra B y el 60% de otra C, entonces A es una matriz de B y C. Las sociedades B y C serán filiales de A, teniendo en cuenta que entre B y C no existe ningún vínculo.



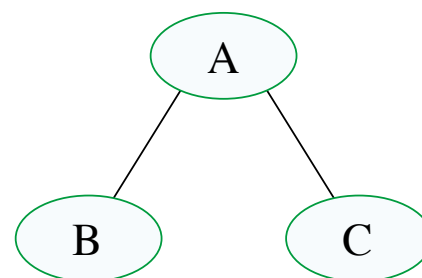
Ejemplo 2.

Si la sociedad A posee el 65% del capital de otra B y esta última es dueña del 80% del capital de otra C, entonces A es una matriz de B y C, B será filial de A. La sociedad C será subsidiaria de A.



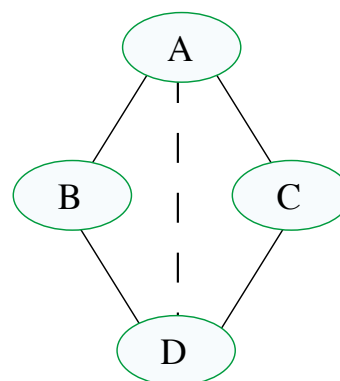
Ejemplo 3.

Si la sociedad A posee el 70% de las acciones de otra B y del 40% de otra C, sobre la cual la sociedad B tiene también el 45% de su capital, entonces A es una matriz de B y C, B será filial de A y la C será subsidiaria de A.



Ejemplo 4.

Si la sociedad A posee respectivamente el 75% y el 65% del capital de dos sociedades B y C y estas tienen a su vez el 45% y el 40% del capital de una cuarta, entonces B y C serán filiales de A. La sociedad A no tiene vinculación directa con D, pero posee una parte de esta a través de B y C, por ello D es subsidiaria de A.



Igualmente, se procede a explicar los **grados de consanguinidad y afinidad**, los cuales son necesarios para entender el numeral segundo del artículo 205 Co. Co.

El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen a la misma familia. Conviene conocer su significado desde

el punto de vista jurídico, puesto que el grado de parentesco resulta determinante a la hora de heredar, cobrar prestaciones sociales, indemnizaciones por accidente, etc. y en este caso constituye una incompatibilidad para ejercer como Revisor Fiscal.

También debe distinguirse entre el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia, y el segundo respecto de la familia del cónyuge,

computándose los grados de la misma forma.

Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. El parentesco civil es el que resulta de la adopción.

En el siguiente cuadro se reflejan los grados de parentesco, tanto por línea recta o directa y colateral, como por consanguinidad y afinidad.

Grados	Titular/Conyuge			
1º	Padres	Suegros	Hijos	Yerno/Nuera
2º	Abuelos	Hermanos	Cuñados	Nietos
3º	Bisabuelos	Tíos	Sobrinos	Biznietos
4º	Primos	-	-	-

Así las cosas cuando el artículo 205 del Co. Co. se refiere al cuarto grado de consanguinidad, primero civil y segundo de afinidad, se está refiriendo a los padres, hijos, tíos, hermanos y primos (Consanguinidad); a los hijos adoptivos y padres adoptantes (Civil); y a los cuñados, suegros e hijos habidos por fuera del matrimonio del esposo o esposa (Afinidad).

El artículo 215 del Co. Co inhabilita a cualquier persona (Contador Público o sociedad) para ejercer el cargo en más de cinco sociedades por acciones.

Existen otras inhabilidades e incompatibilidades, como las establecidas en el artículo

107 numeral 4º y artículo 164 numeral 2º de la Ley 222 de 1995 que señala:

“ARTÍCULO 107. No podrá ser designado como contralor: 4. Quien desempeñe en la entidad deudora, en su matriz o en sus subordinadas, el cargo de gerente, administrador, revisor fiscal, representante legal o cualquier otro de dirección, o que los hubiere desempeñado dentro de los cinco años anteriores a la admisión de la convocatoria”

“ARTICULO 164. No podrá ser designado liquidador: 2. Quien ejerza el cargo del revisor fiscal”.

3. OTRAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ahora bien de manera específica se pueden producir otras inhabilidades e incompatibilidades, a saber:

3.1 LEY 43 DE 1990:

Artículo 42. El Contador Público rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y a la ética o cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de su profesión.

Artículo 43. El Contador Público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus asociados no se consideren idóneas.

Artículo 47. Cuando un Contador Público hubiere actuado como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiere propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente a favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su retiro del cargo.

Artículo 48. El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de Revisor Fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.

Artículo 50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden contable,

se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.


Artículo 51. Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o Revisor Fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado en sus funciones.

3.2 DECRETO 2463 DE 1981.

Sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios de las Cajas de Compensación Familiar y asociaciones de cajas.

ARTICULO 3o. No podrán ser elegidos miembros de los consejos o juntas directivas, ni directores administrativos o gerentes, quienes:

- a) Se hallen en interdicción judicial o inhabilitados para ejercer el comercio;
- b) Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, excepto los culposos;
- c) Hayan sido sancionados por faltas graves, en el ejercicio de su profesión;
- d) Tengan el carácter de funcionarios públicos;

- 
- e) Hayan ejercido funciones de control fiscal en la respectiva entidad durante el año anterior a la fecha de su elección o desempeñado cargos de nivel directivo, asesor, ejecutivo, técnico o administrativo en la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTICULO 4o. No podrá ser designado como revisor fiscal principal o suplente, quien:

- a) Se halle dentro de algunas de las situaciones previstas en los literales a), b), c) y d) del artículo anterior;
- b) Tenga el carácter o ejerza la representación legal de un afiliado a la respectiva entidad;
- c) Sea consocio, cónyuge o pariente, dentro de los grados indicados en el artículo 2º., de cualquier funcionario de la entidad respectiva;
- d) Haya desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la Caja o asociación de Cajas de que se trate.

El revisor fiscal, en todo caso, debe ser contador público y no podrá prestar sus servicios como tal simultáneamente a más de dos entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTICULO 6o. Los miembros de los consejos o juntas directivas, revisores fiscales y funcionarios de las Cajas y asociaciones de Cajas no podrán, durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cesación en las mismas, en relación con las entidades respectivas:

- a) Celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona contrato o acto alguno;
- b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por la entidad a la cual sirven o han servido o se trate del cobro de prestaciones y salarios propios;
- c) Prestar servicios profesionales;
- d) Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieren conocido o adelantado durante su vinculación;


Las anteriores prohibiciones se extienden a las sociedades de personas, limitadas y de hecho de que el funcionario o su cónyuge hagan parte y a las anónimas y comanditarias por acciones en que conjunta o separadamente tengan más del cuarenta por ciento del capital social.

CAPÍTULO SEXTO: Responsabilidades del Revisor Fiscal y sanciones

1. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL

Para el desarrollo de este capítulo es necesario integrar conocimientos del derecho penal y el derecho comercial al estudio de la Revisoría Fiscal.

Sea lo primero definir el término responsabilidad. La responsabilidad según Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008) “es entendida como el deber impuesto por el ordenamiento jurídico, en virtud del cual existe la obligación de responder por las consecuencias de los propios actos o de aquellos realizados por terceros. En etimología y



gramática, el término responsabilidad está vinculado a una persona. Por consiguiente, es un término de relación, y por ello, indica que se es responsable ante otra persona: una que ocasiona el daño y otra que lo sufre o padece” p.113.

La responsabilidad vista desde la perspectiva penal implica que una persona ha realizado un hecho delictivo y que por tanto es merecedor de la imposición de una pena. Ahora bien, desde el punto de vista comercial y civil, dicha responsabilidad implica un resarcimiento patrimonial frente a los daños causados.

Así las cosas, para que una determinada conducta humana pueda ser calificada como delictuosa es necesario que se integren varios elementos: el primero es que esté descrita y calificada por el legislador como una conducta humana reprochable y punible (tipicidad); segundo que lesione o ponga en peligro, sin justificación jurídicamente relevante el interés que el legislador quiso tutelar (antijuricidad) y tercero que exista una voluntad dirigida a realizar dicha conducta (culpabilidad).

Para el jurista Reyes Echandía la culpabilidad puede definirse como “la actividad consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente”. Es decir que el sujeto omite el deber de actuar conforme al derecho de manera consiente pudiendo haberlo hecho adecuándose a las normas jurídicas y por tanto es reprochable dicha actitud.

La culpabilidad puede tener tres formas: el dolo, la culpa y la preterintención.

El **dolo** es la actitud de la voluntad dirigida conscientemente a la realización de una conducta típica y antijurídica. Es decir que el sujeto que actúa con dolo, tiene la voluntad y el conocimiento de vulnerar el interés jurídico tutelado. Un ejemplo de lo anterior es quien realiza un hurto. El sujeto tiene toda la voluntad de realizarlo y a su vez la conciencia y conocimiento de que es una actitud prohibida.

La **culpa** es según Reyes Echandía, la actitud consiente de la voluntad que determina la verificación de un hecho típico y antijurídico por omisión del deber de cuidado que le era exigible al sujeto. La culpa es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Esto significa que el comportamiento delictivo no se produce por que el sujeto así lo hubiese querido, sino porque no tuvo cuidado suficiente al que estaba obligado.

Las modalidades de la culpa son:

- 1) Imprudencia: obrar sin cautela
- 2) Negligencia: la persona que por indolencia deja de realizar una determinada conducta a la cual estaba jurídicamente obligada o la ejecuta sin la diligencia necesaria para evitar la producción del resultado; no emplea medios necesarios o idóneos para evitar resultados posibles
- 3) Impericia: ausencia de capacidad e idoneidad
- 4) Inobservancia del reglamento, ordenes y disciplina

La **preterintención** se despliega cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente.

Existen causales de inculpabilidad, es decir causales que implican que el sujeto investigado pueda ser librado de responsabilidad o disminuida la misma. Estas causales pueden ser el caso fortuito o la fuerza mayor, estado de necesidad, insuperable coacción ajena, error invencible, legítima defensa, entre otras; sin embargo para el caso en estudio y conforme a la Orientación Profesional del CTCP es necesario nombrar las siguientes:

1. CASO FORTUITO: cubre los supuestos en los cuales es lícita la actuación en cuyo curso se produce accidentalmente el hecho nocivo. Es ausencia de antijuridicidad. Ejemplo: en el caso del médico cardiólogo que a sabiendas de que el paciente padece una afección cardíaca autoriza la intervención por parte del cirujano quien opera con desconocimiento de tal deficiencia.

2. FUERZA MAYOR: La misma fuerza irresistible, anula el control por la voluntad de los movimientos y ante la misma el sujeto no puede oponerse; es ausencia de acción. Origen de la fuerza mayor:

- a) Natural
- b) Proveniente de acometida o golpes de animales: Ej: cuando una persona perseguida por un perro furioso se introduce en habitación ajena
- c) Movimientos involuntarios: Ej. quien resbala en las escaleras y empuja sin querer a otro que cae y rompe o daña un bien ajeno


d) Fuerza de una persona que actúa dolosamente y obliga a otra a realizar un movimiento corporal lesivo: Ej. Quien lleva por la fuerza el brazo y la mano de otro para hacerle clavar un puñal.

3. Según el CTCP (2008), también es causal de inculpabilidad **LOS HECHOS DE TERCEROS**, “los cuales se presentan cuando la causa del mal se debe a la intervención de terceros que ejecutan o inducen acciones contrarias a las determinadas por quien tiene la responsabilidad de la acción. En este caso, el Revisor Fiscal no cuenta con autonomía para la ejecución de la labor y en tal razón existen vicios de voluntad.

A título de ejemplo de hecho de terceros, se puede mencionar la situación en la que se determinan procedimientos, de manera que las instrucciones son establecidas con la obligatoriedad de su observancia, como sucede en el caso de quienes actúan por cuenta de organizaciones profesionales que establezcan la obligatoria aplicación de un determinado Know How, caso en el cual el Revisor Fiscal persona natural, posee un atenuante en el acto cometido.” p. 114.

Según lo anterior el Revisor Fiscal responde civil, penalmente y disciplinariamente. Su responsabilidad no solo se da respecto a los asociados sino también en relación con la entidad auditada y los terceros.

La responsabilidad puede resolverse en indemnizaciones, multas, suspensiones o interdicciones para ejercer como Revisor Fiscal, remoción del cargo, suspensión o cancelación de la matrícula profesional o privación de la libertad, según el tipo de falta y su gravedad.



Según Reyes y De la Hoz, en torno a **la responsabilidad por el descubrimiento de fraudes e irregularidades** surgen las siguientes precisiones:


1. El Revisor Fiscal es responsable desde la inscripción en el registro mercantil, hasta el día en el cual se inscriba en dicho registro otro nombramiento. Esto de conformidad con el artículo 164 del Código de Comercio, “Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como los revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-621 del 29 de julio de 2003, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, afirmó lo siguiente: “del texto de los artículos acusados no se deduce con claridad si los efectos de la falta de inscripción del “nuevo nombramiento” se producen únicamente frente a terceros. En efecto, las normas no sólo no lo señalan, sino que el artículo 164 dice que el representante o revisor “para todos los efectos legales” continuará siendo el que aparece inscrito. Aunque es dable pensar que el conocimiento que tengan los socios respecto de la causa que puso fin al ejercicio del cargo hace que frente a ellos y a la sociedad sí sea oponible la desvinculación y que por lo tanto ante ellos no exista la responsabilidad inherente a la función de representante legal o revisor fiscal, en cierta clase de sociedades, especialmente en las anónimas, no es presumible el

conocimiento general por parte de los socios respecto de la renuncia, remoción, muerte o cualquier otra causa de retiro del cargo.

El precepto normativo permite concluir que el registro del nombramiento de representante legal o revisor fiscal tiene un carácter constitutivo, en cuanto a que los efectos jurídicos de la designación no se producen sino con la inscripción en la Cámara de Comercio, pues la norma expresamente señala que para todos los efectos legales quien figure como revisor o representante legal, lo seguirá siendo hasta tanto continúe inscrito en el registro mercantil.

2. La responsabilidad se determina dentro del marco legal, aplicando criterios de tipo profesional. Por tanto es responsable por la falta o inadecuada planeación, por la evaluación equivocada o ligera de niveles de riesgo, por la no práctica de pruebas o su realización deficiente, por la determinación de muestras y la evaluación de riesgos, etc.
3. Sus obligaciones son de medio no de resultados. Lo anterior implica que debe poner en ejecución todos y cada uno de los medios idóneos para la consecución de los objetivos del cargo, con el fin de obtener certeza fundada y comprobable sobre la ausencia de regularidades.
4. Como su auditoria es integral, es responsable si no cubre todas las áreas de la empresa.
5. El control es permanente, así que obrar de manera periódica le implica responsabilidad.


- 
6. Debe realizar denuncias oportunas, es responsable si al conocer la irregularidad no la comunica o la hace de manera tardía.
 7. Es responsable si no influye de manera decidida sobre la administración, para mejorar procedimientos y corregir debilidades.
 8. Como de su firma se desprende una presunción de legalidad, es responsable si no se cerciora que los actos se ajusten a las normas legales, reglamentarias, estatutarias o de orden interno expedidas por los órganos sociales.
 9. Es responsable si su concepto se encuentra viciado y no ejerce independencia.
 10. Es responsable al obrar con dolo o culpa.
 6. Omite dar traslado a entes gubernamentales de control, de las irregularidades materiales que observe.
 7. Cuando no se cerciora de que se registren todas las operaciones, de la existencia y validez de los soportes, de la razonabilidad de los estados financieros, de que la contabilidad se lleve en forma adecuada y se registren todas las transacciones.
 8. Omite cerciorarse de las condiciones de archivo y conservación de los comprobantes de cuentas y libros de contabilidad, registro de acciones y actas.
 9. Cuando no inspecciona los bienes y valores sociales, tolera inadecuadas medidas de seguridad o conservación.
 10. Cuando sin causa justificada no dictamina todos los balances de la sociedad.

Igualmente la responsabilidad del Revisor Fiscal se compromete cuando:

1. No conoce las normas legales aplicables al ente auditado, ya sobre funcionamiento ya sobre operaciones.
2. Desconoce las normas estatutarias vigentes.
3. Omite recopilar las normas internas vigentes.
4. Omite recopilar pruebas.
5. No da noticia escrita de las irregularidades advertidas. Omite formular denuncia.
11. Cuando siendo necesario se abstiene de convocar los órganos sociales y por tanto no les rinde informes oportunos sobre irregularidades.
12. Cuando viola la reserva comercial, el secreto industrial o el secreto profesional.

En materia de pruebas son errores comunes que se deben evitar:

1. Pruebas esporádicas
2. Áreas no auditadas
3. Pruebas limitadas

- 
4. Pruebas no representativas
 5. Ausencia de confirmación de la evidencia
 6. Exagerada confianza en la auditoría interna
 7. Utilización del personal insuficiente entrenado
 8. Falta de verificación del cumplimiento de las normas legales.

En materia de informes debe evitarse:

1. Retardar su emisión
2. Hacerlos verbalmente
3. Dirigirlos a los funcionarios de jerarquía inferior al representante legal
4. Suministrarlos a personal no autorizado
5. Utilizarlos para fines no relacionados con el cliente
6. Omitir denunciar irregularidades por no considerar que son significativas
7. Hacer concesiones sobre sus términos

Ahora bien la responsabilidad puede ser individual, civil subsidiaria, personal subsidiaria, solidaria, compartida o colectiva. A saber:

- Responsabilidad individual se refiere a que la responsabilidad de reponer el daño recae exclusivamente sobre el

Revisor Fiscal. Suele ser disciplinaria o penal.

- Responsabilidad civil subsidiaria es la que recae sobre un tercero, no causante del daño o lesión.
- La responsabilidad personal subsidiaria, consiste en la no ejecución de la pena principal y por tanto a la ejecución de la subsidiaria. Es ejemplo de lo anterior cuando se impone como pena principal la multa y al no pagarse, se cumple con la subsidiaria que es arresto.

- La responsabilidad solidaria es cuando varias personas son responsables por el daño causado.

- La responsabilidad compartida o colectiva se presente cuando se realizan actividades en grupo, en los cuales existe una distribución de funciones entre los integrantes del mismo y es difícil determinar la responsabilidad de cada uno de los participantes.


2. FUENTES DE RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad se deriva de diversas causas entre las cuales es menester nombrar:

2.1 Violación de derechos:

La violación de derechos se genera cuando (en terceros, la sociedad o en su conjunto) el revisor fiscal causa daños que impliquen detrimento de la integridad moral o patrimonial.

Los derechos conforme a la Constitución Política son fundamentales (art. 11 al 41 de



la Constitución Política); sociales, económicos y culturales (art. 42 al 77 de la C.P.); colectivos y del medio ambiente (art. 78 al 82 de la Constitución Política).

2.2 Incumplimiento de las obligaciones:

Como se explicó en capítulos anteriores, las funciones del Revisor Fiscal se encuentran reglamentadas ya por la Ley o por los Estatutos. El incumplimiento de las obligaciones se puede dar por omisión o por acción.

2.3 El abuso de derechos:

Según el Consejo Técnico se entiende por abuso “una perversión del uso, es decir, el mal uso o empleo arbitrario de los derechos, llevándose fuera de los límites impuestos por la razón y la justicia, que por tanto atacan en forma directa o indirecta las leyes o el interés general.” CTCP, 2008, p.118.

El abuso de derecho típico según el CTCP es el uso indebido de la información privilegiada.

2.4 Generación de daño:

Conforme a la expresión del CTCP, el daño es un detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. Puede originarse en el dolo, la culpa o el caso fortuito, según el grado de intencionalidad, negligencia o causalidad entre el revisor fiscal y la consecuencia del acto.

El daño puede ser no solo de carácter patrimonial sino también de índole moral, cuan-

do se ocasiona lesión a una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos, por acción culpable o dolosa; en todo caso, el afectado, debe ser indemnizado o resarcido una vez se declare la responsabilidad del revisor fiscal.

3. CLASES DE RESPONSABILIDAD

Conforme a las funciones que desarrolla el Revisor Fiscal, la responsabilidad que tiene puede ser de naturaleza disciplinaria, administrativa o contravencional, civil, penal.


3.1 Responsabilidad disciplinaria

Se presenta cuando exista violación de la ética profesional, en los casos previstos en los artículos 35 a 40 de la Ley 43 de 1990, cuya determinación y sanción le compete al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC–, por cuanto, como es de conocimiento, los profesionales de la Contaduría Pública deben actuar con honestidad, rectitud, conciencia moral e independencia mental, siempre. Lo anterior se realiza bajo el procedimiento establecido por el Código Disciplinario bajo los principios constitucionales del derecho de defensa y debido proceso.

Cabe mencionar que la investigación y responsabilidad disciplinaria es independiente de otras responsabilidades en las que puede incurrir el Revisor con su conducta.

3.2 Responsabilidad civil

Consagrada en el artículo 211 del Código de Comercio, el cual preceptúa que “El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o terceros



por negligencia o dolo en el cumplimiento de funciones”. Por lo tanto se refiere a las consecuencias patrimoniales y económicas derivadas de una conducta o hecho que genera una lesión en el patrimonio ajeno y por tanto implica una indemnización por daños y perjuicios a quien resultare afectado con dicho acto o hecho.

El origen de ésta responsabilidad es la negligencia o dolo, definidos previamente, del Revisor Fiscal en el ejercicio del cargo.

La responsabilidad civil supone siempre una relación entre dos sujetos, de los cuales uno ha causado un daño y otro lo ha sufrido. Por lo tanto implica una obligación de reparación. De manera general la responsabilidad civil es la obligación de quien causa un daño a otro, de reparar económicamente los perjuicios ocasionados, con el objetivo de conservar el equilibrio patrimonial entre los particulares.

El Revisor Fiscal también es responsable civilmente por la no preparación o difusión de los estados financieros, según lo establecido en el artículo 42 inciso 2°.

La responsabilidad civil es investigada por querrela de parte de quien se considere con derecho al resarcimiento respectivo.

3.3 Responsabilidad administrativa

Se presenta cuando el Revisor Fiscal no cumple con sus funciones previstas en la ley, o las cumple irregularmente o en forma negligente, o cuando falta a la reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo (art. 214 y 216 del Código de Comercio), y en tal virtud le es aplicable las sanciones administrativas a que haya lugar.

Entre las Sanciones se puede hablar de multas, suspensión del cargo o de facultades específicas (certificación de las declaraciones tributarias, atestación de Estados Financieros para las Superintendencias) o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo, según la gravedad de la falta. Estas faltas pueden ser investigadas a petición de parte o de oficio.

Estas sanciones serían impuestas por las autoridades de inspección, vigilancia y control, tales como la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, o por la Superintendencia Financiera respecto de las sociedades controladas por ésta (artículo 217 del Código de Comercio).

Dentro de las funciones sobre las que recae responsabilidad administrativa por parte del Revisor Fiscal encontramos las siguientes:

- Multa por infringir prohibiciones sobre libros. El artículo 58 del Co.Co establece que la multa será impuesta por la Cámara de Comercio o Superintendencia Financiera o de Sociedades según sea el caso, de oficio o a petición de parte, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Los libros en los que se cometa dichas irregularidades carecerán, además, de todo valor legal como prueba a favor de los comerciales que los lleve.
- Cuando no pueda determinarse con certeza el verdadero responsable de estas situaciones serán solidariamente responsables del pago de la multa el propietario de los libros, el contador y el revisor fiscal, si este incurriere en culpa.

- Artículo 216. Incumplimiento de funciones del revisor fiscal. El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley, o que las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva prescrita en el artículo 214, será sancionado con multa hasta de 200 SMLV (conforme Ley 222 de 1995 art. 86), o con suspensión del cargo, de un mes a un año, según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la falta.
- Multa al revisor fiscal por no informar la situación de crisis económica del ente contable.
- Según la circular externa No. 08 de 1996 de la Supersociedades, los revisores fiscales de las personas jurídicas o de sucursales de sociedades extranjeras, tiene la obligación de denunciar ante esta Superintendencia la situación de crisis económica por la que atraviesa el ente contable.
- El incumplimiento de este deber dará lugar a que el Revisor Fiscal responda por los perjuicios que ocasionen la sociedad, a los asociados o a terceros y en todo caso, esta Superintendencia podrá imponerle multas hasta de 200 SMLM o suspenderlo en el cargo por un periodo de un mes o hasta de un año.

3.4 Responsabilidad penal

Está determinada en los artículos 42, 43 y 45 de la Ley 222 de 1995.

El inciso 2° del artículo 42 de la Ley 222 de 1995, prevé que “Los administradores y el Revisor Fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros”.

Por su parte, el artículo 43 de la misma Ley, dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas:


1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.
2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.

Y el inciso 2° del artículo 45 de la Ley 222 de 1995 preceptúa que la aprobación de las cuentas no exonera de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o Revisores Fiscales.

A esto se le puede agregar, que llegado el caso, podría estar incurso en delitos consagrados en el Código Penal como Falsedad en Documento, Favorecimiento y otros delitos más, los cuales tiene penas de prisión de varios años, al consignar dolosamente o suministrar datos a las autoridades o expedir constancias o certificaciones contrarias a la realidad u ordenar, tolerar, hacer o encubrir falsedades en los dictámenes de estados financieros, etc.

La investigación puede darse a petición de parte o de oficio.

Cuando las sanciones son impuestas por Organismos diferentes a la Junta Central de



Contadores, estos deben dar aviso correspondiente a dicho tribunal del control para realizar las respectivas anotaciones en la hoja de inscripción y control que lleva para cada profesional.

Es necesario hacer mención a disposiciones específicas sobre responsabilidad penal, a saber:

- Art. 157 Co. Co. Ordenar, tolerar, hacer o encubrir falsedades implica falsedad en documento privado.
- Art. 212 Co. Co. Responsabilidad penal del revisor fiscal que autoriza balances o rinde informes inexactos. El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal.
- Art. 62 Co. Co. Violar la reserva de los libros constituye sanción con arreglo al Código Penal.

3.5 Responsabilidad tributaria

Conforme a lo establecido en el artículo 659 del Estatuto Tributario acarrea sanción llevar o aconsejar llevar contabilidades, elaborar estados financieros o expedir certificaciones que no se adecuen a la realidad económica, no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones

tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria. La sanción de la que habla este artículo puede ser multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta impuesta por la Junta Central de Contadores.

También se consagra sanción de suspensión en el artículo 660 por inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria para el revisor fiscal que haya firmado las declaraciones o haya emitido los certificados financieros y demás pruebas con destino a la Administración Tributaria. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo. La sanción puede ir hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Contra la misma procederá recurso de apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción.

Respecto a la caducidad de la acción tributaria es necesario realizar las siguientes precisiones:

Si bien la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 52 relativo a la caducidad de la facultad sancionatoria y que hace parte del capítulo III que trata el procedimiento administrativo sancionatorio establece que la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiese ocasionarlas; término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado, esa misma disposición señala

que el término que allí establece aplica salvo lo dispuesto en leyes especiales.

Sabido es que, dado el carácter supletorio del Código de Procedimiento Administrativo, únicamente en ausencia de norma especial aplican sus disposiciones, razón por la cual con fundamento en el artículo 638 del Estatuto Tributario -norma especial- puede concluirse entonces, que el término para imponer las sanciones por violar normas que rigen la profesión de contador o revisor fiscal y la sanción a sociedades de contadores públicos previstas los artículos 659 del Estatuto tributario es de cinco (5) años.

4. SANCIONES AL REVISOR FISCAL

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, la Ley 43 de 1990 faculta a la Junta Central de Contadores para imponer sanciones disciplinarias a los contadores públicos. En su artículo 23 establece multas y sanciones a imponer con ocasión a la violación de la Ley:

4.1 Amonestaciones en el caso de fallas leves.

4.2 Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. El artículo 24 de la citada Ley reglamenta la imposición de multas estableciendo que se aplicará esta sanción cuando la falta no conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas que imponga la Junta Central de Contadores, será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro Nacional.

4.3 Suspensión de la inscripción

Consagrada en el artículo 25 de Ley 43/90, establece que la sanción de suspensión tiene

un término máximo de un año y de manera taxativa enumera las causales, a saber:

- La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión.
- La violación de las normas de ética profesional.
- Actuar con quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas.
- Desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.
- Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia como fuente de registro e informaciones contables.
- Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión.
- Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas.
- Las demás que establezcan las leyes.

4.4. Cancelación de la inscripción

(artículo 26 ibídem). Son causales de cancelación de la inscripción de un Contador Público las siguientes:

- Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración



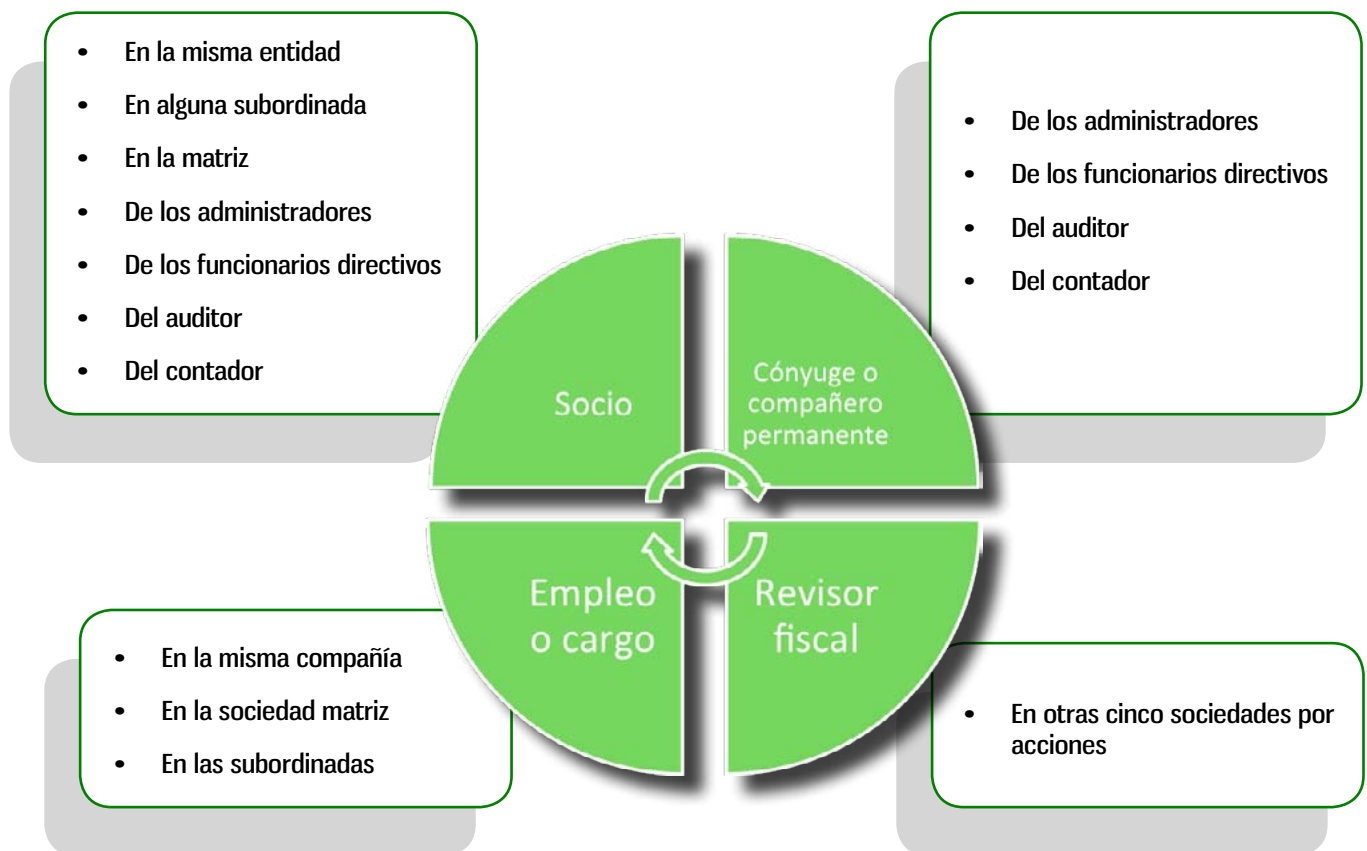
de justicia, por razón del ejercicio de la profesión.

- Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción.
- Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la Contaduría Pública.
- Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados.
- Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las Sociedades de Contadores Públicos en los siguientes casos: a) Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía, actuaren a nombre de la sociedad de Contadores Públicos y desarrollaren actividades contrarias a la ley o a la ética profesional. b) Cuando la sociedad de Contadores Públicos desarrolle su objeto sin cumplir los requisitos establecidos en esta misma ley.
- La sanción de cancelación al Contador Público podrá ser levantada a los diez

(10) años o antes, si la Justicia Penal re-habilitare al condenado.

4.5 La caducidad para que la Junta Central de Contadores imponga sanciones disciplinarias se encuentra establecida en el Código Contencioso Administrativo, por cuanto la Ley 43 de 1990 no consagra término y la señalada en el Código Disciplinario Único solo es aplicable a particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y a quienes administren recursos públicos u oficiales. Por tanto la caducidad de la acción es de tres (03) años conforme a lo establecido en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo referenciado anteriormente contados a partir de la realización de la conducta o la ocurrencia del hecho. Termina que se interrumpe con la expedición y notificación del acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria. Tratándose de una falta continuada, el cómputo de la caducidad debe hacerse a partir del último acto que se tuvo conocimiento.

6.3.2 Síntesis de cierre del tema.





TIPOS DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

ORIGEN	COMPETENCIA	CADUCIDAD
Violación a la ética profesional Art. 35 al 40 de la Ley 43 de 1990	Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC-	Tres años

TIPOS DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

ORIGEN	COMPETENCIA	CADUCIDAD
Incumplimiento de funciones o cumplimiento irregular Falta a la reserva	Entidades de Inspección, vigilancia y control	Tres años



TIPOS DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD PENAL

ORIGEN	COMPETENCIA
ORDENAR, TOLERAR, HACER O ENCUBRIR FALSEDADES AUTORIZAR BALANCES O RENDIR INFORMES INEXACTOS VIOLAR LA RESERVA DE LOS LIBROS	JURISDICCION PENAL

TIPOS DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

ORIGEN	COMPETENCIA	CADUCIDAD
Llevar contabilidades o estados financieros o certificaciones: - No adecuadas a la realidad - Que no coincidan con asientos contables y Contrarios a las NAGA	DIAN	Cinco años

BIBLIOGRAFÍA

- Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Orientación profesional del ejercicio de la contaduría. 21 de junio de 2008.
- Ley 43 de 1990. Reglamentaria de la profesión de contador público.
- PEÑA BERMUDEZ, Jesús María. Revisoría Fiscal. Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado. Bogotá: Eoce Ediciones, 2011. 392 p.
- REYES OVIEDO, Álvaro y DE LA HOZ CAMPO, William. Aspectos legales de la revisoría fiscal. Todo lo que un contador público debe conocer sobre los aspectos legales de la revisoría fiscal en Colombia. Barranquilla: Universidad Libre de Colombia, 2011. 188 p.
- Sentencia C-530 de 2000.

REMISIÓN A FUENTES COMPLEMENTARIAS

- Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Orientación profesional del ejercicio de la contaduría. 21 de junio de 2008.
- Ley 43 de 1990. Reglamentaria de la profesión de contador público.
- Sentencia 00145 del 28 de octubre de 2010. Consejero ponente Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, sección primera.



SISTEMA PENAL ACUSATORIO



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA**

Personería Jurídica Res. 22215 Mineducación Dic. 9-83

INTRODUCCIÓN

El sistema penal colombiano, a través de la implementación de la Ley 906 de 2004, logró una transformación que era de suma importancia para que el país tenga una proximidad a un sistema de juzgamiento mucho más efectivo. El sistema penal anterior, se configuraba en un modelo inquisitivo y escritural que terminó convertido en un proceso lento y poco efectivo que conllevó a que la administración de justicia se viera truncada por formalismos y a que la sociedad fuese incrédula frente a la misma.

A través de una reforma constitucional y la Ley 906 de 2004, se logra desarrollar e implementar un nuevo sistema penal basado en la oralidad, concentración, contradicción e inmediación de las pruebas, y sobre todo garantista de los derechos fundamentales.

La Ley 906 de 2004 pone en práctica un nuevo sistema que implicó reformas en todo nivel, tanto estructural como funcional y hasta en un cambio de actitud tanto de operadores como de abogados intervinientes.

En las dos siguientes unidades se realizará un estudio sucinto del sistema penal acusatorio, conociendo las diferentes fases que lo componen y sus intervinientes.

METODOLOGÍA

El estudio de la presente Unidad, permite conocer los distintos sujetos dentro de la actuación procesal, y las dos fases iniciales indagación e investigación y formulación de la imputación. Es indispensable que el estudiante entienda la relación que existe entre los dos capítulos que entrará a estudiar y la especialización por la cual optó, razón por la que se sugiere ver video de auditoría forense y sistema penal del Doctor Danilo Lugo.

Para su aprehensión del tema es necesario realizar el análisis del material contenido en la cartilla de aprendizaje, seguido del video que realiza una representación visual del sistema penal acusatorio, el cual es complementario de la unidad 3 y 4 y las lecturas complementarias.

Al final del presente modulo se realizará un foro de debate que permitirá al estudiante poner en práctica su actitud argumentativa. El foro tendrá un valor del 20% de la nota final.

CAPITULO SÉPTIMO: SISTEMA PENAL ACUSATORIO



SUJETOS PROCESALES

La Fiscalía General de la Nación

La parte acusada

Los intervinientes

Tercero civilmente responsable

Policía Judicial

DIAGRAMA DEL PROCESO PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO



Objetivo General

El estudiante desarrollará las siguientes competencias:

- Comprenderá la estructura del sistema penal acusatorio colombiano.
- Analizará los principios rectores y las garantías procesales en el sistema penal acusatorio colombiano.
- Conocerá las funciones de los sujetos procesales dentro de la actuación penal.
- Determinará los límites, términos y funcionarios que intervienen en cada una de las fases del sistema acusatorio Colombiano.
- Estudiará dos de las fases - investigación e indagación y formulación de la imputación - que componen el sistema penal de procedimiento en Colombia.

Desarrollo temático

6.1 Componente Motivacional.

El conocimiento del esquema del sistema penal acusatorio, permite de manera global al auditor forense, establecer las etapas y sujetos procesales, con el fin enfocar su investigación y obtener los resultados adecuados que colaboren en la administración de justicia participando ya en calidad de perito, testigo o experto.

6.2 Recomendaciones académicas.

A manera de introducción es necesario ver el video del Dr. Danilo Lugo que permitirá al estudiante entender la relación de la unidad que inicia a estudiar con su desarrollo profesional.

Se recomienda realizar la visualización del video de la Fiscalía General de la Nación, de manera fragmentada entre las unidades 3 y 4 con el fin de que los conocimientos de cada unidad sean reforzados una vez se haya estudiado cada tema.

Para la elaboración del foro y taller, se aconseja realizar apoyado en el material de estudio e investigación que realice el estudiante durante el desarrollo de la unidad.

6.3 Desarrollo de cada una de las unidades temáticas.

CAPÍTULO SÉPTIMO: SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Con ocasión a la reforma constitucional del año 1991, dentro del desarrollo del concepto Estado Social de Derecho, se hace necesario

implementar un sistema procesal que fuese mucho más garantista. Por lo tanto a través del acto legislativo No. 003 se permite la promulgación de la Ley 906 de 2004 la cual da inicio a un nuevo sistema penal en el que imperan principios como el de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, entre otros.

Este nuevo esquema de investigación y juzgamiento adoptado en Colombia se promulga a través de la Ley 906 de 2004, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005. Dicha Ley es resultado de diversas reflexiones de integrantes de la comisión constitucional, servidores de la rama judicial, integrantes de la academia, profesionales de derecho y gremios en general. El Sistema Acusatorio tiene fundamento constitucional, en los artículos 29 y 250.

El artículo 29 establece el derecho de todo ciudadano a un proceso “público sin dilaciones injustificadas, así como a presentar pruebas y a controvertir las que allegue en su contra”. El artículo 250 reza que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querrela o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del

Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de garantías”.

Lo anterior sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, contentivos de normas superiores relativas a los principios de publicidad, oralidad, celeridad, inmediación y contradicción propias del sistema acusatorio.

Este nuevo sistema penal le da a la funciones a la Fiscalía exclusivas de ente investigador y la desprovee de las funciones jurisdiccionales. Crea un Cuerpo de Policía Judicial, un control de garantías en cabeza de los Jueces para verificar y asegurar la legalidad de todos aquellos actos que tienen relación con los Derechos Fundamentales. Fortalece un juicio público, oral y concentrado, consagra el principio de oportunidad - que no se opone al principio de legalidad- como un instrumento efectivo para operar el sistema a partir del marco de la política criminal del Estado.

Inicialmente el sistema fue implementado de manera gradual en el territorio colombiano; actualmente rige en todo el país.

El sistema penal acusatorio está integrado por principios rectores y garantías procesales que vale la pena nombrar dentro del estudio de este modulo. Según el tratadista Cadavid Botero, dichos principios y garantías pueden ser clasificados en tres grandes ramas:

1. Normas de contenido fundante
2. Normas de contenido garantista
3. Normas de contenido funcional

Estudiemos los tres grandes grupos:

1. Normas de contenido fundante: se trata de aquellas que afirman el fundamento de la Ley 906 la cual es la seguridad nacional o individual.

Dentro de este gran grupo encontramos derechos como al de la dignidad humana (art. 1), libertad (art. 2), prelación de tratados internacionales (art. 3), igualdad (art. 4), restablecimiento del derecho (art. 22), imparcialidad (art. 5), lealtad (art. 12).

El restablecimiento del derecho se refiere a la obligación de la Fiscalía y los jueces de adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan a su estado anterior de ser posible con el fin de restablecer los derechos vulnerados.

La imparcialidad se refiere al imperativo de establecer con objetividad la verdad y justicia por parte de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

2. Normas de contenido garantista: son los principios y garantías procesales que permiten la realización de justicia material y tutela judicial.

Encontramos la legalidad (art. 6), presunción de inocencia (art. 7), derecho de defensa (art. 8), derecho de las víctimas (art. 11), gratuidad (art. 13), derecho a la intimidad (art. 14), derecho de contradicción (art. 15), inmediación (art. 16), publicidad (art. 18), doble instancia (art. 20), cosa juzgada (art. 21), cláusula de exclusión (art. 23).

Derecho de las víctimas implica que el

estado debe garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia.

El derecho de contradicción significa que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas así como a intervenir en su formación.

La publicidad se traduce en que todas las audiencias que se desarrollen en la etapa de juzgamiento estarán abiertas a todo el que las quiera presenciar, salvo decisión judicial previa en sentido contrario, cuando el orden público, la seguridad nacional o la moral pública, se puedan ver comprometidos o cuando se puedan ver afectados los intereses de la justicia, especialmente la imparcialidad del juez.

La cláusula de exclusión significa que aquella prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que debe excluirse de la actuación procesal.

3. Normas de contenido funcional: son aquellas que en estricto orden tienen que ver con la legalidad de las formas.

Son la actuación procesal (art. 10), la concentración (art. 17) y la oralidad (art. 9).

La actuación procesal según el código, es el desarrollo de todo acto dentro del proceso teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia.

La concentración significa que debe procurarse practicar la prueba de una vez, en una misma etapa del proceso.

La oralidad comprende todos los procedimientos de la actuación. Es necesario que para garantizar el registro se empleen medios técnicos adecuados.

Para realizar el estudio del sistema penal acusatorio, inicialmente se describirá de manera general a los sujetos procesales que intervienen en la actuación procesal y luego se estudiarán las fases que componen dicho procedimiento.

1. PARTES E INTERVINIENTES

Para realizar un estudio del sistema penal acusatorio consagrado en la Ley 906 de 2004, es necesario determinar los sujetos procesales dentro de la actuación, a saber:

1.1. Funcionario judicial

El funcionario judicial es el Juez de la República quien en cabeza del Estado es el encargado de administrar justicia.

Dentro del proceso penal participan dos tipos de Jueces:

- a. Juez de control de garantías quien es el encargado de proteger los derechos y garantías fundamentales en las audiencias preliminares tales como la audiencia de formulación de la imputación, audiencia de control de legalidad de la captura, audiencia de control de legalidad de las diligencias de registro y allanamiento, etc.

La función de Juez de control de garantías es desempeñada por el Juez Penal Municipal y tiene permanencia dentro del proceso.

- b. Juez de conocimiento es quien resuelve de fondo el proceso penal, eso implica que resuelve temas como preclusión, formulación de acusación, pruebas, juicio oral, individualización de la pena y sentencia, y lectura de sentencia.

1.2. Las partes:

En el proceso penal se estructura un ente acusador que es la Fiscalía General de la Nación y una parte acusada quien es el imputado o acusado quien durante todo el proceso debe estar debidamente representado por su defensor.

- a. La Fiscalía General de la Nación a quien corresponde el ejercicio de la acción penal desde el recibo de la noticia criminal.
- b. La parte acusada es la persona a quien se le atribuye la comisión del delito. La parte acusada se denomina de diferentes formas dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre:
 - Indiciado, se denomina dentro de la etapa de investigación e indagación.
 - Imputado: adquiere esta calidad jurídica desde el momento de la formulación de la imputación
 - Acusado, calidad que adquiere a partir de la formulación de la acusación ante el juez de conocimiento

Todo indiciado, imputado o acusado tiene derecho a tener un defensor ya sea nombrado por éste o designado por el Estado como defensor público con el fin de que ejerza su derecho fundamental a la defensa.

- c. Los intervinientes son el Ministerio Pú-

blico y la víctima.

El ministerio público se encarga de defender el patrimonio del Estado, los derechos y garantías fundamentales y el orden jurídico (art. 109).

La víctima es la persona natural o jurídica que haya sufrido algún daño o perjuicio con la comisión del delito. Sus derechos dentro del proceso son a la verdad, a la justicia y a la reparación. A partir de la audiencia preparatoria es necesario que esté representada por un abogado.

- d. Tercero civilmente responsable es la persona natural o jurídica que de acuerdo a la Ley civil debe responder solidariamente por los perjuicios ocasionados con el delito. Su oportunidad procesal de intervención se da en el incidente de reparación integral.
- e. Policía judicial: los funcionarios de la policía judicial pertenecen a diferentes instituciones que dependen funcionalmente de la Fiscalía General de la Nación, a saber:
 - Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía – CTI
 - Policía judicial de la Policía nacional – DIJIN o SIJIN
 - Policía judicial de la Procuraduría General de la Nación
 - Policía judicial de la Contraloría General de la República
 - Autoridades de tránsito
 - Inspectores de policía, etc

2. INVESTIGACION

El proceso penal acusatorio tiene dos grandes etapas: una es la **INVESTIGACIÓN** que incluye la indagación e investigación y la otra es el **JUICIO**. La fase de indagación comienza con la noticia criminal y termina con la formulación de la imputación, con la que se da lugar a la investigación que concluye con la presentación del escrito de acusación, que da inicio al juicio que termina con la ejecutoria de la sentencia que pone final al proceso.

Iniciemos de esta manera el estudio de las etapas del proceso:

2.1. INDAGACION

La actividad de indagación que despliega la Fiscalía General de la Nación comienza con el conocimiento de una **NOTICIA CRIMINAL** ante la Policía Judicial y tiene por objeto la realización de actividades que le permita averiguar sobre unos hechos con características de delito.

Esta etapa finaliza ya sea con la formulación de la imputación, caso en el cual se da lugar a la etapa subsiguiente que es la de la investigación, o la prescripción de la acción penal que determinaría el archivo de la actuación.

En esta fase no existen pruebas y se trata en realidad de un espacio de verificación de información tendiente a establecer si los hechos materia de averiguación por la Fiscalía General de la Nación, constituyen una o varias conductas punibles y, si es así, proceder a individualizar o identificar a sus probables autores o partícipes.

2.1.1. Noticia criminal

¿Cómo se informa sobre la ocurrencia de un delito?

Puede darse a través de diversas maneras, por medio escrito o verbal y relatando de manera específica los hechos, a saber:

■ **Denuncia:** es el mecanismo mediante el cual una persona que tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, lo pone en conocimiento de la autoridad competente. Toda persona debe realizar denuncias de las posibles conductas punibles, no sin olvidar la garantía constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente, ni parientes en cuarto grado de consanguinidad o civil y segundo de afinidad o cuando medie secreto profesional.

■ **Querella (Art. 108):** es especial para determinados delitos que exigen que la persona directamente afectada o perjudicada (o sus herederos) informen la comisión de delito para que la Fiscalía pueda iniciar el trámite.

El término para presentar la querella es de seis (6) meses a partir de la ocurrencia del hecho de manera general. (Art. 73)

Los delitos que requieren querella se encuentran de manera taxativa en el Código Penal. Son algunos de estos delitos las lesiones personales, la injuria, calumnia, inasistencia alimentaria, hurto simple, estafa, abuso de confianza, daño en bien ajeno, usura, infidelidad a los deberes profesionales, entre otros.

La querrela es desistible hasta antes de la conclusión de la audiencia preparatoria, es decir el querellante puede manifestar su deseo de no continuar con los procedimientos.

- **Petición especial (Art. 75):** se denomina petición especial la formulada por el Procurador General de la Nación a la Fiscalía para que inicie la acción penal, cuando un delito haya sido cometido en el extranjero ya por un nacional colombiano o por un extranjero que haya perjudicado con el delito al estado colombiano y que el posible responsable se encuentre dentro del territorio nacional.
- **Actuación oficiosa:** significa que si en algún momento el ente acusador tienen conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento que probablemente implique la ocurrencia de un delito, debe avocar conocimiento.

Ejemplo de noticia criminal:

A las ocho de la noche de 28 de febrero de 2005, la señora ROSA MARTÍNEZ se presentó en la Sala de Denuncias de la Policía Nacional para dar cuenta de la presencia de un cuerpo, al parecer sin vida, en el inmueble situado en la carrera 10Z número 18-35 de Bogotá, donde ella reside. Los policiales reportaron el caso de manera inmediata al sistema de información para la asignación de la policía judicial, la que a su vez hizo el reporte de iniciación de las actividades al fiscal competente; inspeccionó el lugar de los hechos y el cadáver; efectuó entrevistas a los vecinos del lugar quienes manifestaron que el presunto responsable del delito era PEDRO PÉREZ, a quien momentos después capturaron en posesión del arma homicida. La policía judicial fijó, descubrió, identificó,

recolectó y embolsó técnicamente los elementos materiales probatorios o evidencia física, y los remitió al almacén de evidencias y a los laboratorios respectivos. Realizados los actos urgentes, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, envió el informe ejecutivo al fiscal correspondiente¹.

2.1.2. Medios de conocimiento

Una vez se informa a la Fiscalía de la noticia criminal, momento a partir del cual el Fiscal General de la Nación asume la coordinación, dirección y control jurídico del caso, ésta debe proceder a recopilar todos los elementos probatorios, es decir los MEDIOS DE CONOCIMIENTO, desarrollando labores de investigación con el objeto de que luego puedan ser introducidos dentro del juicio.

Los medios de conocimiento son aquellos que le permiten a la Fiscalía establecer que ha ocurrido un hecho calificado como delito y son:

- Los elementos probatorios y la evidencia física y
- La información legalmente obtenida.

Esta labor previa de indagación está encomendada en la Policía Judicial bajo la dirección de la Fiscalía.

2.1.2.1. Elementos materiales probatorios y evidencia física: consisten en cualquier cosa tangible que permita establecer los hechos ocurridos y la identificación e individualización de sus autores y partícipes. Se considera evidencia física:

1- Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. 2005. P. 20.

- Huellas, rastros, residuos y similares
- Armas, instrumentos, objetos o cualquier otro medio para la ejecución del delito
- Dinero, bienes y otros
- Elementos de toda índole hallados en la diligencia
- Material de grabación, filmación, fotografía entre otros

Pretende la evidencia física probar la presunta comisión del delito, individualizar al sospechoso, corroborar testimonio de la víctima, establecer modo de operación. Es necesario que su recaudo haya sido legal y que el medio de prueba sea auténtico. Es decir que su obtención se haya realizado conforme a la Ley y que se haya sometido a una adecuada cadena de custodia.

21.2.2. Información legalmente obtenida: se refiere a las entrevistas realizadas por la Policía Judicial, sobre la ocurrencia del hecho delictivo, a la víctima o testigos presenciales.

21.3. Actos urgentes

Los primeros actos posteriores a la noticia criminal son adelantados por la Policía Judicial sin ninguna autorización previa, siempre que éstos tengan carácter URGENTE (art. 205). Son actos de carácter urgente los siguientes:

21.3.1. La inspección del lugar: es el examen minucioso y completo del lugar de los hechos, también denominado escena del crimen cuyo fin es descubrir, identificar, recoger y embalar los elementos probatorios y evidencias físicas que tiendan a mostrar la realidad del hecho, identificar el autor o partícipes.

Debe documentarse el lugar con el fin de conservarlo a través del tiempo, mediante fotografías, videos, entre otros. La inspección puede ser ejecutada en lugar diferente al de la comisión de los hechos y se denominan escenas relacionadas.

21.3.2. La inspección del cadáver: consiste en la inspección del lugar y el embalaje técnico del cadáver, practicando una identificación plena del cadáver y posteriormente, a través de medicina legal, una necropsia.

21.3.3. Entrevistas e interrogatorios: cuando la policía judicial considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación, realizará entrevista con ella registrando los resultados a través de los medios idóneos.

21.3.4. Búsqueda en bases de datos: se pueden realizar cotejos simples por parte de la policía judicial en bases de información de acceso público.

Ejemplo de medios de conocimiento y actos urgentes:

El 4 de mayo de 2005, en el inmueble de PEDRO PÉREZ situado en la carrera 104 número 8-80 de esta ciudad, la menor PAOLA PINTO RAMÍREZ fue accedida carnalmente por su padrastro PEDRO PÉREZ, motivo por el cual al día siguiente, en las horas de la mañana, PAOLA se suicidó al colocarse una corbata alrededor de su cuello y suspenderse de ella luego de sujetarla a una varilla de la azotea de su vivienda.

La menor fue encontrada en tal situación por su progenitora MARTHA RAMÍREZ quien la llevó al CAMI del sector donde al corroborar su deceso, dieron informe a la

policía judicial que allí mismo inspeccionó el cadáver y lo remitió debidamente embalado a Medicina Legal para las experticias de rigor en el cuerpo y las prendas de la menor.

El investigador ALEX MÁRQUEZ, adscrito al CTI y quien conoció del caso, luego de reportar el inicio de la actuación y teniendo en cuenta la facultad de realizar actos urgentes en situaciones como ésta, entrevistó a algunas compañeras de curso de la occisa, entre ellas a MARLENE CORREA quien le informó que el día anterior, 4 de mayo, la vio muy triste y le comentó que su padrastro había tratado de accederla carnalmente, pero que ella se había defendido propinándole un golpe en un ojo.

El investigador solicitó al patólogo forense la necropsia, procedimiento en el que halló laceraciones y hematomas en la región genital exterior e interior de la víctima, las cuales eran recientes y evidenciaban manipulación sexual, y pudo establecer como causa de la muerte anoxia cerebral producida por asfixia mecánica (ahorcamiento) El laboratorio de biología, por interconsulta del patólogo forense, encontró en el pantalón interior de la menor rastros de semen. Previa autorización del juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, se cotejó el hallazgo con muestra suministrada por PEDRO PÉREZ, dictamen que dio positivo para perfil genético entre víctima e indiciado”².

2.1.4. Informe de ejecutivo (art. 205).

Dentro de las 36 horas siguientes la policía judicial debe dar a conocer a la Fiscalía los resultados de su actividad, de los actos urgentes y sus resultados, en forma detallada con el fin de establecer la ocurrencia de un acto delictivo y sus probables partícipes o autores.

Elaborado el informe ejecutivo el Fiscal debe analizar que dicho informe se ajuste a los requisitos de procedibilidad, principios rectores y garantías procesales. En caso de no cumplir con éstos el Fiscal procede a su rechazo e informa de las irregularidades a las autoridades disciplinarias y penales competentes y tomará las decisiones necesarias para que la investigación continúe.

2.1.5. Programa Metodológico de la Investigación

Una vez recibido el informe ejecutivo de la policía judicial el Fiscal que asume la dirección de la investigación puede ordenar ratificar algunos de los actos realizados por la policía judicial y reunirse con los miembros de la policía. A través de esta reunión se elabora un programa metodológico que contiene objetivos sobre la hipótesis del delito, criterios de evaluación, delimitación de tareas, procedimientos, entre otros.

En esta etapa el fiscal puede ordenar la práctica de todas las actividades que NO IMPLIQUEN RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES y que sirvan para esclarecer los hechos, individualizar a los autores, proteger las víctimas, evaluar los daños.

Los actos de investigación de campo y análisis de laboratorio deben ser realizados por la policía judicial y no por el Fiscal.

En desarrollo del programa metodológico se pueden realizar actividades que requieren control judicial ya sea previo o posterior. Este control judicial es ejercido por el Juez de Control de Garantías, quien de acuerdo a lo establecido en la Ley es el Juez de constitucionalidad y legalidad, garante de los derechos fundamentales que pueden verse afectados durante la investigación, función

2- Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. 2005. P 30.

que se desarrolla a través de AUDIENCIA PRELIMINAR entendiendo por ella el escenario en el que se ordenan, resuelven o adoptan durante la etapa de investigación, las peticiones, actuaciones y decisiones que se relacionen con la restricción de derechos fundamentales y con otros aspectos de importancia tales como la aplicación del principio de oportunidad.

ACTUACIONES QUE REQUIEREN CONTROL JUDICIAL POSTERIOR

Las actuaciones que se proceden a enumerar a continuación, una vez diligenciadas las ordenes por el Fiscal, deben ser sometidas por el mismo, dentro de las 24 horas siguientes o 36 (dependiendo del tipo de prueba), a consideración del Juez de Control de Garantías quien realizará una audiencia de revisión de la legalidad de lo actuado.

A. Registros y Allanamientos. Se puede dar sobre inmueble, nave o aeronave con el objeto de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física. Solo procede sobre delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.

La orden que decreta el allanamiento debe estar fundamentada en motivos razonables que indican que en el lugar allanado se encuentra el presunto autor del hecho delictivo, o que en su interior se encontrará elementos materiales probatorios y evidencia física. Estos motivos se deben encontrar respaldados en un informe del CTI o en declaraciones juramentadas o elementos materiales o evidencia física que establezcan el nexo causal entre el bien sujeto de registro y el delito investigado.

Aquí es muy importante resaltar que el allanamiento sin orden judicial ha sido un tema tratado en sentencias que manifiestan: “en relación con el conocimiento fundado a que se hace alusión, oportuno se ofrece precisar que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que si bien se aleja de la categoría epistemológica de certeza, también excluye la mera sospecha, ubicándose fundamentalmente en el grado de probabilidad. De tal suerte que preferiblemente los funcionarios de policía judicial previo a la práctica de las diligencias aludidas, deben desarrollar labores previa de investigación que les permitan inferir que se encuentran dentro de una de las situaciones que facultan la incursión domiciliaria sin orden judicial previa. La nueva legislación procesal, ciñéndose a esa teleología, prevé mayor control a este tipo de actividades de policía judicial, al introducir como figura novedosa “la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos”.³.

El término para cumplir la orden es de 30 días si se expide en la fase de indagación y 15 días si se da con posterioridad a la formulación de la imputación.

El registro debe realizarse en los lugares autorizados, debe garantizarse la menor restricción a los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo tanto los bienes incautados serán los que consten en la orden, salvo circunstancias de flagrancia o aparición de nuevos medios de conocimiento que tengan relación con el delito. Al finalizar se debe levantar un acta en la que conste el procedimiento realizado.

3- CSJ, Cas. Penal, Sentencia noviembre 9 de 2006. Rad. 23327. M.P. MARINA PULIDO DE BARON.

Finalizada la diligencia la policía judicial dentro de las 12 horas siguientes, debe informar al Fiscal sobre todos los detalles del operativo y remitir los objetos incautados, o si se realizaron capturas deben poner de manera inmediata a los capturados a órdenes del Fiscal.

Si se trata de flagrancia, la policía puede realizar el allanamiento del presunto autor. Si el inmueble en el que se refugia es ajeno debe solicitarse consentimiento del propietario o tenedor o en su defecto solicitar la orden a la Fiscalía, excepto si existen voces de auxilio que soliciten su intervención inmediata. También puede ser excepción al requisito de orden de media orden de la Fiscalía, cuando no exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden.

El Código establece la posibilidad de reclamar la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos con el fin de que la prueba sea excluida por ilegalidad en la obtención.

Debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 24 horas siguientes.

Ejemplo de allanamiento:

El apoderado de un laboratorio contacto a la policía judicial para informar que en una bodega ubicada en la zona industrial de la ciudad, se encontraba almacenada una importante cantidad de medicamentos falsificados, empleando las mismas marcas y distintivos de los originales producidos por la empresa representada por él. El investigador ve-

rifica que en la dirección suministrada existe una bodega y establece que en la noche son cargadas camionetas con cojas cuyos distintivos corresponde a los ismos descritos por el representante del laboratorio, razón por la cual solicita una orden de registro y allanamiento al fiscal del caso, quien encuentra fundada la información para decretarla porque se corrobora la información entregada por el apoderado de la empresa farmacéutica en el sentido de la existencia de la bodega y del almacenamiento en ella de productos que corresponden a la descripción efectuada por él. El fiscal ordena la diligencia, la policía judicial la práctica y encuentra medicamentos aparentemente falsificados, etiquetados con las marcas indicadas por el apoderado del laboratorio. El agente entrega el informe y dentro de las 24 horas siguientes el fiscal acude ante el juez de control de garantías para la realización del control de legalidad correspondiente.⁴

B. Retención de correspondencia: bajo motivos razonablemente fundados el Fiscal puede ordenar al cuerpo técnico de investigación proceda a retener la correspondencia del indiciado. Esta medida no puede extenderse por más un año.

Una vez la policía judicial proceda a examinar la correspondencia, debe informar al Fiscal dentro de las doce (12) horas siguientes.

La orden del Fiscal debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 24 horas siguientes.

4- MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 63 y 64 p.

C. Interceptaciones: “Por orden del Fiscal y con el único fin de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, se pueden interceptar mediante grabación magnetofónica o similar las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y semejantes que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tenga interés para los fines de la actuación”⁵.

De acuerdo al Decreto 1704 de 2012, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, siempre que así se requiera para efectos propios de la interceptación de comunicaciones, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y aquellos que ejerzan funciones de policía judicial deben garantizar la reserva de los datos y la confidencialidad de la información, so pena de investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

El término máximo de esta orden es de seis meses prorrogables previa autorización del Juez de Control de Garantías.

Dicha orden debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 24 horas siguientes.

D. Información dejada en internet: si se tienen motivos fundados se puede ordenar la aprehensión de computadores o unidades de almacenamiento para que expertos en la materia procedan a recolectar y custodiar la información necesaria para la investigación.

Una vez realizado lo anterior deben devolverse los elementos aprendidos.

Dicha orden debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 24 horas siguientes.

E. Vigilancia y seguimiento de personas: esta orden puede expedirse por el término de un año con autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalía. Si transcurrido este término no se ha logrado ningún resultado es necesario cancelar la orden, sin perjuicio de que si surgen nuevos motivos pueda volverse a expedir.

Durante la ejecución de la orden, puede emplearse cualquier medio que la técnica aconseje, como por ejemplo tomar fotografías y filmar videos.

Debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes.

Ejemplo de vigilancia y seguimiento de personas:

“A través de una llamada de un informante, la Fiscalía recibe el dato de que un sujeto que se hace llamar J.J. López se encuentra reclutando menores de edad con la promesa de convertirlas en modelos fuera del país, cuando en verdad se trata de un integrante de una red de trata de personas. De las primeras diligencia encomendadas a la policía judicial, el Fiscal establece que el modo de operación de J.J. es similar al de otra persona denunciada por esos mismos hechos seis meses atrás y que este sujeto ha previsto para fin de mes organizar un desfile de modas con las menores que ya ha reclutado. El fiscal, con base en el informe de la policía judicial, solicita al Director Seccional de Fiscalías autoriza-

ción para realizar vigilancia pasiva a J.J; impartida la autorización, acude dentro de las 36 horas siguientes ante el Juez de control de Garantías para que este efectúe el control de legalidad y terminada la vigilancia, repite el mismo procedimiento sobre lo actuado en ella”⁶

- F. Vigilancia de cosas:** se puede dar sobre inmuebles, naves, aeronaves o cualquier otro vehículo o mueble. El término de esta orden no puede extenderse a más de un año sin perjuicio de que si surgen nuevos motivos pueda volverse a expedir.

Durante la ejecución de la orden se puede emplear cualquier medio idóneo siempre y cuando no afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado, imputado o tercero.

Debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes.

- G. Análisis e infiltración de organizaciones criminales:** “si el fiscal infiere con base en motivos razonablemente fundados que el indiciado o imputado pertenece o está relacionado con alguna organización criminal, que corresponda a la indagación o investigación que se adelanta, puede ordenar a la policía judicial la realización del análisis de la organización en cuestión para conocer su estructura, la agresividad de sus integrantes y puntos débiles, y después ordenar la planificación, preparación y manejo de una operación para que uno o varios agentes encubiertos de la agencia que ejerce labores de policía judicial la infil-

tren, con el fin de obtener información útil de la investigación”⁷

- H. Actuación de los agentes encubiertos:** cuando el Fiscal tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo a los medios de conocimiento que le permitan inferir que indiciado o el imputado en la investigación a su cargo continua desarrollando una actividad criminal, con la autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, si ello resulta indispensable para el desarrollo de la investigación.

“Esta facultad implica que uno o varios funcionarios de la policía judicial, e inclusive particulares, al actuar en esa condición realicen actos extrapenales con trascendencia jurídica, de manera que puedan actuar en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y adelantar transacciones con él, si fuera necesario”⁸

El término máximo de duración de esta orden es de un año, prorrogable por un término igual.

- I. Entrega vigilada:** implica permitir la entrega o transporte de mercancía ilegal dentro del territorio nacional o fuera de éste, de manera vigilada por la policía judicial. Esta orden requiere aprobación del Director Nacional o Seccional de Fiscalías.

Debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes.

6- Ibídem, 68 p.

7- Ibídem, 70 p

8- Ibídem, 72 p

- J. **Búsqueda selectiva en bases de datos de información confidencial:** si la búsqueda implica revisión de información confidencial, el Fiscal podrá autorizarla mediando posteriormente la legalidad del Juez de Control de Garantías.

La orden debe someterse a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes.

Ejemplo de la procedencia y práctica de una búsqueda selectiva en base de datos de información confidencial:

“Como resultado de la captura en flagrancia de varios delincuentes que se encontraban efectuando un atraco a una sucursal bancaria, a uno de ellos le fue encontrado un teléfono móvil celular, el cual registraba varios números recibidos y discados dentro de las tres horas anteriores al asalto. El investigador relaciona dichos números en su informe ejecutivo y solicita al fiscal su autorización para establecer sus titulares y los lugares de origen y destino de las llamadas. Para estos efectos, el fiscal del caso imparte la orden al policía judicial de acceder a las bases de datos de las empresas de telefonía celular con el fin de establecer la identidad de los suscriptores de las líneas registradas en la memoria del aparato y encuentra que uno de ellos corresponde al cajero de otra sucursal del mismo banco afectado. Dentro de las 36 horas siguientes, el fiscal concurre ante el juez de control de garantías para que se efectúe la verificación de la legalidad de esta actuación.”⁹

- K. **Exámenes de ADN que involucren al indiciado o imputado:** requiere autorización previa del Fiscal quien posteriormente

debe someter la orden a control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías dentro de las 36 horas siguientes.

Ejemplo de procedencia y práctica de un examen de ADN

La madre de un menor formula una denuncia en contra de su actual compañero permanente por hacer accedido carnalmente a su hija en forma violenta. El fiscal del caso ordena a la policía judicial tomar muestras biológicas del padastro de la niña para cotejarlas con las encontradas en su cuerpo. El indiciado se niega a cooperar con el procedimiento, situación de la cual es informado el fiscal a cargo, quien en vista de tal circunstancia acude ante el Juez de control de garantías para que este imparta su autorización para la realización del procedimiento.

ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA

Al desarrollar el programa metodológico de la investigación, existen actividades que afectan de manera directa los derechos fundamentales y por lo tanto requieren autorización previa del Juez de Control de Garantías. Estas pueden ser las siguientes:

- A. **Inspección corporal:** Cuando el fiscal tengo motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos para que creer que en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, puede ordenar la inspección corporal de esa persona, diligencia en la cual debe estar presente el defensor y observarse todas las consideraciones compatibles con la dignidad

9- Ibídem, 74 p.

humana. Si la persona se niega, el fiscal debe requerir la autorización judicial para adelantar el procedimiento.

B. Registro de personas: el fiscal puede solicitar el registro del presunto indiciado si tiene hechos fundados de la posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física. Este registro debe ser practicado por alguien del mismo sexo y debe garantizarse la dignidad humana. Este registro es diferente del preventivo realizado por la policía o del realizado con ocasión a la captura.

C. Obtención de muestras que involucren al imputado: tales como examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y pisadas.

OTRAS ACTUACIONES POSIBLES EN LA INDAGACIÓN

A. Declaración jurada: bajo la gravedad de juramento, la persona que presencia los hechos puede rendir declaración ante el Fiscal delegado, siempre y cuando sea el único medio para ordenar otras actuaciones, por ejemplo allanamiento o registro de personas, entre otras.

El Fiscal delegado dispondrá que la declaración se conserve en condiciones que permitan su presentación posterior ante el juez de control de garantías, o ante el juez de conocimiento, según el caso.

B. Afectación de bienes: “En la actuación penal los bienes o recursos pueden afectarse cuando se trata de elementos materiales probatorios o evidencia física, o son susceptibles de medidas cautelares o

de comiso, dependiendo de su naturaleza y la necesidad de afectación dentro del proceso. Por supuesto, cada modalidad de afectación debe ser resuelta definitivamente, según el caso, en decisión que disponga:

- Su destrucción
- Su devolución
- Su disposición a favor del fondo especial para la administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación
- Promover la acción de extinción de dominio.”¹⁰

C. Interrogatorio al indiciado: el fiscal o el funcionario de la policía judicial podrá ordenar la diligencia de interrogatorio al indiciado, a la cual debe asistir con su defensor.

CADENA DE CUSTODIA

La evidencia física y materiales probatorios deben ser sometidos a cadena de custodia para preservar sus autenticidad, esto es, que el procedimiento de aseguramiento de la evidencia establecido en la ley tiene por finalidad garantizar que ese objeto es el mismo y se encuentra en las mismas condiciones en fue hallado, recogido y embalado, así dicho material haya sido objeto de estudio del perito.

2.2. FORMULACION DE LA IMPUTACION

La fase de indagación concluye con la formulación de la imputación, archivo de las diligencias o la preclusión.

LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de **IMPUTADO** en audiencia ante el Juez de Control de Garantías.

Para formular la imputación el fiscal delegado debe tener elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, que le permita inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe del delito que se investiga.

Para formular la imputación, el Fiscal debe tener individualizado de manera concreta al imputado lo que implica nombre, identificación y domicilio. Igualmente debe relacionar de manera clara los hechos jurídicamente relevantes.

También puede terminar esta fase con la orden del Fiscal del **ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS**, si considera que respecto a los hechos que investiga no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o su posible existencia. Esta decisión no hace tránsito a cosa juzgada puesto que no es una decisión judicial, por tanto la investigación puede reanudarse cuando surjan nuevos elementos probatorios y siempre que no haya prescrito la acción penal.

Una vez formulada la imputación, el fiscal dispone de noventa (90) días para formular la **ACUSACION**, solicitar la **PRECLUSION** o aplicar el **PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**, término que se amplía a ciento veinte días (120) días cuando se trate de concurso de delitos, o cuando sea tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado.

LA AUDIENCIA PREPARATORIA deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de la acusación.

LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

La formulación de la imputación interrumpe la prescripción de la acción penal.

Ejemplo de imputación:

“Señor Juez: la Fiscalía General de la Nación ha solicitado concurrencia del Sr. Fulano de Tal, quien se identifica con la cédula de extranjería No. XXX y reside en la dirección XXX en la ciudad de Bogotá. Esta persona se encuentra presente en el recinto en compañía de su defensor.

De conformidad con la evidencia física y la información recolectada legalmente durante la indagación, se pudo establecer que el día xxx a las xxx horas, la Sra Mengana fue víctima de un atraco callejero cuando acababa de retirar del banco xxx sumas de xxx en efectivo.

La afectada procedió a formular la correspondiente denuncia y en diligencia de reconocimiento mediante fotografías adelantada posteriormente, identifico como autor del atraco a quien luego resultó ser el Sr. Fulano de Tal. Esta identificación fue ratificada mediante diligencia de reconocimiento en fila de personas.

Además la policía judicial entrevistó al vigilante del establecimiento bancario, quien manifestó haber visto a la persona identi-

cada en la fotografía por al denunciante merodeando por ese lugar en los días en que acaecieron los hechos.

Con base en lo anteriormente expuesto, formuló imputación al Sr. Fulano de Tal como autor del hurto perpetrado a la Sra. Mengana el día XXX a las XXX horas, el cual se produjo dejando en condiciones de indefensión, y a quien le hago saber que de aceptar el cargo que se le formula podrá recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible.”

Dentro de esta audiencia preliminar de formulación de la imputación pueden darse otros actos procesales como **medidas cautelares** y la petición de medida de aseguramiento.

La formulación de la imputación también posee importancia en la medida en que a partir de allí se crean escenarios procesales para tomar decisiones acerca de alegaciones preacordadas, acuerdos reparatorios, actuaciones abreviadas, etc.

Si el juez decide no formular la imputación, puede entonces dar también aplicación en este momento del proceso, al **principio de oportunidad** o disponer el **archivo de la actuación**.

Una vez formulada la imputación puede el imputado dar lugar a formas anómalas o anticipadas de terminación del proceso, que pueden ser de dos clases, realización de **preacuerdos con la Fiscalía**, o **aceptación de los cargos**, lo que da lugar a que se dicte **sentencia anticipada**.

La **negociación** en el proceso penal tiene como finalidades obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos,

propiciar la reparación integral de los perjuicios y lograr la participación del imputado en la resolución de su caso.

Desde la imputación y hasta antes de ser presentado el **escrito de acusación**, la Fiscalía e imputado pueden celebrar preacuerdos con miras a eliminar alguna causal de agravación punitiva o tipificar la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena.

Si el imputado no se acoge a figuras de terminación anticipada, el Fiscal continúa recaudando evidencias o con las que cuenta presenta escrito de acusación ante el juez de conocimiento; de no hacerlo solicitará al Juez de Conocimiento la **preclusión de investigación**.

2.2.1. Medidas cautelares:

El Juez de control de garantías en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella puede a petición del fiscal o de las víctimas decretar medidas cautelares sobre los bienes del imputado que garanticen el derecho a indemnización de los perjuicios causados con el delito.

Acreditado por la víctima la naturaleza del daño y la cuantía de su pretensión, se ordenará el embargo y secuestro de bienes que garanticen el pago de los perjuicios, aplicando el principio de proporcionalidad. Podrá remplazarse la medida cautelar con una caución en dinero que deberá prestarse en efectivo o mediante póliza por el imputado.

Igualmente sobre el imputado acaece una prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la formulación de la imputación, excepto si se garantiza la indemnización o se pronuncie de fondo sobre la inocencia del imputado.

2.2.2. Medidas de aseguramiento

Dentro de la audiencia de formulación de la imputación puede solicitarse la imposición de medidas de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y la evidencia física se infiera que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva y cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

- La medida de aseguramiento pretende evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia ya sea por la posibilidad de destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba o inducir a otros imputados, testigos, peritos o terceros a incurrir en falsedades o comportamientos desleales.
- La medida de aseguramiento se propone porque el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima o sociedad
- La medida de aseguramiento se propone porque resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá su sentencia.

Estas medidas pueden ser las siguientes:

a. Privativas de la libertad:

- Detención preventiva en establecimiento de reclusión
- Detención preventiva en residencia

b. No privativas de la libertad: implican

- Obligación de someterse a mecanismo de vigilancia electrónica

- Obligación de someterse a vigilancia de una persona o institución
- Obligación de presentarse periódicamente ante autoridad que designe el Juez
- Obligación de preservar buena conducta individual, familiar y social
- Prohibición de salir del país o residencia
- Prohibición de comunicarse con determinadas personas
- Prohibición parcial de salir de residencia en horarios fijados
- Prestación de caución

2.2.3. Principio de oportunidad

El artículo 323 del Código de Procedimiento Penal establece el principio de oportunidad como aquella facultad de la Fiscalía para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal cuando se trate de los casos específicos establecidos en el artículo 324 del C.P.P., bajo supervisión de legalidad del juez de control de garantías.

1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima.
2. Cuando a la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible.

3. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada.
4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.
5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.
6. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción.
7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.
8. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.
9. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta administración de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción disciplinaria correspondientes.
10. En delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentre en tal alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.
11. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.
12. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.
13. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.
14. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.
15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad.

16. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de la actividad de un grupo organizado al margen de la ley o del narcotráfico, los entregue al fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la respectiva organización.

17. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formule la respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado.

Doctrinalmente, estas causales propias del sistema legal penal colombiano, se han agrupado de la siguiente manera:

- a. Razones pragmáticas o de interés nacional.
- b. Colaboración con la justicia y desarticulación criminal.
- c. Delitos de escaso o nulo impacto social.
- d. No necesidad de la pena y mínima culpabilidad.
- e. Reparación de las víctimas y justicia restaurativa.
- f. Primacía del interés social o utilidad pública.

La aplicación del principio de oportunidad puede concluir con la extinción de la acción penal, por lo que corresponde al Juez de Control de Garantías examinar la legalidad de la decisión.

Según la Ley 1098 de 2006 numeral 3° artículo 199 la Fiscalía tiene prohibido por ley aplicar el principio de oportunidad cuando se verifiquen las cuatro condiciones siguientes:

- i) que la víctima del delito sea un menor de edad;
- ii) que el delito sea doloso;
- iii) que sea un homicidio o unas lesiones personales o que el acto delictivo atente contra la libertad, integridad y formación sexuales del menor, incluido el secuestro; finalmente,
- iv) que el victimario pretenda indemnizar los perjuicios ocasionados con su conducta y así obtener la aplicación del principio de oportunidad.

2.2.4. Acuerdos, preacuerdos y negociaciones con la fiscalía

Consiste en el consenso de los actores del proceso penal, con miras a que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja de pena.

El objetivo de estos acuerdos es que a través de la humanización de la actuación procesal se pueda obtener pronta justicia.

El acuerdo implica que el imputado acepte cargos a cambio de que el Fiscal elimine de la acusación alguna causal que se agravante o tipificar la conducta de una forma específica disminuyendo la pena imponible.

Ejemplo de lo anterior es cuando el imputado o acusado por homicidio agravado, logra un preacuerdo con la Fiscalía por homicidio simple.

Cuando se refiere a tipificación de forma específica hace referencia a los casos en los que concurre la vulneración de varios tipos penales y con el preacuerdo el fiscal reduce a unos pocos tipos penales.

La oportunidad procesal para el acuerdo o preacuerdo se puede dar en dos fases del proceso:

- a. El fiscal y la defensa podrán llegar a un acuerdo con la fiscalía desde la audiencia de formulación de la imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. También puede darse en la fase de indagación o investigación antes de la imputación.
- b. Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado en la audiencia de juicio oral sobre su responsabilidad, el fiscal y la defensa podrán llegar a un preacuerdo sobre los hechos que fundamentan la acusación y la pena imponible en ese caso específico.

Los acuerdos están sometidos a la aprobación del juez.

2.2.5. Aceptación de cargos

Si el imputado acepta los cargos, el Juez debe proceder a interrogarlo con el objetivo de establecer si dicha aceptación es libre y voluntaria, sin ningún tipo de coacción. Aceptar cargos es de manera directa la renuncia a ejercer el derecho de defensa y la aceptación de una condena rebajada hasta la mitad. El trámite posterior es remitir lo actuado al Juez de Conocimiento quien determina la legalidad de la aceptación de cargos y procede a realizar la audiencia de individualización de la pena y sentencia.

2.2.6. Preclusión de la investigación

La preclusión de la investigación es la terminación de la actuación a favor del imputado, por solicitud de la Fiscalía ante el juez de Conocimiento en eventos que se encuentran taxativamente en la Ley, a saber:

- Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Esta causal se refiere a las circunstancias en que el Estado pierde el derecho a iniciar o continuar con el proceso. Como ejemplo se puede mencionar el desistimiento, la prescripción, entre otros.
- Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo al Código Penal, como fuerza mayor, estado de necesidad, miedo insuperable, etc.
- Inexistencia del hecho investigado. Hace referencia a que el hecho no existió. Ej. Se está realizando una investigación por homicidio y la persona aparece viva.
- Atipicidad del hecho. Significa que el hecho existe pero que no es posible su tipificación como delito.
- Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
- Imposibilidad de desvirtuar presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una garantía universal consagrada en Tratados Internacionales, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto corresponde al Fiscal probar la responsabilidad penal del imputado o acusado. Si no se cuenta con suficiente evidencia física o material probatorio cobra vigencia el principio de “in dubio pro reo” según el cual, la duda

que se presente debe resolverse a favor del imputado.

- Vencimiento de término para formular la acusación.

3. AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION

Formulada la imputación, y transcurrido el término de 90 días, se debe solicitar la preclusión, aplicar el principio de oportunidad o formular la acusación.

Es requisito para la formulación de la acusación, que el Fiscal pueda afirmar con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe, de conformidad con los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida.

Para la formulación de la acusación, el fiscal deberá presentar un escrito de acusación ante el Juez que considere competente para adelantar el juicio. Este escrito debe contener los siguientes requisitos:

- Identificación e individualización del acusado y domicilio de citaciones.
- Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, referenciado norma penal que considera violada, es decir tipificando la conducta punible.
- Indicar el nombre del defensor del imputado.
- Relacionar bienes afectados con fines de comiso.
- Descubrimiento de la prueba

El trámite de esta audiencia se desarrolla de la siguiente manera:

- a. Instalación de la audiencia: la presencia del acusado que no se encuentre privado de la libertad, del ministerio público y víctimas, es opcional.
- b. Reconocimiento de la víctima: el Juez procede a reconocer o negar la calidad de víctimas de las personas naturales o jurídicas que se hagan presentes y aduzcan dicha calidad.
- c. Incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades. El Juez permite la intervención del Fiscal, víctimas o representantes, ministerio público y defensa, para que aleguen la existencia de alguna causal. Incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades que afecte la actuación.
- d. Traslado del escrito de acusación. Una vez superada la etapa anterior el Juez ordena correr traslado del escrito de acusación a el ministerio público, defensa, víctima o representantes quienes pueden:
 - Objetar por falta de requisitos del art. 337
 - Solicitar aclaraciones, adiciones o correcciones al Fiscal.Aceptar las objeciones es potestativo del Fiscal.
- e. Intervención oral del Fiscal para que formule la acusación y proceda al descubrimiento de la evidencia. Es necesario anotar que la evidencia que no se descubra no podrá ser tenida en cuenta ni practicada en el juicio, excepto:

- Cuando se trate de secreto profesional
- Documentos, archivos o apuntes personales que formen parte de la preparación del caso.
- Cuando el descubrimiento de esta información pueda afectar otras investigaciones o la seguridad del Estado.

Si dentro de la etapa de juicio aparece nueva evidencia o elemento material probatorio, el Juez de conocimiento resolverá si puede integrarse dicha prueba o debe excluirse de la investigación.

- f. La defensa debe hacer entrega de los exámenes periciales practicados al acusado con el fin de demostrar su calidad de inimputable.
- g. Dentro de esta audiencia se deben solicitar las medidas de protección a víctimas y testigos por parte del Fiscal. Ejemplo: establecer como domicilio de las citaciones la sede del fiscal quien a su turno se encargara de hacer las comunicaciones que corresponda en forma reservada.

Finalizada la audiencia de formulación de la acusación, se fijará fecha para realizar la audiencia preparatoria en un término no inferior a 15 días y no mayor a 45.

ETAPA PROCESAL DE INVESTIGACIÓN: INDAGACIÓN



ETAPA PROCESAL DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN

INDAGACIÓN FINALIZA CON

Aplicación del princio de oportunidad

Archivo de las diligencias

Preclusion de la investigacion

FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

Medidas
cautelares

Medidas de
aseguramiento

Acuerdos
Preacuerdos
Negociaciones

Aceptación
de cargos

FORMULACION DE LA ACUSACIÓN

Bibliografía

- **AVELLA FRANCO, Pedro Oriol.** Estructura del proceso penal acusatorio. Fiscalía General de la Nación. 2007. 176 p.
- **Fiscalía General de la Nación.** Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. 2005. 216 p.
- **Ley 600 de 2000**
- **Ley 599 de 2000**
- **Ley 906 de 2004**
- **MEDINA RESTREPO, Manuel.** El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 221 p.
- **PRIETO VERAT, Alberto José.** Esquema del proceso penal en el sistema acusatorio Colombiano. 2004. 10 p.
- **Defensoría del Pueblo.** Proceso Oral en el sistema penal acusatorio colombiano. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2006. 242 p.



SISTEMA PENAL ACUSATORIO

(SEGUNDA PARTE)



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA**

Personería Jurídica Res. 22215 Mineducación Dic. 9-83

INTRODUCCIÓN

A través de la unidad cuarta se culminará el estudio de las fases del proceso penal, mediante el análisis de la audiencia preparatoria en la que se solicita la práctica de las pruebas y el juicio oral.

Es indispensable por parte del estudiante la aprehensión de esta unidad, ya que es aquí donde se relaciona de manera directa la auditoria forense a través ya de la aducción o práctica de las pruebas en las etapas que se van a estudiar.

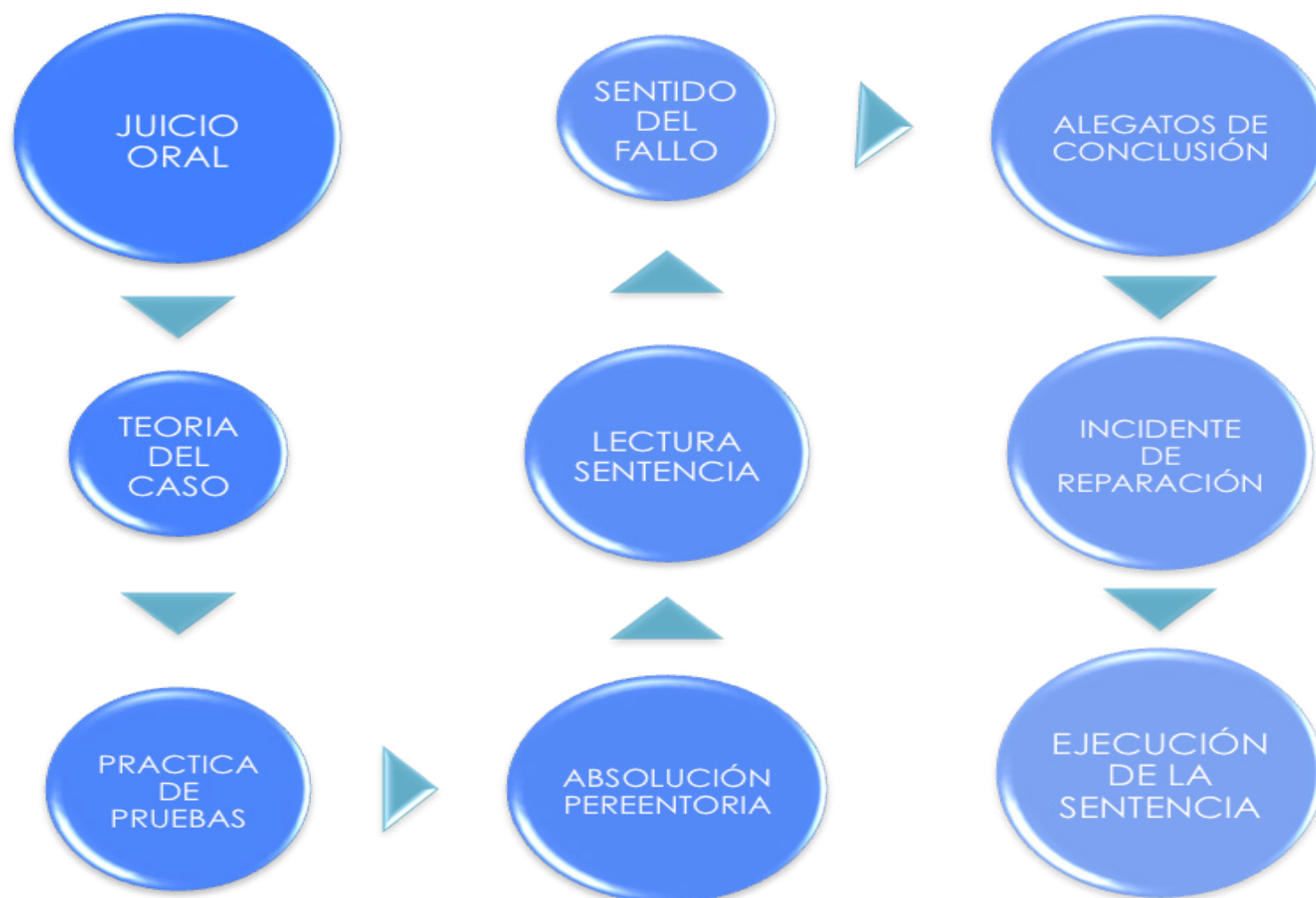
METODOLOGÍA

El estudio de la presente Unidad, permite conocer los distintos medios de prueba y las etapas del juicio oral, fases finales del proceso penal.

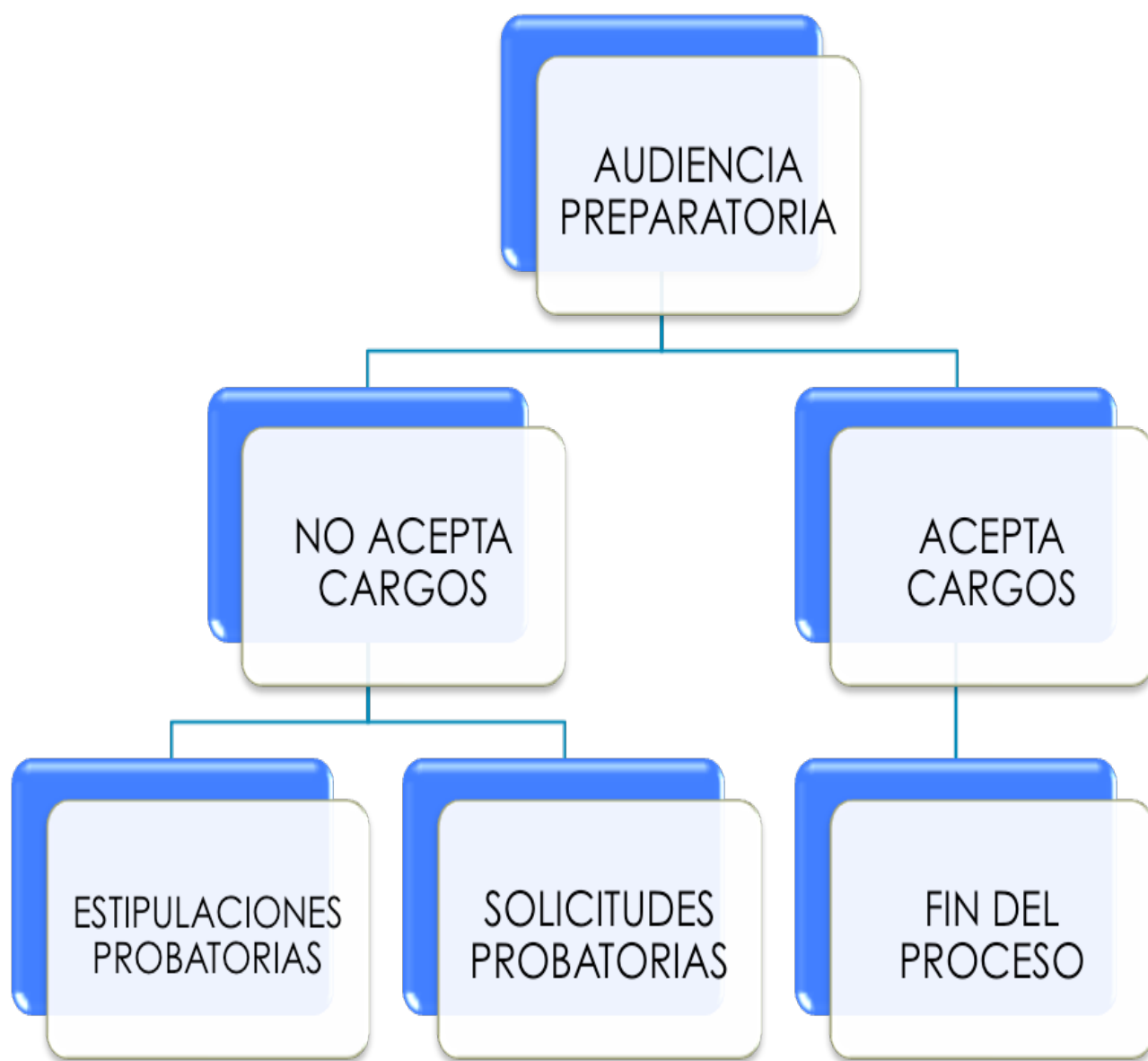
Para su aprehensión del tema es necesario realizar el análisis del material contenido en la cartilla de aprendizaje, seguido del video que realiza una representación visual del sistema penal acusatorio, el cual es complementario de la unidad 3 y 4. Para finalizar se deben realizar las lecturas complementarias y ver los videos sobre pruebas del Doctor Danilo Lugo que sirven para reforzar los conocimientos adquiridos en la presente unidad.

Al final del presente modulo se realizará una evaluación final que tendrá un valor del 40% de la nota final.

MAPA CONCEPTUAL



CAPITULO SÉPTIMO: SISTEMA PENAL ACUSATORIO



OBJETIVO GENERAL

El estudiante desarrollará las siguientes competencias:

1. Comprenderá la estructura del sistema penal acusatorio colombiano.
2. Estudiará dos de las fases – audiencia preparatoria y juicio oral - que componen el sistema penal en Colombia.
3. Reconocerá las audiencias más importantes que delimitan cada una de las fases del proceso.
4. Conocerá los diferentes medios de prueba y analizará la legalidad de los mismos.
5. Precisaré las características generales de la fase del proceso de juicio.
6. Comprenderá las formas de terminación del proceso.

DESARROLLO TEMÁTICO

COMPONENTE MOTIVACIONAL.

El conocimiento del esquema del sistema penal acusatorio, permite de manera global al auditor forense, establecer las etapas y sujetos procesales, con el fin enfocar su investigación y obtener los resultados adecuados que colaboren en la administración de justicia participando ya en calidad de perito, testigo o experto.

RECOMENDACIONES ACADÉMICAS.

Se recomienda finalizar la visualización del video sobre sistema penal acusatorio, iniciado en la unidad 3.

Finalizado el estudio de la cartilla es importante ver los videos del Doctor Danilo Lugo y realizar las lecturas complementarias que refuerzan los conocimientos respecto a la recopilación de pruebas.

4. AUDIENCIA PREPARATORIA

Finalizada la audiencia de formulación de la acusación, se fijará fecha para realizar la audiencia preparatoria en un término no inferior a 15 días y no mayor a 45.

Para esta audiencia es obligatorio que comparezca el fiscal y defensor. Es potestativa la comparecencia del acusado cuando no está privado de la libertad. A partir de esta audiencia es necesario que la víctima esté representada por un abogado a menos que la víctima lo sea.

Durante esta audiencia el Juez solicitará a la fiscalía y defensa que descubran los elementos materiales probatorios y evidencia física que pretendan incluir en el juicio.

La víctima, a partir de la Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, tiene derecho a hacer observaciones sobre el descubrimiento de la prueba y hacer solicitudes probatorias.

Durante esta audiencia el acusado puede **aceptar los cargos**, lo que cual debe ser sometido a control de legalidad por parte del Juez, control que consiste en determinar por parte del Juez si ésta aceptación es voluntaria, si no existe preacuerdo con la Fiscalía o si se consultó con el defensor. Si el Juez considera válida la aceptación de cargos procederá a dictar sentencia condenatoria, y acusado tendrá derecho a una rebaja de pena de hasta la tercera parte.

Vale la pena aclarar que cuando la **rebaja de la pena** se produce por la aceptación de cargos, ésta depende de la etapa procesal en la que se produzca, a saber:

- Si el allanamiento se realiza en la audiencia de formulación de la imputación, la rebaja será de una tercera parte hasta la mitad de la pena.
- Si la aceptación de cargos se produce en la audiencia preparatoria, será de la sexta parte hasta una tercera parte.
- Si la aceptación se presenta al inicio del juicio oral la rebaja será la sexta parte de la pena.

4.1. ENUNCIACION DE LAS PRUEBAS DEL FISCAL Y DE LA DEFENSA

Si el acusado no acepta cargos, la siguiente fase dentro de la audiencia es que el Juez ordene tanto al fiscal como a la defensa que procedan a enunciar todas las pruebas que utilizarán en la audiencia de juicio oral.

Esta enunciación no es argumentativa, ya que su objeto es permitir el conocimiento de la contraparte.

4.2. ESTIPULACIONES PROBATORIAS

Acto seguido el fiscal y la defensa pueden realizar estipulaciones probatorias. Estas consisten en acuerdos realizados por Fiscal y Defensa sobre dar por probados determinados hechos. El objetivo de las estipulacio-

nes probatorias es la aplicación de principios como la economía procesal y la celeridad.

En este punto la Corte Constitucional hizo énfasis mediante sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007 en la que manifestó: “que lo estipulado u objeto de estipulación por las partes, no es una determinada prueba, o mejor, elemento material probatorio, evidencia física o informe, sino un hecho concreto, razón por la cual asoma impropio, como sucedió con varias de las estipulaciones presentadas ante el tribunal por las partes, significar estipulados aspectos tales como el contenido de un registro de auditorio o una certificación, en tanto, lo que se busca con este mecanismo es dar por probado algo – hechos o circunstancias, como relacional la norma- propio del objeto del debate, que se sustenta, es necesario resaltarlo, con uno o varios medios de prueba, para efectos de que no se haga necesario demostrar ese tópico”.

Las estipulaciones probatorias deben ser aprobadas por el Juez.

4.3. SOLICITUDES PROBATORIAS

Aprobadas las estipulaciones por el Juez, la Fiscalía y la Defensa pasarán a la etapa de solicitudes probatorias, durante la cual ambas partes podrán solicitar las pruebas que consideren necesarias para sustentar ya sea la acusación o la defensa. Debe hacerse claridad sobre lo que pretende demostrar con cada una de las pruebas solicitadas, es decir la finalidad de la prueba.

El decreto de estas pruebas se determina según la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal.

- **Conducencia** de la prueba hace relación a la aptitud legal que debe tener el medio probatorio para demostrar el hecho por probar.
- **Pertinencia** de la prueba: se refiere a qué se pretende demostrar con este medio de prueba.
- **Utilidad** de la prueba: se refiere a que la prueba solicitada preste un servicio o utilidad al proceso.
- **Ausencia de prohibición legal:** el medio de prueba no puede estar prohibido por la Ley. Ejemplo de esta es la solicitud de testimonio de una persona que está protegida por el secreto profesional.

El representante de la víctima también puede solicitar pruebas. Lo anterior conforme sentencia de la Corte Constitucional (C-454 del 7 de junio de 2006). Igual derecho posee el Ministerio Público, quien de manera excepcional y sustentando la solicitud, puede solicitar la práctica de alguna prueba que no haya sido pedida por las partes y que posea especial influencia en los resultados del juicio.

Una vez decretadas las pruebas por parte del Juez, las partes pueden realizar objeciones a las solicitudes probatorias como la inadmisibilidad, rechazo o exclusión. Las razones pueden ser inconducencia, impertinencia, inutilidad, prohibición legal y prueba ilícita o ilegal. Esta última razón se produce cuando la prueba es obtenida con violación al debido proceso, vulneración de los derechos fundamentales o sin cumplir los requisitos legales esenciales. En aplicación del principio de la **cláusula de exclusión**, las pruebas obtenidas con vulneración de las garantías fundamentales son nulas de pleno derecho y

deberán excluirse de la actuación procesal, así como las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas.

4.3.1. Prueba ilegal y prueba ilícita

Se entiende por **prueba ilícita** la que se obtiene con violación a los derechos fundamentales por ejemplo las obtenidas violando el derecho a la dignidad humana o a la intimidad de las personas. También son pruebas ilícitas cuando en la práctica de la prueba se violan derechos fundamentales, por ejemplo cuando la persona es sometida a tortura o tratos crueles para obtener una confesión o testimonio.

La **prueba ilegal** es aquella que en su producción, práctica o abducción se incumple con los requisitos legales esenciales. Es el Juez quien determina si es requisito omitido es esencial y trascendental como para excluir la prueba.

4.3.2. Prueba de referencia

Durante esta audiencia, las partes e intervinientes pueden solicitar al Juez la aducción de pruebas de referencia que se pretenden utilizar durante el juicio.

La prueba de referencia son declaraciones practicadas fuera del juicio oral que por las siguientes causales no es posible su práctica dentro del juicio, a saber:

- Cuando el declarante manifiesta bajo la gravedad del juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y esta afir-

mación es corroborada pericialmente

- Cuando el declarante ha sido víctima de un secuestro, desaparición forzada o algún evento similar
- Cuando el declarante padece de grave enfermedad que le impide declarar
- Cuando el declarante ha fallecido
- Cuando la declaración se halle registrada en escritos de pasada memoria o archivos históricos

La oportunidad de la solicitud de pruebas es preclusiva, es decir que aquella prueba que no fue solicitada y ordenada en la audiencia preparatoria, no podrá ser considerada ni practicada en la audiencia de juicio oral.

Las pruebas decretadas por el Juez se practicarán en audiencia de juicio oral en el orden que decida el Juez; en todo caso la fiscalía tendrá lugar antes que la defensa.

Al finalizar la audiencia el Juez señalará la fecha de la audiencia que da inicio al Juicio oral, la que debe realizarse dentro de los 45 días siguientes.

5. EL JUICIO ORAL

Instalada la audiencia de juicio oral, en la que es necesaria la presencia del fiscal y el defensor, y del acusado si se encuentra privado de la libertad, el Juez procederá advertir al acusado que le asiste derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse y le concederá el uso de la palabra, sin apremio de juramento, para que manifieste, si se declara inocente o culpable.

Si el acusado se declara culpable, tras la correspondiente verificación de legalidad de dicha declaración por parte del Juez, y en caso no existir ningún vicio, se aplicará la rebaja de la pena en una sexta parte.

Si el acusado se declara inocente, se continuará con el trámite de la audiencia. Si el acusado se encuentra ausente, se adelantará la audiencia como si hubiese habido una declaración de inocencia.

5.1. DECLARACIÓN INICIAL (TEORÍA DEL CASO)

Acto seguido el Juez concede la palabra a la Fiscalía para que presente su **teoría del caso**, y a continuación, si la defensa lo desea, puede presentar su teoría del caso. La teoría del caso se denomina según el artículo 371 **declaración inicial**.

La teoría del caso, se define según la doctrina como la hipótesis fáctica jurídica y probatoria que manejan tanto el fiscal como la defensa en un juicio determinado. Cabe anotar que se considera hipótesis porque aún no ha sido probado. La teoría del caso contiene tres elementos:

- a. Teoría de los hechos: es la narración sucinta de los hechos
- b. Teoría jurídica: las normas jurídicas aplicables
- c. Teoría probatoria: es una relación de las pruebas que será practicadas durante la etapa de juicio.

Durante la exposición de la teoría del caso del Fiscal, es necesario que en su teoría o declaración inicial, mencione el delito y la responsabilidad del acusado.

Quien presente una teoría del caso está en la obligación de probarla.

Ahora bien, la defensa no tiene la obligación de presentar una teoría del caso por cuanto el acusado se encuentra cobijado por la presunción de inocencia, garantía universal fundamental para todo procesado. Así que corresponde a la Fiscalía probar la responsabilidad del acusado. Sin embargo si la defensa lo determina conveniente puede presentar una declaración inicial en la que considera que puede demostrar que el acusado no cometió el delito.

Finalizada las declaraciones iniciales, se procederá a la práctica presentación y práctica de pruebas en el orden señalado en la audiencia preparatoria.

5.2. PRÁCTICA DE PRUEBAS

Surtida la etapa anteriormente descrita, el Juez ordenará la práctica de pruebas, en el orden que fueron decretadas en la audiencia preparatoria, primero las de la Fiscalía y luego las de la defensa.

Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, la evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico.

Las pruebas deben practicarse en la audiencia de juicio oral y público en presencia de las partes intervinientes.

La valoración de las pruebas debe realizarse, de manera conjunta y teniendo en cuenta los criterios específicos de valoración de cada medio de prueba, por el Juez de conocimiento.

5.2.1. Prueba testimonial.

El testimonio es “la declaración inicial de una persona a quien le constan en forma directa los hechos que son materia de investigación y realiza una exposición de los mismos en la forma que fueron percibidos por ella”¹

Para la práctica de esta prueba, es necesario que el Juez informe al testigo sobre las amonestaciones y sanciones penales establecidas, dando lectura a las normas que las consagran. Acto seguido procederá a tomar juramento al testigo conminándolo a decir la verdad. El Juez preguntará los generales del Ley y concederá el uso de la palabra a la parte que pidió la prueba para que proceda a formular el **interrogatorio directo**.

- **Interrogatorio directo:** el interrogatorio directo se desarrolla en dos partes: la primera es la **acreditación del testigo**. Ello implica la realización de preguntas de carácter general que permitan identificar rasgos generales como condiciones familiares, laborales y morales del testigo que acrediten al testigo. La segunda parte es el **interrogatorio**

1 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 138 p.

sobre los hechos. Es aquí cuando la parte que presenta al testigo realiza preguntas necesarias para establecer los hechos que pretende demostrar con ese testimonio. “En el interrogatorio deben observarse las siguientes instrucciones:

- › Toda pregunta debe versar sobre hechos específicos
- › El juez debe prohibir toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa
- › El juez debe prohibir toda pregunta que tienda a ofender al testigo
- › El juez puede autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden en su memoria, en cuyo caso, durante el interrogatorio las demás partes podrán examinarlos
- › El juez debe excluir toda pregunta que no sea pertinente
- › El juez debe intervenir para que en el interrogatorio las repuestas sean claras y precisas”²

- **Contra – interrogatorio:** éste se realiza por la contraparte y es potestativo. El objeto de este contra – interrogatorio es quitar credibilidad al testimonio y solo puede realizarse sobre los hechos que fueron expuestos en el interrogatorio.
- **Interrogatorio re – directo:** termi-

nado el contra – interrogatorio el juez concede el uso de la palabra a la parte que presentó al testigo por si desea volver a interrogar al testigo.

- **Re – contra – interrogatorio:** finalizado el interrogatorio re – directo, el Juez permite a la contraparte si lo desea, volver a re – contra – interrogar, solo sobre puntos del interrogatorio re – directo.

Dentro de la práctica de la prueba testimonial, con autorización del juez, el testigo puede consultar documentos necesarios para responder las preguntas. También puede el interrogador poner en conocimiento del testigo elementos materiales probatorios y evidencia física.

El testigo debe declarar sobre los hechos que en forma directa haya tenido conocimiento. De lo contrario su declaración puede ser objetada o impugnada por la credibilidad del testigo.

“Existen ciertos testigos, denominados testigos de acreditación, a quienes, aunque no les constan en forma directa los hechos, pueden ser llamados a declarar sobre los mismos para exponer los resultados de labores de campo o exámenes realizados durante la investigación para su esclarecimiento, de manera que su declaración está dirigida a exponer las razones de su ciencia o quehacer que les han permitido establecer conclusiones o inferencias en relación con las circunstancias de ocurrencia de los hechos o su autoría”³

2 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 141 p.

3 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 148 p.

Las excepciones constitucionales para rendir testimonio se encuentran descritas en el artículo 385 de la Ley 906 de 2004 que a la letra reza:

“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que va a rendir testimonio, quien podrá renunciar a este derecho.

Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:

- a) Abogado con su cliente;
- b) Médico con paciente;
- c) Psiquiatra, psicólogo o terapeuta con el paciente;
- d) Trabajador social con el entrevistado;
- e) Clérigo con el feligrés;
- f) Contador público con el cliente;
- g) Periodista con su fuente;
- h) Investigador con el informante”

Durante la práctica de la prueba pueden darse diferentes situaciones las cuales sobre las cuales es menester hacer alusión:

- En caso tal de que el testigo no comparezca a la citación, el Juez decretará una suspensión de la audiencia con el fin de ordenar coactivamente su com-

parecencia. Si el testigo citado se niega a comparecer, el Juez expedirá orden de aprehensión y conducción a la sede la audiencia. Dicha aprehensión y conducción se realizará por intermedio de la Policía Judicial. La renuencia a declarar se castiga con arresto de 24 horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará.

- Si el testigo está físicamente impedido para comparecer a la audiencia, en primera medida se intentará tomar el testimonio a través de un sistema de audio-video a distancia; si lo anterior no fuere posible, se trasladará la audiencia al lugar en el que se encuentre el testigo. El testigo debe permanecer en el lugar so pena de arresto previo trámite sumario. Esta regla también tendrá aplicación para el Presidente de la República y el Vicepresidente o diplomático.
- El testigo debe permanecer a disposición del Juez durante el término que este determine, sin que pueda exceder de la duración de la práctica de las pruebas, y podrá ser requerido por las partes para aclarar o adicionar su testimonio.
- Los testigos son interrogados de manera separada, con el fin de velar por la independencia del testimonio.
- Si el testigo se encuentra privado de la libertad, debe realizarse el traslado con anticipación y otorgarse las medidas de seguridad y protección. Concluido el testimonio debe ser devuelto sin ninguna dilación al centro de reclusión.
- Si el testigo es sordomudo o no comprende el castellano, el juez debe nombrar un intérprete que sea conocedor del

tema, sin perjuicio del que el testigo lleve su propio interprete.

- La impugnación del testigo es la posibilidad de contradecir algo que el testigo ha afirmado previamente con una aseveración que realiza ahora en el juicio o cuando se pretende introducir algún antecedente del testigo en el juicio para restarle eficacia a su testimonio.

Para apreciar el testimonio, el Juez debe tener en cuenta los principios técnico – científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contra-interrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.

5.2.2. Prueba pericial

Para ejercer como perito y que dicha actividad tenga validez probatoria, es necesario que el perito posea un título legalmente reconocido o que sea una persona de reconocido entendimiento en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición.

Este servicio puede ser prestado por la policía judicial, el Instituto de Medicina Legal, entidades públicas o privadas y particulares

especializados en la materia. (Artículo 406 y 408 del C.P.P).

“Si quien es nombrado perito tiene el carácter de servidor público, está en la obligación de ejercer el encargo; mientras que si se trata de un particular, esa obligatoriedad solamente acaece cuando no haya servidores públicos que puedan efectuar las investigaciones o análisis requeridos.

El perito debe presentar un informe resumido en donde exprese la base de la opinión pedida por la parte que solicito la práctica de la prueba”⁴

De conformidad con el artículo 412, los peritos comparecen a la audiencia del juicio oral por solicitud de las partes para que bajo la gravedad de juramento rindan el dictamen pericial. En audiencia pueden ser interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales que hayan suministrado a las partes, o para que rindan su dictamen.

Al momento del testimonio, las primeras preguntas deben estar encaminadas a acreditar la idoneidad del perito. Luego debe interrogarse sobre los puntos en que requieren su conocimiento y opinión. El perito tendrá derecho a acceso a los elementos materiales probatorios y evidencia física, así como a la consulta de documentos, publicaciones y notas escritas para fundamentar y aclarar sus respuestas.

Las partes pueden utilizar el número de peritos que considere necesarios para apoyar la acusación o defensa.

4 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 152 p.

“El interrogatorio del perito debe comprender los siguientes aspectos:

- Los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica o arte en que se es experto
- Los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de los instrumentos o medios en los cuales es experto
- Los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables.
- Los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación.
- Los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso

- La utilización de técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza en sus exámenes o verificaciones
- La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo juicio”⁵

Los dictámenes periciales más comúnmente solicitados son los grafológicos, el dictamen de balística, el dictamen dactiloscópico, y el dictamen de física forense.

Para apreciar la prueba pericial el Juez ha de tener en cuenta la idoneidad técnico – científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.

EJEMPLO DE INTERROGATORIO DEL FISCAL AL PERITO

Pregunta:	Señor investigador, ¿qué equipo utilizó para grabar la conversación telefónica?
Respuesta:	Una grabadora Marantz con cinta normal, casete TDK de 60 minutos de grabación.
Pregunta:	¿Conoce la forma como funciona este equipo?
Respuesta:	Sí.
Pregunta:	¿Cuántas veces lo ha utilizado?
Respuesta:	Alrededor de 500 veces.
Pregunta:	¿Hizo algo con el equipo antes de instalarlo para grabar las llamadas en este caso?
Respuesta:	Sí. Lo ensayé y funcionaba perfectamente.
Pregunta:	¿Cómo lo ensayó?

5 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 154 p.

Respuesta:	Conecté la grabadora al teléfono de mi oficina, marqué a mi apartamento, hablé brevemente con la persona que me contestó, grabé el contenido de la conversación y enseguida la reproduje en el equipo.
Pregunta:	¿Cuál fue el resultado del ensayo?
Respuesta:	El equipo funcionó perfectamente, graba y reproduce lo grabado con precisión.
Pregunta:	¿Qué sucedió después?
Respuesta:	Conecté el par a la línea telefónica del señor Pérez y grabé todas conversaciones que desde ese momento entraron y salieron. Varias de esas conversaciones fueron escuchadas directamente por mí, mientras se desarrollaban desde un teléfono de extensión.
Pregunta:	Centrando su atención en el día 26 de agosto pasado, ¿escuchó alguna conversación de la línea del señor Pérez?
Respuesta:	Sí, durante la mañana escuché la conversación de una llamada saliente que duró aproximadamente 10 minutos.
Pregunta:	¿Las había escuchado antes?
Respuesta:	Sí. En varias oportunidades.
Pregunta:	¿Reconoció las voces que en ella intervinieron?
Respuesta:	Al señor Pérez como quien llamó y en el receptor dialogó con una mujer de nombre Luz Elena.
Pregunta:	¿Qué hizo después de la conversación?
Respuesta:	La rebobiné y la reproduje.
Pregunta:	¿La cinta grabó con fidelidad y exactitud la conversación que usted escuchó ese día?
Respuesta:	Así es.
Pregunta:	¿Qué hizo con la cinta?
Respuesta:	La rotulé, la embale en la bolsa para evidencias, la sellé y la llevé al almacén de evidencias donde la dejé en depósito con el correspondiente formato de cadena de custodia.
Pregunta:	¿Volvió a ver esa cinta?
Respuesta:	Sí, el día de hoy la retiré del almacén de evidencias y por instrucciones del fiscal la traje a este recinto.
Pregunta:	Señor investigador, le estoy mostrando lo que previamente ha sido marcado para identificación como evidencia No. 2 de la Fiscalía. ¿Lo reconoce?
Respuesta:	Sí.
Pregunta:	¿Qué es?
Respuesta:	Es la cinta a la que me estaba refiriendo, la grabé el 26 de agosto pasado.
Pregunta:	¿Por qué la reconoce?
Respuesta:	Conserva el número consecutivo que en ese entonces le di y las características de embalaje, rotulación y marcación se encuentran intactas; no han sido alteradas.

5.2.3. Prueba documental

El artículo 424 del C.P.P. realiza una enumeración de los documentos que pueden ser tenidos como pruebas documentales dentro del juicio, tales como manuscritos, grabaciones, películas, fotografías, radiografías, entre otros.

Los documentos presentados en audiencia deben ser auténticos, es decir debe existir la certeza sobre la persona que lo ha producido, elaborado o firmado. Sobre algunos documentos es aplicable la presunción de veracidad tales como los títulos valores, documentos notariales, documentos o instrumentos públicos, entre otros.

La autenticidad de un documentos puede ser probada a través del reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido; mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurídicas o mediante informe de experto en la respectiva disciplina.

Los documentos deben ser leídos y exhibidos o proyectados en audiencia, de tal manera que todos los participantes en la audiencia puedan conocer su forma y contenido.

5.2.4. Prueba de inspección

“La inspección consiste en el examen de un objeto de prueba por fuera del recinto de la audiencia cuando una de las partes estime necesaria su práctica ante la imposibilidad de exhibir y autenticar en la misma los elementos materiales probatorios, la evidencia

física o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera cómo ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento.”⁶

Para la práctica de esta prueba se requiere analizar y cumplir con los siguientes criterios:

- Que no sea posible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en la audiencia
- Que sea de vital importancia para la motivación de la sentencia
- Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos
- Que las condiciones del lugar que se va a inspeccionar no haya variado en forma significativa
- Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante su práctica.

5.2.5. Prueba anticipada

El fiscal, víctima, defensor o ministerio público puede solicitar ante el Juez de Control de Garantías la práctica anticipada de cualquier medio de prueba por motivos fundados o de extrema necesidad, para evitar la alteración o pérdida del medio probatorio. Esta prueba anticipada se practica en audiencia pública ante el Juez de Control de Garantías, quien ordena su conservación para ulterior utilización en el proceso.

6 MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 161 p.

El juez de conocimiento ordena la repetición de la prueba cuando al iniciar la audiencia del juicio oral, la causa o circunstancia que motivo la práctica anticipada de esa prueba haya desaparecido. En caso contrario esa prueba anticipada ingresará al juicio como prueba judicial.

5.2.6. Prueba de referencia

Consiste en toda declaración rendida por fuera de audiencia del juicio oral cuando no es posible practicarla en el juicio, siempre que se presente alguna de las siguientes circunstancias:

- Que la persona manifieste bajo la gravedad de juramento que ha perdido la memoria y ellos es corroborado pericialmente.
- Cuando la persona ha sido víctima de un secuestro, desaparición forzada, o evento similar.
- Cuando la persona padece de una enfermedad grave que le impide declarar.
- Cuando la persona ha fallecido.
- Cuando la declaración se halle registrada en escritos de pasada memoria o archivos históricos.

Las partes pueden ingresar al Juicio la prueba de referencia que haya sido solicitada y admitida en la audiencia preparatoria. Sobre este tipo de prueba existe tarifa legal impuesta por el legislador, lo que significa que la sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.

Culminada la etapa probatoria el juez declarará cumplida esta fase en audiencia.

5.3. ABSOLUCIÓN PERENTORIA

Si al terminar la práctica de las pruebas los hechos de la acusación resultan manifiestamente atípicos, el fiscal o el defensor pueden solicitarle al juez la absolución perentoria del acusado. La solicitud deberá ser motivada.

El juez resolverá la petición y si la encuentra procedente dictará en el acto sentencia absolutoria. Si niega la petición dispone que las partes e intervinientes presenten sus alegatos finales o de conclusión (art. 442).

5.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Si no existe lugar a la absolución perentoria, el Juez procederá a dar paso para que las partes e intervinientes presenten los alegatos de conclusión en un tiempo limitado por el volumen de la prueba y complejidad del caso.

Inicialmente los alegatos deben ser presentados por la fiscalía, luego por el representante de la víctima, ministerio público y por último la defensa.

Los alegatos de la defensa pueden ser sujetos de contradicción por la Fiscalía. Sobre dicha contradicción la defensa puede ejercer el derecho de réplica que solo puede versar sobre los temas abordados por el Fiscal.

El objetivo de los alegatos de conclusión es convencer al Juez de haber demostrado la teoría del caso.

5.5. SENTIDO DEL FALLO

Finalizados los alegatos de conclusión, se dará paso al anuncio del sentido del fallo. Significa lo anterior que el Juez realizará una exposición breve de las consideraciones y anunciará si la sentencia será absolutoria o condenatoria.

Si el anuncio es absolutorio y el acusado se encuentra privado de la libertad, el Juez ordenará su libertad inmediata y el levantamiento de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

Si por el contrario el anuncio es condenatorio y el acusado no se encuentra privado de la libertad, puede ya sea ordenar que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia o que sea detenido por considerarlo necesario librando orden de encarcelamiento.

La declaración de culpabilidad debe guardar congruencia con los hechos que consten en la acusación y los delitos por los cuales se ha solicitado condena.

Si el sentido del fallo es condenatorio o si se acepta el acuerdo celebrado con la fiscalía el Juez concede el uso de la palabra al fiscal y a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares sociales y antecedentes del acusado.

Acto seguido el Juez procede a individualizar la pena por imponer entre los mínimos y máximos regulados por la norma sustantiva.

Finalizada la audiencia, el Juez fijará fecha y hora para realizar la audiencia en la que se dará lectura al fallo, la cual no puede fijarse en un término mayor a 15 días calendario.

5.6. AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA

En esta audiencia el Juez procederá a dar lectura al fallo la cual es notificada en estrados. Una vez notificada, la providencia puede ser impugnada por quienes tienen interés legítimo, recurso que debe ser interpuesto y sustentado oralmente en la misma audiencia.

En el evento en que el recurso no se interponga en la misma audiencia, el interesado podrá presentarlo escrito dentro de los cinco días siguientes.

El recurso que puede interponerse contra la sentencia se denomina apelación. Este recurso se concede en el término suspensivo lo que implica la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta tanto se resuelva por el superior jerárquico. La sentencia de segunda instancia será leída en audiencia dentro de los diez días siguientes ante las partes e intervinientes.

Con el fin de garantizar y preservar los derechos fundamentales, contra la sentencia de segunda instancia procede el recurso de casación. El recurso de casación tiene lugar en los siguientes casos:

- Falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso
- Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.

- Manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.

5.7. INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

Según el tratadista MEDINA, este es un trámite posterior a la declaración de condena del acusado y anterior a la determinación de la pena en la sentencia.

El propósito de la reparación integral es buscar la satisfacción a la víctima de los daños ocasionados con la conducta criminal, para cuya procedencia se requiere el previo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del acusado y la solicitud expresa en tal sentido manifestado por la propia víctima, el fiscal o el Ministerio Público a petición de aquella y su presentación dentro de los 30 días siguientes de haber quedado en firme fallo condenatorio.

El juez convocará a una audiencia pública del incidente de reparación. En dicha audiencia se formulará la pretensión contra el condenado y las pruebas que obran para solicitar la reparación integral. Revisada por parte del Juez la legalidad de la pretensión se pondrá en conocimiento al condenado. Así las cosas pueden la víctima y condenado conciliar. Si no lo hacen, se citará a nueva audiencia donde se intentará por segunda

vez una conciliación entre las partes. En caso de ser negativa la conciliación, se procederá a practicar las pruebas ofrecidas por las partes y a escuchar el fundamento de sus pretensiones.

Por último el Juez decidirá mediante sentencia el incidente de reparación.

5.7.1. Conciliación

“Es una estrategia de solución de conflictos que, entendida como medio alternativo al proceso judicial y gracias a la intervención de un conciliador, permite que las partes consideren sus necesidades, intereses, y todo aquello que es verdaderamente relevante del problema, para fomentar y favorecer una solución justa por encima de los hechos manifiestos o de basarse fielmente en lo que estipula la Ley para resolver el conflicto. Así, pues, la conciliación es aquel mecanismo mediante el cual las partes envueltas en un conflicto, previa actuación de un conciliador, buscan una solución racional, lógica y satisfactoria que ponga fin a la controversia”⁷

Dentro del incidente de reparación integral la conciliación tiene como objeto reparar el daño ocasionado con el delito disminuyendo del condenado las consecuencias de la pena.

La conciliación da por terminado el incidente y se incorpora a la sentencia.

7 Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. 2005. 151 p.

EJEMPLO DE CONCILIACION

Planteamiento

JORGE ARMANDO BELTRÁN GÓMEZ y STELLA JIMÉNEZ DÍAZ, celebraron su matrimonio el 1° de abril de 1.995 y de esa unión nacieron los menores JUAN CARLOS y PEDRO LUIS BELTRÁN JIMÉNEZ, quienes hoy día cuentan 8 y 6 años de edad, respectivamente. BELTRÁN GÓMEZ, el día 15 de Junio de 2001, abandonó su hogar y desde entonces se sustrae íntegramente al suministro de alimentos para sus hijos, los que tan solo, a partir de esa fecha, colman sus necesidades básicas con el suministro de su señora JIMÉNEZ DÍAZ, quien labora ocasionalmente en aseo doméstico y devenga \$240.000 mensuales, de los cuales debe pagar \$120.000 como arriendo de la habitación que comparte con sus menores hijos, ubicada en la carrera 94 No. 33-45, barrio Fontibón del occidente de Bogotá, donde a diario deja solos los menores aludidos, quienes aún no comienzan los años de escolaridad.

BELTRÁN GÓMEZ en la actualidad conforma un nuevo hogar y es padre de un menor de dos (2) años de edad; labora esporádicamente en una empresa particular y allí gana un promedio de \$300.000 mensuales.

Recepción de la solicitud

RADICADO No: 000001. Fiscalía General de la Nación, Seccional Bogotá.

Ciudad y fecha: Bogotá D. C., tres (3) de enero de dos mil cinco (2005).

Hora: Ocho de la mañana (8:00 a.m.)

Querellante: STELLA JIMÉNEZ DÍAZ, C.C. No. 63'455.173 de Barbosa, Santander. 32 años de edad. Residente en la carrera 94 No. 33-45, barrio Fontibón de Bogotá, teléfono No. 2 67 85 24.

Querellado: JORGE ARMANDO BELTRÁN GÓMEZ, C.C. No. 79'567.197 de Bogotá. 34 años de edad. Residente en la carrera 17 No. 168-45, barrio San Cristóbal Norte de Bogotá, teléfono No. 6 32 45 26.

Hechos: Acaecen desde el 15 de Junio de 2001, fecha a partir de la cual JORGE ARMANDO BELTRÁN GÓMEZ se sustrae íntegramente al deber alimentario respecto de sus menores hijos JUAN CARLOS y PEDRO LUIS BELTRÁN JIMÉNEZ, quienes cuentan hoy día con 8 y 6 años de edad, respectivamente, y cuyos alimentos desde entonces tan solo son asumidos por su señora madre STELLA JIMÉNEZ DÍAZ, quien no devenga un salario acorde para suplir las necesidades de sus hijos.

Delito: Inasistencia Alimentaria. Artículo 233 del Código Penal.

Pretensiones: Que JORGE ARMANDO BELTRÁN GÓMEZ pague a la señora STELLA JIMÉNEZ DÍAZ una cuota monetaria que por alimentos corresponda y sea acorde con las necesidades básicas de sus menores hijos JUAN CARLOS y PEDRO LUIS BELTRÁN JIMÉNEZ, la cual sea retroactiva al 15 de junio de 2001, y se comprometa en adelante a aportarla mensualmente y a incrementarla cada año, conforme con el índice de devaluación monetaria.

Contenido del acta de conciliación

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ UNIDADES LOCALES

En Bogotá D. C., a los once (11) días de enero de dos mil cinco (2005) siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) ante la Unidad Local de Fiscalía Despacho No. 1 comparecen STELLA JIMÉNEZ DÍAZ C.C. No. 63'455.173 de Barbosa Santande y JORGE ARMANDO BELTRÁN GÓMEZ C.C. No. 79'567.197 de Bogotá, quienes una vez identificados plenamente como querellante y querellado manifiestan que acuden con el fin de celebrar acuerdo conciliatorio dentro del caso de la referencia. Iniciada la audiencia de conciliación por el suscrito Fiscal se procede a enterarlos del objeto de la diligencia haciéndoles saber el procedimiento, finalidad y efectos de la misma conforme con el artículo 522 del Código Procedimiento Penal así como los derechos y deberes que les asiste dentro de esta diligencia. Inicialmente se concede el uso de la palabra a la señora STELLA JIMÉNEZ DÍAZ quien, en su condición de querellante se exhorta para que exponga sus pretensiones y pedimentos. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a JORGE ARMANDO BELTRÁN, quien en su condición de querellado se exhorta a que exponga sus excepciones y presente los ofrecimientos respecto de lo solicitado por la señora querellante. Escuchadas las partes, se ha llegado al siguiente acuerdo conciliatorio: El querellado se compromete a cancelar todas las mesadas alimentarias adeudadas a razón de \$70.000 cada mes, a más tardar el veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005), en el domicilio de la señora querellante, y de ahí en adelante a cumplir estrictamente con el pago convenido, suma que reajustará el primero de enero de cada año teniendo en cuenta el índice de inflación. Se advierte a las partes que de cumplirse el acuerdo como aquí se estipuló, el original del acta se archivará; caso contrario, copia de la misma se entregará a la señora querellante para que, si es su deseo, instaure las pertinentes acciones civiles ante esa jurisdicción. Por ser procedente y como quiera que las partes conciliaron, este despacho fiscal dispone el archivo de las diligencias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se concluye siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del once (11) de enero de dos mil cinco (2005).



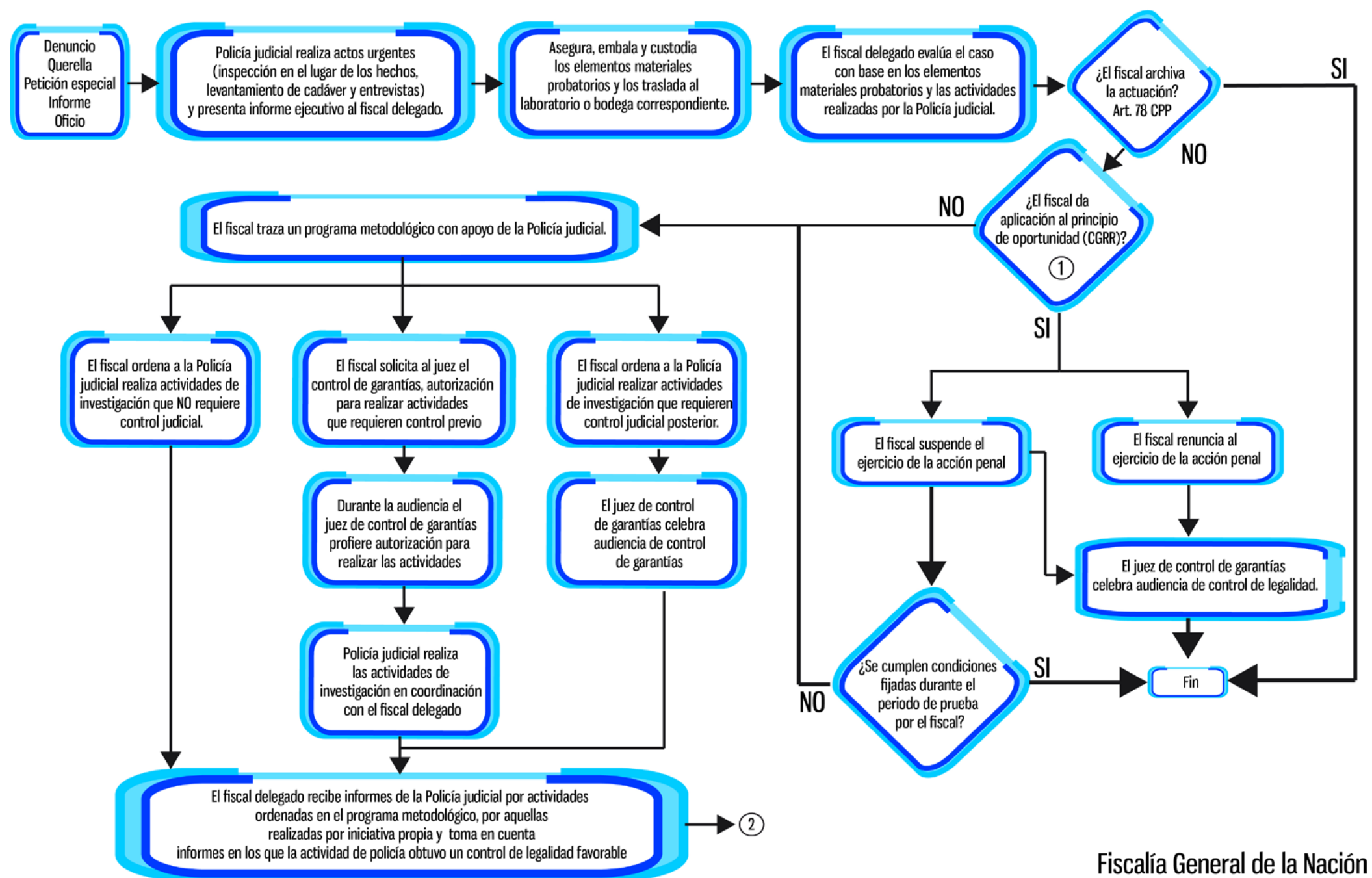
5.8. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, le corresponde a la autoridad penitenciaria bajo la supervisión y control del INPEC y al Juez de ejecución de penas y medias de seguridad, el cumplimiento de la misma.

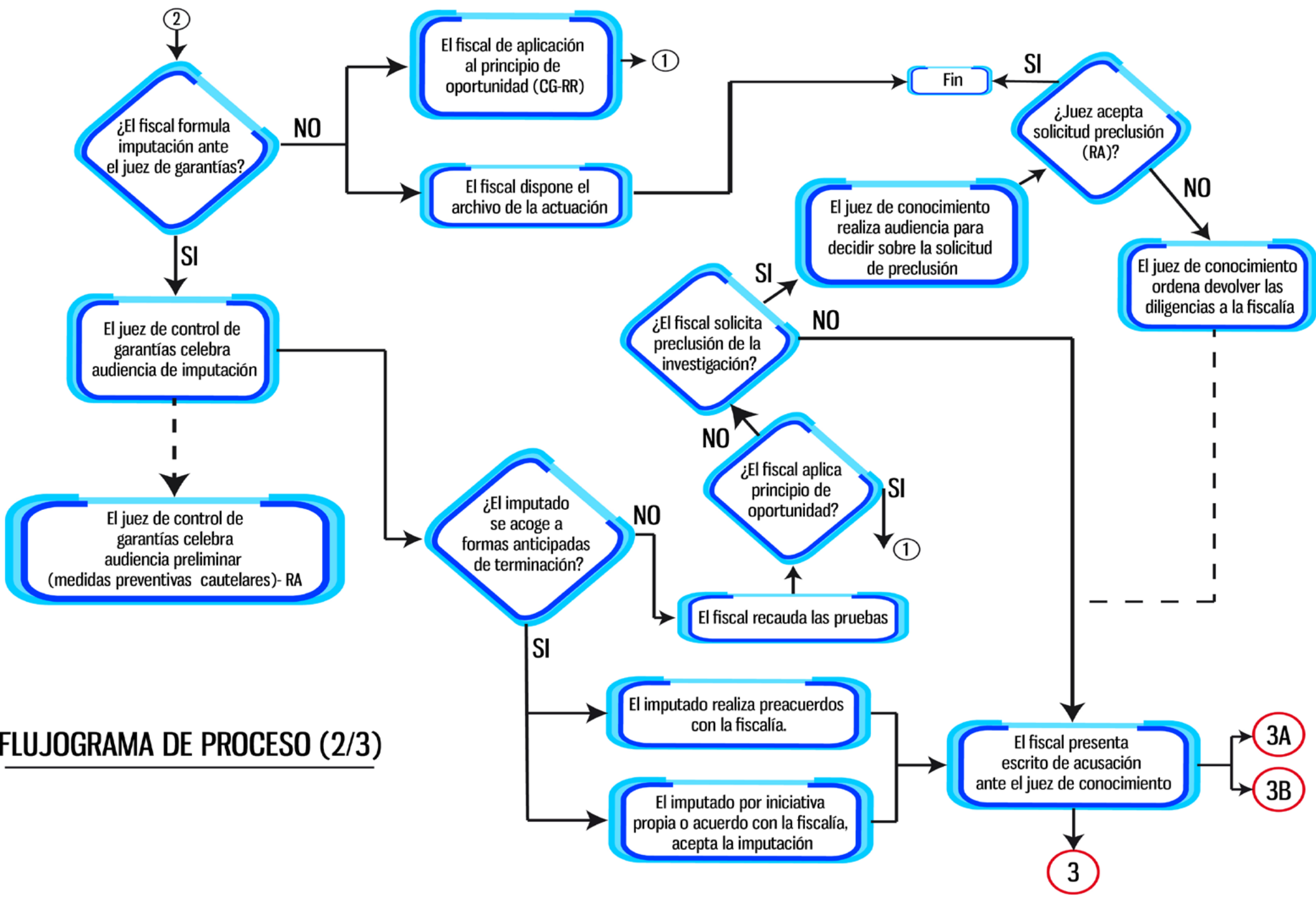
Síntesis de cierre del tema.

El siguiente FLUJOGRAMA DEL PROCESO es tomado de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION:

FLUJOGRAMA DE PROCESO (1/3)

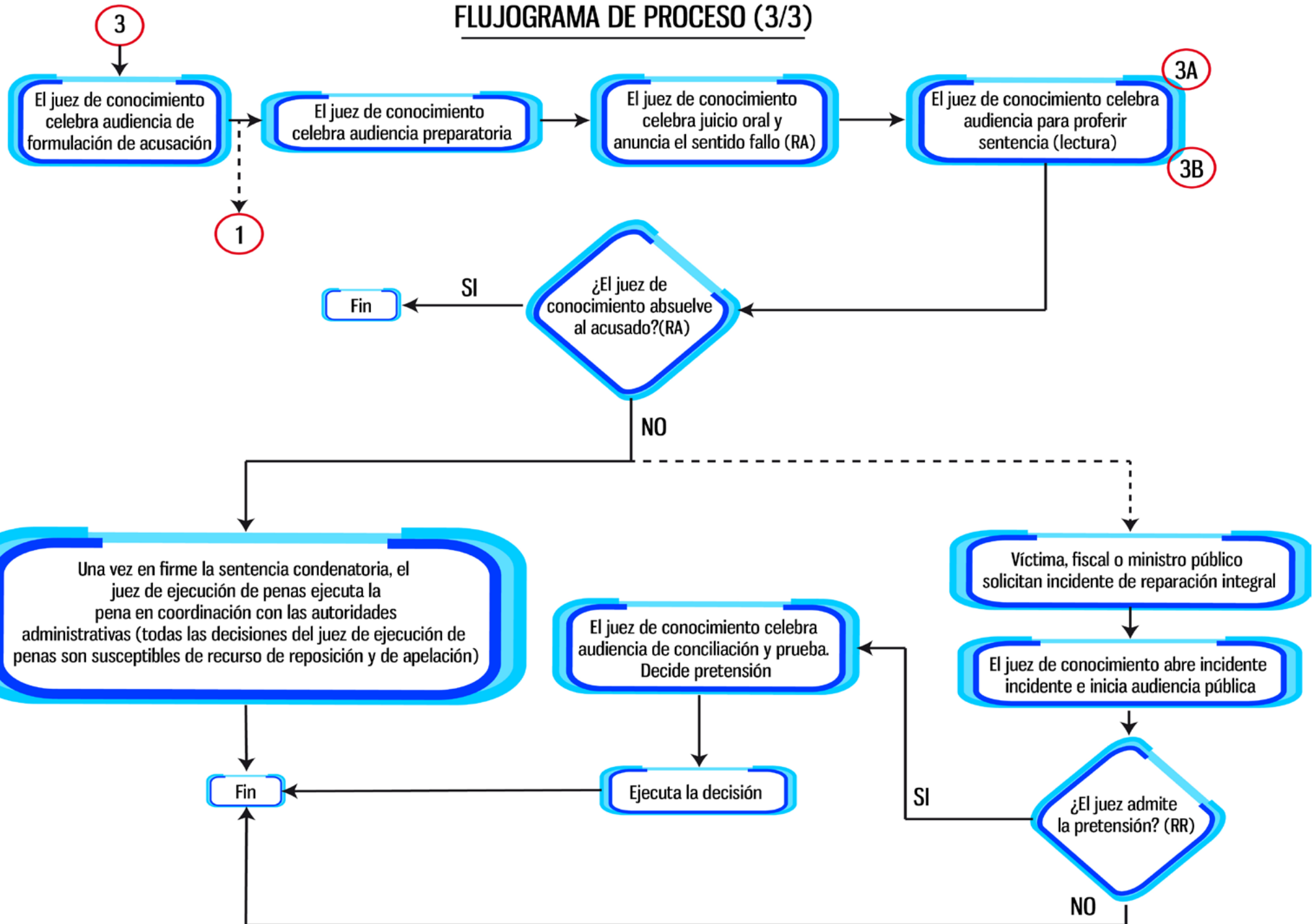


Fiscalía General de la Nación



FLUJOGRAMA DE PROCESO (2/3)

FLUJOGRAMA DE PROCESO (3/3)



BIBLIOGRAFÍA

- AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del proceso penal acusatorio. Fiscalía General de la Nación. 2007. 176 p.
- Corte Constitucional. Sentencia C – 209 del 21 de marzo de 2007. Magistrado ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
- Corte Constitucional. Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006. Magistrado ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
- Defensoría del Pueblo. Proceso Oral en el sistema penal acusatorio colombiano. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2006. 242 p.
- Fiscalía General de la Nación. Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. 2005. 216 p.
- Ley 600 de 2000
- Ley 599 de 2000
- Ley 906 de 2004
- MEDINA RESTREPO, Manuel. El nuevo sistema acusatorio. Círculo de lectores S.A. 2005. 221 p.
- PRIETO VERAT, Alberto José. Esquema del proceso penal en el sistema acusatorio Colombiano. 2004. 10 p.

REMISIÓN A FUENTES COMPLEMENTARIAS

- SERRANO, Over y GARCIA, David. Evolución del sistema penal acusatorio en el marco del derecho germano, anglosajón y colombiano. Revista de derecho y ciencias sociales Misión Jurídica. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 2008.

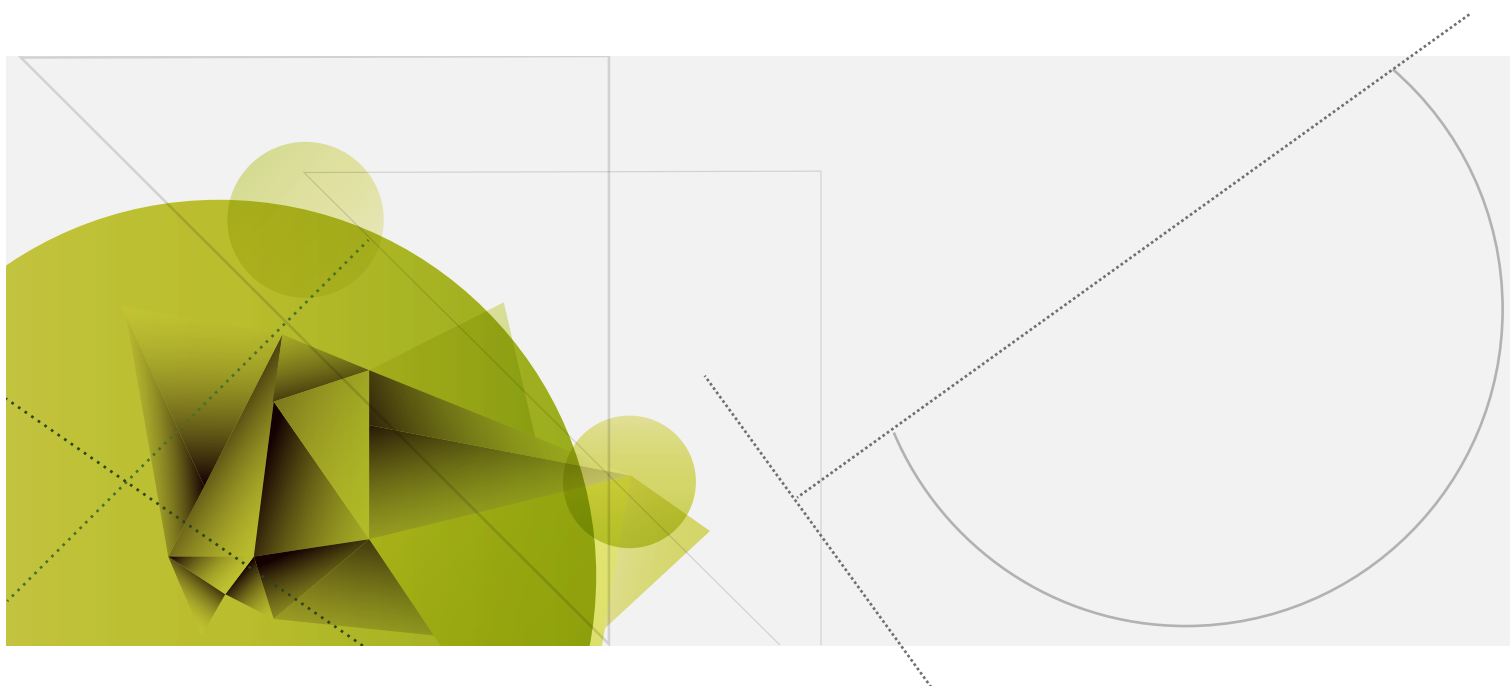
Bibliografía

- **Actualícese.com.** (s.f.). *32 criterios relacionados con el Consejo Técnico de la Contaduría y la Ley 1314 de 2009*. Recuperado de <http://actualicese.com/actualidad/2010/06/21/32-criterios-relacionados-con-el-consejo-tecnico-de-la-contaduria-y-la-ley-1314-de-2009/>
- **Avella Franco, P.O.** (2007). *Estructura del proceso penal acusatorio*, p. 176. Fiscalía General de la Nación.
- **Caicedo Garzón, A.M., & Ramos Muñoz, J.Y.** (2005). *Análisis comparativo del código de ética colombiano, chileno e internacional del contador público*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- **Circular externa No. 115-000011** de la Superintendencia de Sociedades.
- **Circular externa No. 033** del 14 de octubre de 1999.
- **Consejo Técnico de la Contaduría Pública.** (Junio 21 de 2008.). Orientación profesional del ejercicio de la contaduría.
- **Defensoría del Pueblo.** (2006). Proceso Oral en el sistema penal acusatorio colombiano. *Ediciones Jurídicas Andrés Morales*. p. 242.
- **Dr. Córdoba, J. (Junio 7 de 2006). Sentencia C-454. Corte Constitucional.**
- **Dr. Ostau de Lafont, R.** (Octubre 28 de 2010). *Sentencia 00145*. Consejo de Estado, Sección Primera.
- **Fiscalía General de la Nación.** (2005). Manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio Colombiano. p. 216.
- **Junta Central de Contadores.** (Octubre 14 de 1999). *Circular externa No. 033*.
- **Ley 43 de 1990.** Reglamentaria de la profesión de contador público.
- **Ley 222 de 1995.** Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 599 de 2000.**
- **Ley 600 de 2000.**
- **Ley 906 de 2004.**
- **Ley 1314 de 2009.** Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
- **Medina Restrepo, M.** (2005). *El nuevo sistema acusatorio*, p. 221. Círculo de lectores S.A.
- **Peña Bermúdez, J.M.** (2011). Revisoría fiscal. *Una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado*, p. 392. Bogotá: Eoce Ediciones.
- **Prieto Verat, A.J.** (2004). *Esquema del proceso penal en el sistema acusatorio colombiano*, p. 10.

Bibliografía

- **Reyes Oviedo, Á., & De la Hoz Campo, W. (2011).** Todo lo que un contador público debe conocer sobre los aspectos legales de la revisoría fiscal en Colombia. *Aspectos legales de la revisoría fiscal*, p. 188. Barranquilla: Universidad Libre de Colombia,
- **Sentencia C-530 de 2000.**
- **Vásquez, L.A., & Fernández, J.C. (2011).** Empresa y control interno: reflexiones para el entendimiento desde los mecanismos disciplinarios. *Revista Virtual de Estudiantes de Contaduría Pública*. Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewFile/10957/10050>

Esta obra se terminó de editar en el mes de noviembre
Tipografía Myriad Pro 12 puntos
Bogotá D.C.,-Colombia.



AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO